

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría en Derecho Constitucional

**La tutela judicial efectiva como fundamento para el establecimiento de
judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales**

Bélgica Ibana Lara Mafla

Tutora: Angélica Ximena Porras Velasco

Quito, 2021

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional		
	Reconocimiento de créditos de la obra	
	No comercial	
	Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Bélgica Lara, autora del trabajo intitulado “La tutela judicial efectiva como fundamento para el establecimiento de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

11 de enero del 2021

Firma: _____

Resumen

Nuestro país a partir del 20 de octubre del año 2008, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República experimenta notables cambios, pues uno de ellos se considera el surgimiento de nuevas garantías jurisdiccionales para la protección de nuestros derechos, pues las mismas son activadas cuando a las personas se los limita de los derechos garantizados en la norma suprema. Estas garantías jurisdiccionales puntualizadas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son conocidas, tramitadas y resueltas por jueces de primer nivel de cualquier materia y en base al principio de doble instancia, por apelación son conocidas, tramitadas y resueltas por cualquiera de las Salas que conforman las Cortes Provinciales. Hecho, que ha generado serios problemas en la administración de justicia constitucional respecto a las garantías jurisdiccionales, tanto para los jueces, como para los usuarios sean estos legitimados activos o pasivos de las acciones constitucionales, contraviniendo así a la tutela judicial efectiva, la misma que se traduce en el derecho que tienen los ciudadanos para acceder al órgano jurisdiccionales ante un juez, competente, independiente e imparcial obedeciendo al principio de especialidad, que en el proceso judicial se observen las garantías básicas del debido proceso, que se emita una resolución debidamente motivada y que la misma sea ejecutada, pues tanto la sustanciación del proceso como su ejecución deberá realizarse dentro de un plazo razonable. Perú es un país que actualmente se encuentra evolucionando en este tema, pues ya cuenta con judicaturas especializadas en acciones constitucionales, no en todas las provincias, pero si se ha empezado por aquellas donde existe mayor demanda de ciudadanos, este ejemplo puede ser relevante para nuestro país a fin de iniciar el debate sobre la necesidad de que se creen judicaturas especializadas en acciones constitucionales y que también se creen salas especializadas de lo constitucional en las Cortes Provinciales.

Palabras clave: garantía jurisdiccional, tutela judicial efectiva, debido proceso, motivación, ejecución, plazo razonable, especialidad

A mis padres, quienes desde el cielo guían siempre mi caminar en cada etapa,
llenándome de luz y enviándome sus bendiciones.

Agradecimientos

Agradezco a mis hermanos, familiares y amigos, quienes me han brindado su comprensión y apoyo en cada momento, a la Universidad Andina Simón Bolívar y su equipo de profesores que imparten sus conocimientos en excelencia, especialmente a la Dra. Angélica Porras, por compartirme sus conocimientos, por su paciencia, su consideración y sus excelentes palabras de aliento para continuar.

Tabla de contenidos

Figuras y tablas.....	13
Introducción.....	15
Capítulo primero Aspectos generales de la tutela judicial efectiva.....	19
1.Contenido y alcance de la tutela judicial efectiva	19
1.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la tutela judicial efectiva.....	19
1.2. La tutela judicial efectiva en Europa	28
1.3. La tutela judicial efectiva en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador.....	31
1.3.1. Colombia.....	31
1.3.2. Perú.....	36
1.3.3. Ecuador.....	39
2.La tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional	47
2.1.La administración de justicia constitucional	47
2.1.1. Estado Constitucional de derechos y justicia	48
2.1.2. Funcionamiento de las acciones de garantías jurisdiccionales	54
2.2. Tratamientos de la tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional.....	59
2.2.1. La tutela judicial efectiva como principio procesal	59
2.2.2. La tutela judicial efectiva como derecho fundamental	61
Capítulo segundo Dos modelos de administración de justicia en materia de garantías jurisdiccionales: Ecuador y Perú	63
1.Características generales del modelo procesal constitucional en Ecuador.....	63
1.1. La Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional	64

1.2. Principales problemas relacionados a la falta de Judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales	69
2.Características generales del modelo procesal constitucional en Perú.....	77
2.1.La Constitución Política de Perú y el Código Procesal Constitucional.....	77
2.2.Implementación de juzgados especializados en acciones de garantías jurisdiccionales.....	83
Capítulo tercero Hacia la construcción de un modelo de justicia especializada en materia de garantías jurisdiccionales.....	89
1.La justicia constitucional ecuatoriana en números: Quito (2015-2018).....	89
2. Las acciones constitucionales en el año 2018	104
3.Algunos datos estadísticos sobre la justicia constitucional peruana	106
4.Análisis de sentencias sobre garantías jurisdiccionales emitidas por los juzgados de primer nivel	111
Conclusiones.....	119
Bibliografía.....	121

Figuras y tablas

Figura 1. Causas ingresadas año 2015 (2178)	90
Figura 2. Causas resueltas año 2015 (2162)	91
Figura 3. Causas ingresadas año 2016 (1611)	¡Error! Marcador no definido.
Figura 4. Causas resueltas año 2016 (1689)	93
Figura 5. Causas ingresadas año 2017 (1623)	94
Figura 6. Causas resueltas año 2017 (1135)	95
Figura 7. Causas ingresadas año 2018 (1746)	96
Figura 8. Causas resueltas año 2018 (1676)	97
Figura 9. Ingreso de acciones constitucionales 2015-2018	98
Figura 10. Acciones constitucionales resueltas (2015-2018)	102
Figura 11. Reporte del libro de ingreso de procesos 2018 (1308)	105
Figura 12. Carga procesal y procesos resueltos, por órgano jurisdiccional y especialidad	106
Figura 13. Ingreso de causas (Perú 2018)	108
Figura 14. Ingreso de causas (Ecuador 2018)	109
Figura 15. Promedio diario por dependencia de los ingresos y resueltos en trámite por especialidad	110
Tabla 1 Las garantías jurisdiccionales	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2 Causas ingresadas y resueltas en el año 2015	89
Tabla 3 Causas ingresadas y resueltas en el año 2016	91
Tabla 4 Causas ingresadas y resueltas en el año 2017	93
Tabla 5 Causas ingresadas y resueltas en el año 2018	95
Tabla 6 Ingreso de Causas (Perú 2018)	107
Tabla 7 Ingreso de Causas (Ecuador 2018)	108
Tabla 8 Operacionalización de Variables	112

Introducción

Nuestro país a partir del 20 de octubre del año 2008, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República¹ y el modelo de Estado instaurado a partir de dicho momento, denota profundas exigencias con el afán de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, en este sentido, nuestra Constitución incluye a las garantías jurisdiccionales, las cuales son activadas cuando a las personas se los limita de los derechos garantizados en la norma suprema.

Las garantías jurisdiccionales se convierten en mecanismos de protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo tanto, las mismas son activadas ante las diferentes judicaturas de primer nivel en nuestro país y en las diferentes Salas de las Cortes Provinciales, tomando en cuenta que dichas judicaturas y dichas Salas corresponden a cualquier materia, lo cual conlleva a cuestionarnos sobre el cómo estamos garantizando la tutela judicial efectiva en estos procesos y cuan beneficioso puede ser la implementación de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales.

Al verificarse algunos problemas que trae la falta de judicaturas especializadas en acciones de garantías constitucionales, entre ellos: la desnaturalización de las acciones constitucionales, la falta de celeridad en la tramitación de las acciones de garantías jurisdiccionales, la falta de motivación en las sentencias, nos ha permitido establecer que todos estos problemas traen como consecuencia la inobservancia del contenido esencial de la tutela judicial efectiva.

Por tal motivo, se han planteado los siguientes objetivos: 1) Conceptualizar el derecho a la tutela judicial efectiva en Ecuador para determinar cuál es su contenido, alcance y núcleo esencial, 2) Realizar un estudio comparativo con la administración de justicia constitucional de Perú, respecto de la sustanciación de las garantías jurisdiccionales y 3) Determinar, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa el grado de mejora en la protección de la tutela judicial efectiva con el establecimiento de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales.

En virtud de los problemas señalados y de los objetivos planteados se acudirá tanto a jurisprudencia emitida por la Corte IDH y a los instrumentos de carácter internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de

¹ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial 449, Suplemento, 20 de octubre de 2008.

Derechos Civiles y Políticos a fin de determinar el contenido esencial de la tutela judicial efectiva, además se fortalecerá esta investigación con el aporte de Tribunales Europeos respecto de la tutela judicial efectiva y como ésta ha sido apreciada desde su origen, con el aporte investigativo de Rocío Mercedes Oñate, Carles Viver Pi-Sunyer y Héctor López Bofill.

Será necesario también conocer como países de América del Sur, específicamente Perú, Colombia y Ecuador conciben a la institución de la tutela judicial efectiva de manera general. Incluiremos los aportes a través de la Jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional Colombiana, Tribunal Constitucional Peruano y Corte Constitucional del Ecuador. Además, contaremos con apreciaciones doctrinarias respecto al tema materia de investigación de autores como Rocío Mercedes Araujo Oñate, Iván René Cortés Albornoz, Angélica Porras Velasco, Vanessa Aguirre, María Elena Jara Vásquez, Agustín Grijalva Jiménez, Jorge Benavides Ordóñez, entre otros.

Se recurrirá al método dogmático, para recopilar conceptos y criterios de los diferentes autores a fin de justificar la temática planteada. De igual manera, el método comparativo será útil en la presente investigación, ya que se podrá analizar la legislación extranjera y ponerla en comparación con la legislación de nuestro país.

El enfoque será cuantitativo al referirnos a aspectos estadísticos respecto de las acciones de garantías jurisdiccionales tramitadas en Ecuador y Perú, para luego abordar la temática de manera cualitativa, ya que se tomará como base algunas causas de garantías jurisdiccionales tramitadas en nuestro país por jueces de primer nivel de diferente materia, con la finalidad de encontrar suficientes ventajas para mejorar la administración de justicia constitucional, con el establecimiento de juzgados especializados en materia constitucional.

En dicho sentido, en el primer capítulo abordaremos los aspectos generales de la tutela judicial efectiva, partiendo del contenido que ha desarrollado la Corte IDH, por medio de sus instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las sentencias emitidas en los diferentes casos puestos en su conocimiento, que como tenemos entendido nuestro país debe acatar dichas disposiciones por el principio de convencionalidad.

Así también, será necesario conocer como ha sido adoptada la tutela judicial efectiva y su contenido esencial en Europa, tomando en cuenta que el nacimiento de esta institución es gracias a los acontecimientos históricos de esa región. Para luego, abordar

el tema de cómo concibe Latinoamérica a la tutela judicial efectiva, específicamente, en países como Colombia, Perú y Ecuador.

Dentro del primer capítulo también será necesario abordar el funcionamiento de la justicia constitucional en torno a las garantías jurisdiccionales sustanciadas en los juzgados de primer nivel de cualquier materia y en las diferentes Salas de las Cortes Provinciales, partiendo de lo que involucra un Estado constitucional de derechos y justicia y la importancia de las garantías jurisdiccionales. En ese sentido, nos apoyaremos en argumentos que permitan identificar el objeto de las garantías jurisdiccionales, así como también la actuación del juez constitucional frente a las garantías, determinando los diferentes tratamientos de la tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional.

En el segundo capítulo del presente trabajo de investigación realizaremos necesariamente una comparación de dos modelos de administración de justicia en materia de garantías jurisdiccionales, esto es, entre Ecuador y Perú, tomando en cuenta que Perú ha empezado a implementar judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales.

Empezaremos realizando un análisis de las características generales del modelo procesal constitucional en Ecuador y Perú con relación a las garantías jurisdiccionales, verificando además los problemas notorios por la falta de implementación de judicaturas especializadas en acciones de garantías constitucionales en nuestro país y el beneficio que conllevaría la implementación de dichas judicaturas desde la experiencia de Perú.

En el tercer capítulo, demostraremos numéricamente cómo funciona nuestra justicia constitucional con relación a las garantías jurisdiccionales y como también funciona la justicia constitucional traducida en números en Perú, para lo cual nos referiremos a datos proporcionados a partir del año 2018 por parte del Consejo de la Judicatura de nuestro país y por parte del Poder Judicial de Perú.

Se realizará un análisis cualitativo de nuestra justicia constitucional tomando en cuenta algunas causas que han sido seleccionadas de manera aleatoria referente a las garantías jurisdiccionales, con el fin de determinar el cumplimiento o no del contenido esencial de la tutela judicial efectiva.

Por lo tanto, en virtud de los argumentos expuestos en el trabajo de investigación y el análisis de la justicia constitucional en Perú y Ecuador tanto de forma cualitativa como cuantitativa, se concluirá que con la implementación de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales de primer nivel y Salas

especializadas en dicha materia en las diferentes Cortes del país se protegerá el contenido esencial de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos frente a las recurrentes vulneraciones de derechos fundamentales.

Capítulo primero

Aspectos generales de la tutela judicial efectiva

Es importante empezar indicando que la tutela judicial efectiva es un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos dentro de una sociedad determinada, en este sentido, es el Estado el obligado a crear los mecanismos adecuados a fin de que el acceso a este derecho no sea limitado; por cuanto, el mismo proviene de una declaración de voluntad del constituyente plasmado como una necesidad de garantía para que sus derechos dentro de un proceso judicial no sean violentados.

Como consecuencia de ello se tendrá la plena seguridad de que al acceder al órgano jurisdiccional se observarán cada uno de los derechos que amparan a los justiciables desde el inicio mismo del proceso, su desarrollo, conclusión y posterior ejecución de la resolución que emane de la autoridad judicial competente.

En este primer capítulo se desarrollará el contenido esencial y el alcance de la tutela judicial efectiva, como este ha sido desarrollado por la Corte IDH, en Europa y como es concebida en países latinoamericanos como Colombia, Perú y Ecuador.

1. Contenido y alcance de la tutela judicial efectiva

Con la finalidad de conocer el contenido y alcance de la tutela judicial efectiva es necesario empezar analizando las cuestiones que se tomaron en cuenta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una definición de “tutela judicial efectiva” y como dicho término ha sido desarrollado tanto por la doctrina y la jurisprudencia por países pioneros en el continente europeo y como han sido adoptados por estados latinoamericanos como Colombia, Perú y Ecuador.

1.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la tutela judicial efectiva

La Corte IDH en varias de sus sentencias ha desarrollado el contenido de la tutela judicial efectiva a la luz de lo indicado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantías judiciales y protección judicial respectivamente), los

cuales nos aproximan a entender el deber ser del funcionamiento de la justicia en los diferentes Estados, los mismos que se encargarán de implementar mecanismos adecuados para que los contenidos de estas disposiciones sean efectivizados.

Con relación a la Tutela judicial efectiva el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.²

A partir de la norma antes citada entendemos entonces que, los Estados deben garantizar de manera efectiva no solamente el derecho a ser escuchados por los órganos de administración de justicia, sino que deberán observarse otros derechos conexos a esta institución como los derechos del debido proceso y de seguridad jurídica.

De igual manera deberá tomarse en cuenta los principios que dirigen la administración de justicia en las diferentes materias, pues los Estados adoptan estas disposiciones independientemente del sistema procesal que se haya implementado. Lo importante es que se creen mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos de los justiciables y que estos no se vean amenazados.

Mientras que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye otros elementos para complementar el derecho a la tutela judicial efectiva, indicándose lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.³

² ONU Asamblea General, *Convención Americana de Derechos Humanos*, 22 de noviembre de 1969.

³ *Ibíd.*

Entonces, partiendo de lo indicado por la Convención Americana de Derechos Humanos, proponemos una aproximación de la definición de “ tutela judicial efectiva “, señalándola como un derecho fundamental para los seres humanos, que trae consigo la confianza del justiciable ante la administración de justicia de que sus derechos no van a ser violados durante el proceso puesto en marcha hasta su conclusión y posteriormente su ejecución en un tiempo razonable y que además se deberá contar con los recursos adecuados para el reclamo de nuestros derechos ante la autoridad judicial competente.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, tomando en cuenta el principio de igualdad y no discriminación, nos precisa: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil [...]”.⁴

Si bien es cierto, la tutela judicial efectiva es un derecho sumamente complejo ya que involucra el contenido de otros derechos que deberán ser tomados en cuenta en un proceso judicial, sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que los organismos internacionales hayan delimitado su contenido esencial, a fin de que también los Estados sigan desarrollando este contenido en estricta observancia de precautelar el desarrollo progresivo de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental.

En este sentido, la Corte IDH a través de sus sentencias y opiniones consultivas insta a los Estados que hayan aceptado su competencia a tomar en cuenta en su ordenamiento jurídico y demás actuaciones estatales las consideraciones que de este órgano internacional de justicia emerjan, con el fin de precautelar los derechos fundamentales de todas las personas, en virtud del control de convencionalidad y bloque de constitucionalidad.

A fin de delimitar el término *tutela judicial efectiva*, tomando en cuenta lo manifestado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte IDH se ha pronunciado en algunas de sus sentencias, instando a los Estados la protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

⁴ ONU Asamblea General, *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, 23 de marzo de 1976.

En virtud de ello, la Corte IDH, en el Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, reafirmó el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuál es el alcance del derecho a ser oído, indicando:

Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido.⁵

No obstante, debemos indicar que el hecho de que existan órganos jurisdiccionales para el ejercicio de administrar justicia no complementa la protección del derecho a la tutela judicial efectiva, pues se deben crear mecanismos totalmente idóneos para que la ciudadanía haga efectivo el reconocimiento de sus derechos. Al respecto la Corte IDH, a través de su Opinión Consultiva OC-9/87 Garantías Judiciales del 6 de octubre de 1987, indica:

La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.⁶

Si no se garantiza la efectividad del recurso o en general de las acciones judiciales que los Estados hayan previsto en el ordenamiento jurídico para que el ciudadano reclame sus derechos, nos encontraríamos frente a un total desconcierto de la administración de justicia, se pierde el sentido mismo de la existencia de dicha función y más aún los derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentran en un grave riesgo de ser

⁵ Corte IDH, “Sentencia de 13 de octubre del 2011 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay 13 de octubre de 2011, párr. 122

⁶ Corte IDH, “Opinión Consultiva de 6 de octubre de 1987 (Serie A: Fallos y Opiniones No. 9)”, 6 de octubre de 1987, párr. 24, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf?view=1>

vulnerados. En igual sentido la Corte IDH, en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, señala:

El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido, en otras oportunidades, que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial son "verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación"¹⁸⁸. De este modo, la Corte ha declarado que "la inexistencia de un recurso efectivo contra la violación de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la Convención por el Estado Parte en el cual ocurre esta situación."⁷

En tal virtud, la tutela judicial efectiva viene a configurarse como el derecho a ser oído, el mismo que se pone de manifiesto cuando la ciudadanía tiene los suficientes mecanismos adecuados para formular sus pretensiones ante la autoridad judicial competente y a la vez se compromete con la certeza que tiene el ciudadano de que sus pretensiones serán escuchadas en apego a las garantías básicas del proceso.

Es necesario precisar que el derecho a ser oído no necesariamente constituye que las pretensiones formuladas por el accionante sean aceptadas, ya que el Juez tendrá la capacidad plena para escuchar a la contraparte y decidir conforme a los hechos mencionados por ambos sujetos, y conforme el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, el negar una acción motivadamente no necesariamente constituye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

En el Caso Bayarri Vs. Argentina, la Corte IDH, señaló: "el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso en forma que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos [...]."⁸ En este sentido, la tutela judicial efectiva aparece como un mandato al sistema judicial de los Estados para que los

⁷ Corte IDH, "Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)", Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, 28 de noviembre de 2007, párr. 177, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf.

⁸ Corte IDH, "Sentencia de 30 de octubre de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)", Caso Bayarri vs. Argentina, 30 de octubre de 2008, párr. 120, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf.

procesos sigan su curso sin ninguna clase de limitaciones que atenten contra los derechos fundamentales de las personas.

Por otro lado, la Corte IDH vincula al debido proceso con la tutela judicial efectiva expresándose en el caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, de la siguiente manera: “[...]el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia [...]”,⁹ en este orden, la Corte ya establece como elemento que integra la tutela judicial efectiva al debido proceso, argumento del cual se deduce, que tutela judicial efectiva y debido proceso son términos distintos que se relacionan y ambos tienen un mismo fin que es la protección también de los derechos fundamentales de los justiciables ante la administración de justicia.

A fin de relacionar el derecho de acceso a la justicia y debido proceso la Corte IDH, en el caso Cantos Vs. Argentina, mencionando lo estipulado en el artículo 8.1 de la convención, estima:

Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.¹⁰

Son los Estados los encargados de eliminar cada barrera que impida el acceso de las personas a la justicia; pues, de manera reiterativa se ha señalado la obligatoriedad que tienen los Estados de amparar los derechos fundamentales de cada ciudadano. La materialidad del derecho de acceso a la justicia se verá plasmada entonces en los resultados del engranaje creado por cada Estado, para garantizar a todas las personas sin excepción alguna el acceso a la justicia.

Otro elemento esencial de la tutela judicial efectiva que desarrolla la Corte IDH es el relacionado a la fase de ejecución de lo resuelto por el órgano jurisdiccional, pues al respecto en el caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, la Corte IDH indica lo siguiente:

⁹ Corte IDH, “Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, 30 de mayo de 1999, párr. 128, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf

¹⁰ Corte IDH, “Sentencia de 5 de julio de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso Cantos Vs. Argentina, 28 de noviembre del 2002, párr. 50, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf.

El principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia.¹¹

Igual criterio la Corte IDH mantuvo en el caso *Furlan y familiares Vs. Argentina*, estableciéndose que de igual manera la falta de ejecución de las decisiones judiciales tiene vinculación directa con la tutela judicial efectiva para la ejecución de los fallos internos¹². Es decir, que dentro del contenido de la tutela judicial efectiva se encuentra la etapa de ejecución de las decisiones del órgano judicial competente, ya que de nada le serviría al justiciable haber tenido una decisión suficientemente motivada en base a sus pretensiones, si la misma no se hace efectiva el órgano jurisdiccional se encontraría ejerciendo su potestad vagamente.

En el caso “Cinco Pensionista” vs Perú, la Corte IDH, también claramente trae a colación el tema de la ejecución de las decisiones judiciales, indicándose lo siguiente:

Los cinco pensionistas denunciaron penalmente a los agentes estatales responsables del incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que fueran investigados y sancionados por el incumplimiento. Sin embargo, “los recursos penales fueron ineficaces para reparar el derecho de los pensionistas a que se cumplan las sentencias que los favorecen, con lo cual se violó el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 8.1 y 25 de la Convención”¹³.

Por lo tanto, la tutela judicial efectiva es un derecho que ampara al ciudadano desde el hecho mismo del establecimiento de órganos jurisdiccionales, capaces de lograr una administración de justicia efectiva en las diferentes materias, hasta la materialización de la contienda sometida a la decisión de los Tribunales, es decir, su ejecución, de manera

¹¹ Corte IDH, “Sentencia de 5 de julio de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso *Mejía Idrovo Vs. Ecuador*, 5 de julio de 2011, párr. 106, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf

¹² Corte IDH, “Sentencia de 31 de agosto del 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso *Furlan y familiares vs. Argentina*, 31 de agosto del 2012, párr. 149, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf.

¹³ Corte IDH, “Sentencia de 28 de febrero del 2003 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso “Cinco Pensionistas” vs Perú, 28 de febrero del 2003, párr. 123, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf.

rápida, sin dilaciones y por medio de mecanismos eficaces capaces de hacer cumplir dicha decisión emanada de autoridad competente.

Con relación a lo afirmado, la Corte IDH en el Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, ha señalado lo siguiente: “la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas [...]”.¹⁴ Sin embargo, es necesario mencionar que el servicio de administración de justicia se vuelve inefectivo al no tomar en cuenta los plazos y términos fijados para la sustanciación de las causas, desde el inicio del proceso hasta su finalización, incluyendo la ejecución de la decisión judicial, lo cual involucra que las autoridades judiciales deberán aplicar los términos y plazos establecidos para la tramitación de las causas, a fin de precautelar el amparo directo del acceso a la justicia.

Al respecto, la Corte IDH, analiza lo siguiente en el Caso Fornerón e hija Vs. Argentina indicando lo siguiente: “La denegación del acceso a la justicia tiene una relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el cual no se resuelve el litigio planteado por una demora injustificada en el procedimiento, pueda ser considerado como un recurso efectivo [...]”.¹⁵ Claro está entonces, que existe vulneración a la tutela judicial efectiva cuando las causas no han sido sustanciadas en los términos y plazos fijados por la Constitución y las leyes.

En consecuencia, el plazo razonable viene a constituir de igual manera una arista de la tutela judicial efectiva, conforme lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el mismo que debe ser comprendido desde la tramitación de la causa con todas sus etapas hasta su finalización y ejecución de la misma, ya que no sería justo que, una vez logrado el reconocimiento del derecho para el peticionario por parte de la autoridad competente, este tenga que esperar un período largo de tiempo para lograr el objeto mismo que le impulsó a proponer la acción.

Asimismo la Corte IDH, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia, señaló: “respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo

¹⁴ Corte IDH, “Sentencia de 7 de febrero del 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso Acevedo Jaramillo y Otros Vs Perú, 7 de febrero del 2006, párr. 216, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_144_esp.pdf.

¹⁵ Corte IDH, “Sentencia de 27 de abril de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso Fornerón e hija vs Argentina, 27 de abril del 2012, párr. 110, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf.

8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales [...]”.¹⁶ La Corte IDH igual criterio ha mantenido en casos como: Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, Favela Nova Brasilia Vs. Brasil.

Dentro del contenido del plazo razonable encontramos entonces que el mismo depende de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado (principio dispositivo de las partes) y la conducta de las autoridades judiciales, estos componentes servirán entonces de parámetros para determinar la vulneración del principio de plazo razonable como arista de la tutela judicial efectiva en la tramitación de un proceso.

Sin embargo, consideramos que no podemos aislar del principio de plazo razonable a la fase de ejecución, ya que como se indicó en líneas anteriores, la decisión que emita el órgano jurisdiccional competente deberá ser fundada y efectiva, es decir, que la misma pueda ser materializada y sus efectos puedan ser reales.

En el voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade en el Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú¹⁷ se expone claramente como no se puede tratar de manera aislada la etapa de ejecución de los procesos. En este sentido, el plazo razonable sería también aplicable a la fase de ejecución, considerando los mismos parámetros de verificación (complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales) frente a la ejecución de la decisión que se emita, en caso de que dicha decisión contenga algún tipo de reparación para una de las partes procesales, tal como lo indica la Corte IDH, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, que en su parte pertinente expresa: “ El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por si misma, una violación de las garantías judiciales [...]”.¹⁸

Bajo los criterios marcados por la misma Corte IDH definiríamos a la tutela judicial efectiva como un derecho mayor, investido de otros derechos que se

¹⁶ Corte IDH, “Sentencia de 15 de septiembre de 2005(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Caso “Masacre de Mapiripán vs Colombia, 15 de septiembre de 2005, párr. 217, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf.

¹⁷ *Ibíd.*

¹⁸ Corte IDH, “Sentencia de 1 de febrero del 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, López Álvarez vs Honduras, 1 de febrero del 2006, párr. 128, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf.

encaminan a lograr que los ciudadanos tengan acceso a la justicia, en observancia de normas previamente fijadas y reglas relativas al debido proceso de las partes procesales, ante autoridades judiciales competentes e independientes, capaces de dar respuestas fundadas en derecho a los ciudadanos y ejecutar de manera efectiva y eficaz estas decisiones tomando en cuenta la razonabilidad del plazo.

Una vez realizado el análisis de la Corte IDH frente al derecho de acceso a la justicia, se hace necesario realizar un análisis de la doctrina y jurisprudencia de algunos estados parte, a fin de conocer cómo estos han desarrollado el contenido esencial de la tutela judicial efectiva, apegados a los diferentes criterios que ha mantenido la Corte IDH en sus resoluciones.

1.2. La tutela judicial efectiva en Europa

No podemos dejar de lado el antecedente crucial de la tutela judicial efectiva en los Tribunales Europeos. En la década de 1940 poco importaban los derechos fundamentales de las personas en dichos territorios, nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, episodio de la historia que llevó consigo la vulneración progresiva de los derechos innatos al ser humano. Situación que como ventaja al finalizar generó la gran conciencia de los Estados en la creación de uno u otro mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los mismos que debieron ser totalmente eficaces.

Bajo esta premisa nace la tutela judicial efectiva como lo explica Rocío Mercedes Oñate: “con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ha querido el derecho europeo, seguido por los organismos internacionales de la Comunidad Europea, ampliar la esfera de garantías de los derechos e intereses legítimos de las personas [...]”.¹⁹

Al igual que todos los derechos, la tutela judicial efectiva nace como una necesidad de protección del ciudadano frente al poder estatal, a la vez como una respuesta del deber del Estado de proteger los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido, la tutela judicial efectiva viene a convertirse en un reto para los estados europeos, que bien pudo haber desaparecido por el autoritarismo que en aquella época predominaba, o bien seguirse ampliando en contenido como hasta la actualidad. De igual manera, Rocío Mercedes Oñate, indica como antecedente lo siguiente:

¹⁹ Rocío Mercedes Araújo Oñate, “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, *Estudios Sociojurídicos* 13, n.º 1 (2011): 258, <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1513>.

La Ley Fundamental de Bonn de 1949, en su artículo 19 (IV), estableció el derecho fundamental individual a la tutela judicial efectiva, considerado como un derecho general de libertad y como la coronación del Estado de derecho, pues comprende el derecho procedimental básico cuyo propósito principal fue ampliar el conjunto de garantías procesales, es decir el derecho de acceso a la jurisdicción y el debido proceso para comprender la justiciabilidad de los conflictos que se originan entre los ciudadanos y los poderes públicos, y con ello el control judicial efectivo frente al ejercicio del poder público, principalmente de la administración, con lo cual el derecho a la tutela judicial efectiva en Alemania se dirige principalmente a enjuiciar la actuación administrativa, mientras que los litigios que se deducen de las relaciones jurídicas privadas y de los procesos penales se fundan en la cláusula del Estado de Derecho.²⁰

Diremos entonces que en Alemania la tutela judicial efectiva nace como una garantía de carácter fundamental para proteger a las personas frente a los abusos del poder estatal, para después comprender en su contenido a las relaciones jurídicas entre los particulares. Se afirma entonces que la tutela judicial efectiva abarca el derecho de acceso a la jurisdicción y debido proceso que le corresponde a los justiciables frente a un proceso judicial.

El contenido de la tutela judicial efectiva ha sido desarrollado también en gran abundancia por el Tribunal Constitucional español, dotándole a este derecho de numerosos atributos, a partir de que la Constitución española de 1978 en su artículo 24 estableció:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

²¹

La Constitución española nos demuestra que el derecho de acceso a la justicia no solo constituye el acudir al órgano jurisdiccional con la finalidad de reclamar el reconocimiento de un derecho que ha sido violentado, sino también nos permite

²⁰ *Ibíd.*, 259.

²¹ España, *Constitución Española*, Agencia Estatal de Boletín del Estado, 29 de diciembre de 1978, art. 24.

comprender que la tutela judicial efectiva desde sus inicios se encuentra ligado a otros derechos como son los del debido proceso. Indicándonos entonces, que tutela judicial efectiva y debido proceso coexisten a la vez, y como consecuencia de ello, se llegue a obtener una respuesta totalmente fundada en las pretensiones de las partes procesales. Al respecto, Francisco Chamorro Bernal, plantea lo siguiente:

a partir del art. 24.1, el concepto tutela judicial efectiva supuso una auténtica revolución en el ámbito jurídico y en especial en el derecho procesal, todo ello a lo largo de un paciente desarrollo jurisprudencial que ha determinado el ámbito de las garantías constitucionales derivadas de este derecho, haciendo “chirriar” muchas veces las estructuras mismas de la administración de justicia.²²

El autor reconoce que a partir de lo indicado en el artículo 24.1 de la Constitución Española de 1978, surgen valiosos precedentes que van configurando los elementos esenciales de la tutela judicial efectiva en el ámbito procesal y a la vez en el ámbito constitucional, lo cual generará obligatoriamente notables cambios en la administración de justicia, ya que se deberá optar por mecanismos adecuados para que esta actividad estatal se encargue de precautelar la vigencia de la tutela judicial efectiva.

Respecto de las actuaciones del Tribunal Constitucional español con relación a la tutela judicial efectiva, Carles Viver Pi-Sunyer y Héctor López Bofill, señalan:

debe destacarse que el TC, al referirse al contenido del art. 24. 1 CE, ha identificado de modo reiterado hasta nueve “derechos” o, como también los califica a veces, nueve “vertientes” distintos de ese derecho genérico a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Son los siguientes: derecho a acceder a la jurisdicción, a acceder a los recursos, a obtener una respuesta (congruente, motivada y fundada en Derecho) respecto de las cuestiones sustantivas o de fondo planteadas, derecho a obtener una respuesta no viciada de incongruencia por exceso o por error sobre esas cuestiones de fondo, derecho a que las resoluciones judiciales no introduzcan reformas peyorativas, a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, a la intangibilidad de las resoluciones judiciales, a no sufrir indefensión y, finalmente, derecho a la garantía de la indemnidad.²³

A partir del artículo 24 de la Constitución española se han desarrollado otros derechos que constituyen especificidades del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, una vez más queda determinado que la tutela judicial efectiva no solo constituye el acceso al órgano jurisdiccional, también incluyen derechos que asisten a los justiciables

²² Francisco Chamorro Bernal, *La tutela judicial efectiva* (Barcelona, Bosch. 1994), 4.

²³ Carles Viver Pi- Sunyer, Héctor López Bofill, “Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión”, en *Jurisdicción constitucional y jurisdicción en el recurso de amparo*, ed. Tirant Lo Blanch (Valencia, ESP: Editorial Tirant Lo Blanch, 2006), 23.

en todo el el proceso: inicio, durante y finalización. Sin embargo, debe incluirse como parte de él a la ejecución de la resolución emanada de dicho órgano jurisdiccional.

La tutela judicial efectiva como un derecho general constituye en sí el fundamento mismo de los derechos específicos que de ella se derivan y vienen a constituir sus elementos propios. Por lo tanto, cualquier trasgresión a estos derechos (acceso al órgano jurisdiccional, contar con los recursos adecuados para el reclamo de nuestros derechos, observancia de los derechos del debido proceso, decisión fundada y ejecución de la misma) produciría también vulneración de la tutela judicial efectiva.

En tal sentido, el antecedente visible del surgimiento de la tutela judicial efectiva con todos sus componentes es la Constitución española de 1978 y la jurisprudencia que emana a partir del establecimiento de este derecho como fundamental para los justiciables ante la administración de justicia.

1.3.La tutela judicial efectiva en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador

Para el presente tema, empezaremos resaltando el notable trabajo que ha realizado la Corte Constitucional de Colombia respecto de la configuración de la tutela judicial efectiva, partiendo de los contenidos desarrollados tanto por la Corte IDH y por los Tribunales europeos, que como anotamos en páginas anteriores son los pioneros en delimitar el contenido esencial de la tutela judicial efectiva.

De manera general se explicó que la tutela judicial efectiva ha sido concebida como un derecho fundamental, partiendo de lo manifestado por la Convención Americana de Derechos Humanos y los argumentos esgrimidos de las sentencias que la Corte IDH ha emitido. En este sentido, es muy necesario resaltar que los países como Colombia, Perú y Ecuador deben tomar en cuenta cada uno de los argumentos emitidos por la Corte IDH respecto de la tutela judicial efectiva a fin de precautelar su contenido esencial.

1.3.1. Colombia

La Constitución Política de Colombia es clara al señalar en su artículo 229 que: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado [...]”,²⁴ a partir

²⁴ Colombia, *Constitución Política de Colombia*, Gaceta Constitucional, 4 de julio de 1991, art. 229.

del establecimiento del presente artículo el Estado se encargará de desarrollar el significado de “acceder a la justicia”, y qué trae consigo este derecho; es decir, la obligación estatal de garantizar este derecho en condiciones de igualdad para todas las personas.

Por otro lado, el Código General de Procesos en su artículo 2 respecto del acceso a la justicia, precisa lo siguiente: “Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado.”²⁵

De la norma señalada se colige que el acceso a la justicia en el Estado colombiano se encuentra enfocado en el respeto de los derechos del debido proceso y se resalta el tema de la razonabilidad de la duración del proceso; por lo tanto, la vulneración de los términos o plazos dentro de un proceso también constituyen violación de la tutela judicial efectiva.

Cabe resaltar que el Estado colombiano insistentemente hace énfasis en la obligatoriedad que tiene la autoridad judicial de observar el contenido del derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, señalando que la omisión de este deber trae consigo una sanción; por lo que, el estado colombiano hace un llamado a la administración de justicia con relación a la importancia de este derecho, el mismo que debe ser garantizado sin excepción alguna

De la lectura de las normas tanto constitucional como legal relativa al acceso a la justicia colombiana, la Corte Constitucional irá generando mayor contenido al respecto, argumentando lo siguiente:

El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio.²⁶

²⁵ Colombia, *Código General de Procesos*, Diario Oficial 48489, 12 de julio de 2012, art.2.

²⁶ Colombia Corte Constitucional República de Colombia, “Sentencia”, C-318/98, 30 de junio de 1998, 1.

Como podemos observar al indicar que es un derecho de carácter prestacional, la Corte Constitucional de Colombia se encuentra otorgándole la responsabilidad al Estado colombiano de precautelar el derecho a la tutela judicial efectiva sin limitación alguna, a fin de que las personas puedan acudir al órgano jurisdiccional a exigir sus derechos en condiciones de igualdad. Entendemos entonces, que el órgano jurisdiccional al cual acuden los ciudadanos al reclamo de sus derechos son los representantes estatales que deberán cubrir esta garantía.

Otra observación respecto de la sentencia C-318, es que se le otorga la potestad al legislador para que proceda a configurar este derecho y establecer los mecanismos adecuados para que la ciudadanía acceda al mismo.

En términos procesales específicos diremos que el legislados por medio de la Ley será el encargado de establecer los requisitos a fin de que el accionante pueda promover su pretensión de acuerdo a la materia en la cual se configure el derecho que se reclama teniendo como limite la Constitución, puesto que como indicamos, la Constitución Política entiende a la tutela judicial efectiva como un derecho de carácter general (acceso a la justicia).

En este sentido, tomando como referencia lo antes mencionado diríamos que los elementos constitutivos de la tutela judicial efectiva para el Estado colombiano serían entonces:

- Obligatoriedad estatal (derecho prestacional)
- El acceso a un juez o tribunal independiente e imparcial en igualdad de condiciones sin limitaciones.
- El derecho de obtener una sentencia en un plazo razonable, debidamente motivada y que esta se cumpla.

La Corte Constitucional colombiana cataloga a la tutela judicial efectiva para el individuo como:

Una necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, y se daría paso a la primacía del interés particular sobre el general, contrariando postulados básicos del modelo de organización jurídica-política por el cual optó el Constituyente de 1991.²⁷

²⁷ Colombia Corte Constitucional República de Colombia, “Sentencia”, T-476/98, 8 de septiembre de 1998, 24.

La tutela judicial efectiva para el Estado colombiano viene a constituirse en un derecho fundamental, que permite que el individuo pueda resolver sus controversias generadas por el desenvolvimiento de la vida en sociedad, así se establece de igual manera como finalidad la convivencia armónica de los ciudadanos.

De la misma manera, la Corte Constitucional de Colombia le otorga a la tutela judicial efectiva el carácter de fin del Estado Social de Derecho, al indicar:

El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.²⁸

Como derecho fundamental, la tutela judicial efectiva en Colombia viene a constituir el fundamento mismo de un Estado Social de Derecho; por cuanto, permite que todos los ciudadanos acudan a los administradores de justicia a fin de que se reconozcan sus derechos, es decir se haga justicia ante las diferentes controversias que surgen producto de la vida en sociedad, lo cual permite recobrar la confianza de los ciudadanos en la actividad judicial, por qué no decirlo en la justicia.

La Corte Constitucional colombiana también ha sido enfática al resaltar la obligatoriedad y responsabilidad que tiene el Estado frente a sus ciudadanos de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, así de igual manera en la sentencia T-247/07, se indica lo siguiente: “El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo[...]”,²⁹ entonces el acceso a la justicia para el Estado colombiano es un servicio público y por ende el mismo debe ser garantizado para todos sus ciudadanos.

Con relación a las consideraciones expuestas de la tutela judicial efectiva en Colombia, la autora Rocío Mercedes Araújo Oñate indica:

²⁸ Colombia Corte Constitucional República de Colombia, “Sentencia”, C-279/13, 15 de mayo del 2013, 1.

²⁹ Colombia Corte Constitucional República de Colombia, “Sentencia”, T-247/07, 10 de abril de 2007, 16.

Además de recoger las garantías que imponen la plenitud de las garantías procesales y que tienden a proteger al ciudadano frente al trámite procesal de la causa, que se resumen en el derecho de acceso a la justicia, en el debido proceso y en el derecho a la defensa, a más de estos derechos, constituye un mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales.³⁰

Entonces, el contenido de la tutela judicial efectiva en Colombia se entendería que es extendida como un mandato de carácter obligatorio para las demás entidades estatales, en un sentido de promoción de la protección de los derechos fundamentales y a la vez se entendería que cada elemento que constituye la tutela judicial efectiva deberían ser considerados por cada entidad en el margen de sus actuaciones, ya que como nos muestra la autora antes mencionada no solo constituye mandato constitucional para la función judicial. Por otro lado, Iván René Cortés Albornoz, respecto de la tutela judicial efectiva, precisa lo siguiente:

No puede existir duda alguna de que se trata de un derecho fundamental, no consagrado explícitamente en la Carta Política, pero en desarrollo de los mismos postulados el Alto Tribunal Constitucional le ha atribuido características propias de un derecho fundamental, por pertenecer al núcleo esencial de algunos derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, tales como el derecho a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y por estos, pertenecer recíprocamente al núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 229; el derecho del acceso a la justicia encuentra su mayor relevancia como derecho fundamental, declarado como tal por la jurisprudencia constitucional colombiana, al estar íntimamente ligado al núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, consagrado como tal en el artículo 29 constitucional.³¹

En Colombia también se reconoce a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental, aunque como el autor bien lo indica el mismo no se encuentra de manera clara detallado en la Constitución, no obstante, la Corte Constitucional de Colombia se ha encargado del desarrollo del contenido de este derecho, como se ha mencionado en líneas anteriores partiendo de la consagración del acceso a la justicia y los derechos del debido proceso en la Constitución de dicho Estado.

³⁰ Rocío Mercedes Araújo Oñate, “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, **Estudios Socio-Jurídicos**, n.o 1 (2011): 248-291, <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/viewFile/1513/1409>.

³¹ Iván René Cortés Albornoz, “El acceso a la justicia a la luz del Estado social de Derecho en Colombia”, *Revista Científica Gen. José María Córdova*, n.o 16 (2015): 81-103, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v13n16/v13n16a05.pdf>.

El autor marcando la relevancia del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, le otorga igual valor y sentido que otros derechos fundamentales inherentes al ser humano detectando así la relevancia de este derecho.

Otra observación que indicamos al respecto es que el Estado colombiano lo concibe como un derecho que se encuentra relacionado con el debido proceso lo cual consideramos que es coherente, ya que los derechos del debido proceso constituyen aquellas garantías mínimas a favor del justiciable frente al proceso. Pero no diríamos que la tutela judicial efectiva pertenece o constituye contenido esencial del debido proceso, sino de manera viceversa que el debido proceso constituye contenido esencial de la tutela judicial efectiva por como este derecho se manifiesta en virtud de lo dicho hasta ahora.

1.3.2. Perú

Partiendo de lo manifestado en la norma constitucional, el Estado peruano con relación a la tutela judicial efectiva, la establece como un principio y a la vez derecho de la administración de justicia determinado en el artículo 139, numeral 3, señalándose lo siguiente:

Son principios y derechos de la función jurisdiccional. 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.³²

Como podemos observar, la “tutela jurisdiccional efectiva” o “tutela judicial efectiva” se expresa como parte de los lineamientos que dirigen la función judicial del Estado Peruano, lo cual a *prima facie*, no se le estaría dando la importancia que merece como derecho fundamental, ya que todos los principios que se mencionan en el artículo 139 de la mencionada Constitución forma parte del núcleo duro que constituye la tutela judicial efectiva como derecho inherente al individuo.

En lo que sí nos permanecemos claros es en el mandato obligatorio hacia la función judicial de respetar este derecho, entendido en términos de igualdad para los ciudadanos, a fin de que todas sus actuaciones durante el proceso no transgredan o limiten el acceso a la justicia y hacer valer sus pretensiones.

³² Perú, Constitución Política, “El Peruano “, 29 de diciembre de 1993, art. 139.3.

Sin embargo, en el Código Procesal Civil peruano, artículo 1, se ha establecido: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.³³ De esta norma se logra colegir la relación que ha establecido el Estado peruano entre la tutela judicial efectiva y debido proceso, se infiere entonces, que el debido proceso forma parte importante del contenido esencial de la tutela judicial efectiva.

De igual manera, ha sido bastante interesante el desarrollo jurisprudencial de la tutela judicial efectiva por parte del Tribunal Constitucional peruano, tal es el caso que en la sentencia del expediente N.º 763-2005-PA/TC, se determina su contenido de la siguiente manera:

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia.³⁴

Como podemos observar el contenido de la tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional efectiva se encuentra enfocado en:

- Acceso al órgano jurisdiccional de los justiciables sin limitaciones
- Lo resuelto deberá ser eficazmente cumplido

Por otro lado, en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional de Perú, respecto de la tutela judicial efectiva, también señala lo siguiente: “[...] el derecho a la tutela judicial efectiva que supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción[...],”³⁵ es decir que la tutela judicial efectiva es el fin mismo de la jurisdicción, ya que no se trata de que se garantice simplemente el acceso al órgano

³³ Perú, Código Procesal Civil, “El Peruano”, 22 de abril de 1993, art.1.

³⁴ Perú, Tribunal Constitucional, “Sentencia”, 763-2005-PA/TC, 13 de abril del 2005, 4.

³⁵ Perú, Tribunal Constitucional, “Sentencia”, 05728-2015-PA/TC, 20 de diciembre de 2017, 5.

jurisdiccional, sino también la efectividad de la jurisdicción y esta efectividad deberá entonces basarse en principios que coadyuven a la protección del derecho a la tutela judicial efectiva.

Para lograr comprender el derecho a la tutela judicial efectiva, será necesario comprender al derecho de acción. Desde nuestro punto de vista, el derecho de acción vendría a encuadrarse como un elemento constitutivo de la tutela judicial efectiva enfocado a contenidos procesalistas. No obstante, para el Estado peruano tutela judicial efectiva es sinónimo de derecho de acción, en este sentido, Luis Marcelo de Bernardis, señala: “[...] el derecho de acción constituye un derecho público subjetivo, el derecho de todos los justiciables para poner en marcha el aparato jurisdiccional para a través suyo acceder a un proceso, un debido proceso, donde se determine la tutela de los derechos invocados con justicia y equidad [...]”.³⁶

No cabe duda que el derecho de la acción mueve el aparato jurisdiccional, en sí la razón de ser de la jurisdicción vendría a ser el derecho de acción, aunque consideramos que este debería entenderse como la capacidad que tiene el individuo de presentar sus pretensiones enfocadas al reconocimiento de derechos y obligaciones por la vulneración de derechos ante el órgano jurisdiccional, por lo tanto, consideraríamos al derecho de acción como parte de la tutela judicial efectiva y no situaciones sinónimas.

Por otro lado, resaltamos la categoría de derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, el autor Luiz Guilherme Marinoni, señala:

Tal derecho no podría dejar de ser concebido como fundamental, toda vez que el derecho a la prestación jurisdiccional efectiva es consecuencia de la propia existencia de los derechos y, de este modo, la contrapartida a la prohibición de autotutela. El derecho a la prestación jurisdiccional es fundamental para la propia efectividad de los derechos, toda vez que estos últimos, frente a situaciones de amenaza o agresión, siempre dependen de su plena realización.³⁷

Es de vital importancia que los Estados tengan en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental, tal como el autor antes mencionado acierta con el argumento de que por medio del ejercicio de este derecho podemos reconocer, proteger otros derechos e incluso prevenir la vulneración de los mismos.

³⁶ Luis Marcelo De Bernardis, *La Garantía Procesal del Debido Proceso* (Lima: Cultural Cuzco S.A, 1995), 58.

³⁷ Luiz Guilherme Marinoni, *Derecho Fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva* (Lima: Palestra, 2007), 226-227.

Entonces, el pleno desenvolvimiento del derecho a la tutela judicial efectiva apoyada en los diferentes mecanismos que creen los Estados para garantizar el mismo, permitirán que los ciudadanos acudan al órgano jurisdiccional, deduzcan su acción por medio de una pretensión, lo cual dará inicio al proceso y que los derechos de este se respeten con las debidas garantías básicas, a fin de llegar a una decisión final y que la misma sea efectiva.

1.3.3. Ecuador

Nuestro país al igual que el resto de países antes mencionados tiene que acoger las disposiciones emanadas de la Corte IDH y demás organismos internacionales, es así que, a partir de este precepto, partimos de la norma constitucional, analizando el contenido mismo del derecho a la tutela judicial efectiva, precisando que el artículo 75 de la Constitución, señala: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley[...]”,³⁸ lo cual nos permite comprender a simple vista que la tutela judicial efectiva a más de permitirnos el acceso al órgano jurisdiccional permite la efectividad de las decisiones judiciales.

El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra especificado como una obligación de los operadores de justicia, así dicho derecho se encuentra determinado en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que reza lo siguiente: “el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso [...]”,³⁹ en el presente artículo la tutela judicial efectiva aparece como una obligatoriedad estatal, ya que el Estado es el responsable de mantener vigente este derecho a través de sus actuaciones y el mismo debe propender por mecanismos sumamente fuertes para evitar su vulneración. En tal sentido, en nuestro país también se resalta el carácter prestacional que posee la tutela judicial efectiva frente al ciudadano.

³⁸ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 75.

³⁹ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Registro Oficial Suplemento 544, 9 de marzo de 2009, art.15.

Por otro lado, en la misma norma aparece como un principio en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de optimizar la actuación jurisdiccional, indicándose:

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso. Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles.⁴⁰

Al constituirse como principio, los funcionarios que pertenecen a la función judicial no deberán omitir la observancia de este contenido, ya que el mismo se encuentra establecido a más de derecho como principio, con la finalidad de que los derechos de los ciudadanos frente a la administración de justicia no sean soslayados desde el momento mismo en el que se da inicio a la acción judicial, abarcando el desarrollo del proceso, hasta su finalización con una decisión y posterior ejecución de dicha decisión.

Cualquier intento de vulneración o la vulneración misma del derecho a la tutela judicial efectiva será sancionado, en aras de salvaguardar la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia proclamada en nuestra norma suprema, lo cual implica la observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos sin restricción alguna. Con relación a la tutela judicial efectiva y su contenido esencial, nuestra Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente:

El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que, luego de un proceso que observe las garantías mínimas establecidas en la Constitución y la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y en éste se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia, el segundo con el desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y el tercero que tiene relación con

⁴⁰ Ibíd.

la ejecución de la sentencia, esto es, acceso a la jurisdicción, debido proceso y eficacia de la sentencia.⁴¹

De la decisión citada por nuestra Corte Constitucional, logramos identificar que la tutela judicial efectiva debe manifestarse en sus tres momentos de manera activa, tanto al inicio del proceso con la acción, durante el proceso y la etapa de ejecución, tomando en consideración el tiempo razonable, tal cual, como señala también la Corte IDH.

Sin embargo, en la evaluación práctica nos encontramos frente a una y otra garantía jurisdiccional que alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cualquiera de estas etapas, lo cual, nos permite inferir que la tutela judicial efectiva al ser un derecho general debe ser observada desde su contenido en su totalidad ya que la vulneración de una etapa del proceso al igual que todas las etapas del proceso, constituiría vulneración a la tutela judicial efectiva. La Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado:

La tutela judicial efectiva garantiza a las personas el acceso a la justicia, sin que su pleno ejercicio se agote únicamente en la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, pues implica también la obligación que tiene el operador de justicia de sustanciar la causa observando el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para cada caso y concluyendo el mismo a través de una decisión motivada que garantice los derechos de las partes y que deberá ejecutarse adecuadamente dentro del marco jurídico aplicable.⁴²

Entonces, la Corte Constitucional ha sido muy clara en establecer la obligatoriedad que recae sobre el órgano jurisdiccional de mantener la observancia de este derecho, indicándonos que tutela judicial efectiva no termina con el simple hecho de acudir al órgano jurisdiccional, sino que es a partir de allí donde empieza a manifestarse este derecho, enfocándose en la sustanciación del proceso según el procedimiento normado para cada caso e incluyendo que sus decisiones sean motivadas y la ejecución de las mismas como parte del contenido de la tutela judicial efectiva.

La Corte Constitucional más adelante siguiendo su línea jurisprudencial, ha demarcado de manera muy clara cuales son los aspectos que conforman la tutela judicial efectiva, indicándonos lo siguiente:

En este contexto, la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido de la tutela judicial efectiva y al hacerlo ha sostenido consistentemente que esta se compone de tres supuestos, a saber: 1. el acceso a la administración de justicia; 2. la observancia de la debida diligencia; y, 3. la ejecución de la decisión. Como parte de la tutela judicial efectiva, se

⁴¹ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 030-10-SCN-CC, caso N.º 0056-10-CN, 10 de marzo de 2014, 9.

⁴² Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 015-16-SEP-CC, caso N.º 1112-15-EP, 13 de enero del 2016, 6.

reconoce a las partes el derecho a obtener una solución al conflicto, esto es una sentencia que resuelva sobre el fondo de la controversia de manera motivada.⁴³

En este sentido, la Corte Constitucional nos ha precisado tres elementos que conforman la tutela judicial efectiva, dejando claro la complejidad de este derecho y la comprensión obligatoria de su contenido. Entonces, para hablar de vulneración a la tutela judicial efectiva, debemos aterrizar en los tres elementos claramente establecidos en la realidad ecuatoriana, los cuales serán descritos a continuación:

El primer elemento es el **acceso a la administración de justicia**. - Como hemos venido reiterando por varias ocasiones durante el presente trabajo de investigación, la tutela judicial efectiva no solo se refiere al acceso al órgano judicial, sino que este aspecto forma parte en sí de la tutela judicial efectiva. Entonces será necesario que el Estado proceda a establecer mecanismos suficientes que amparen y garanticen el acceso al a la administración de justicia a todas las personas, sin excepción alguna, con la finalidad de hacer valer sus derechos; sin embargo, hasta ahí no se constituye la tutela judicial efectiva, este derecho o garantía va tomando forma durante el desenvolvimiento del proceso, hasta su finalización.

En relación al acceso a la administración de justicia la Corte Constitucional en el caso No. 1209-14-EP, realiza un análisis respecto a una Acción Extraordinaria de Protección presentada, partiendo del primer componente de la tutela judicial efectiva, la Corte Constitucional entonces menciona: [...] el primer elemento relacionado a la tutela judicial efectiva se cumplió en el caso, toda vez que el legitimado activo pudo acceder al sistema de administración de justicia, de manera directa, sin encontrar trabas u obstáculos insubsanables; por lo que este primer elemento fue garantizado”.⁴⁴ Por lo tanto, el primer elemento de la tutela judicial efectiva permite que quienes necesiten acceder a los órganos jurisdiccionales no tengan ningún tipo de inconveniente al hacerlo; en este sentido, se resalta entonces la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de brindar los mecanismos necesarios para garantizar este acceso, evitando así la limitación al goce de este derecho.

Como segundo elemento se encuentra la observancia de **la debida diligencia**, el mismo que se refiere a cómo el administrador de justicia debe tramitar las causas puestas en su conocimiento, en observancia de las normas constitucionales vigentes y las normas específicas aplicables a los diferentes casos.

⁴³ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 1943-12-EP/19, caso No. 1943-12-EP, 25 de septiembre del 2019, 8.

⁴⁴ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 1209-14-EP/19, caso N.º 1209-14-EP, 18 de diciembre del 2019, 6.

Para este segundo elemento, la Constitución de la República del Ecuador, ha indicado en el segundo inciso del artículo 172, lo siguiente: “Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia”⁴⁵. Entonces la debida diligencia viene a constituirse como un principio rector de la administración de justicia, y su observancia es de manera obligatoria por todos los operadores de justicia. La Corte Constitucional del Ecuador nos refiere lo siguiente:

Por su parte, de acuerdo con el segundo parámetro, los operadores de justicia deben actuar con sujeción al principio de la debida diligencia para resolver el caso puesto a su conocimiento. La "debida diligencia", se refiere a la actuación pronta y prolija por parte de las autoridades jurisdiccionales; esto es, en un tiempo razonable y dando trámite a la causa con apego a la normativa pertinente, con el objeto de dar efectiva protección a los derechos e intereses de las partes.⁴⁶

De lo mencionado por la Corte Constitucional, revisamos que las causas deberán ser tramitadas entonces en observancia de las normas previamente establecidas y que sean aplicables al caso que ha de resolverse, pues la conducta del juzgador en cada caso deberá tener un mismo patrón de prontitud y prolijidad, además que deberá observarse la naturaleza de cada caso que se podrá en su conocimiento, ya que habrán causas que requieran un tratamiento especial y más celeridad respecto a otras causas.

Entonces, como parte de la debida diligencia tenemos al tiempo razonable, a la conducta del juzgador frente a los casos puestos en su conocimiento, a la tramitación de acuerdo a las normas aplicables al caso, sin embargo, más adelante la Corte Constitucional vendrá a precisar que no solo de estas observancias se nutre la debida diligencia, sino también se incluye al debido proceso, así en el caso 1234-14-EP, nos explica lo siguiente: “La debida diligencia implica que los juzgadores tienen la obligación de observar las garantías del debido proceso y actuar de forma cuidadosa en la tramitación de las causas puestas a su conocimiento; de modo que, deben velar porque en todo proceso las personas reciban una respuesta oportuna a través del ejercicio de las garantías mínimas previstas en la CRE”.⁴⁷

⁴⁵ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 172.

⁴⁶ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 364-16-SEP-CC, caso N.º 1470-14-EP, 15 de noviembre del 2016, 14.

⁴⁷ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 1234-14-EP/20, caso N.º 1234-14-EP, 11 de marzo del 2020, 9.

Debemos comprender que el parámetro de debida diligencia implica de igual manera la observancia de las garantías mínimas que deben tomarse en cuenta siempre en la tramitación de todos los procesos judiciales, esto es el debido proceso, además que cada caso debe ser resuelto conforme las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Es de vital importancia que la administración de justicia a través de sus órganos jurisdiccionales logre materializar la protección de los derechos de la ciudadanía, tomando en cuenta cada parámetro fijado para mejor tramitar y resolver, la vulneración de uno o de varios componentes de la debida diligencia trae consigo la vulneración de la tutela judicial efectiva.

El último elemento que constituye nuestra Corte Constitucional como parte de la tutela judicial efectiva es **la ejecución de la decisión**, en relación a este parámetro es necesario establecer que un proceso judicial no finaliza siempre con el establecimiento de una sentencia, pues la misma puede ser sujeta de recursos sean estos horizontales o verticales y a más de ser fundamentada deberá estar constituida por obligaciones de hacer o no hacer en relación a cada caso concreto y dichas obligaciones deben ser acatadas por quienes accedan al órgano judicial independientemente del rol que vayan a desempeñar dentro del proceso judicial, es decir que se llegue a resarcir el derecho que haya sido vulnerado o del cual se exige su cumplimiento.

Por ejemplo, en relación a las garantías jurisdiccionales, tenemos una acción que permite hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones judiciales en materia de garantías, la misma que se denomina “acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales”, para lo cual nuestra Corte Constitucional, ha establecido lo siguiente:

Los procesos judiciales solo terminan con la aplicación íntegra de la sentencia o la reparación integral del derecho vulnerado; en otras palabras, gracias a esta garantía, los procesos constitucionales no llegan a su fin con la expedición de la sentencia, sino cuando haya cumplido con todos los actos que se haya dispuesto en ella y se ha llevado a cabo la reparación integral de los derechos vulnerados, tarea que además le corresponde a la Corte vigilar conforme sus atribuciones.⁴⁸

A través de la mencionada disposición constitucional se insta entonces a la administración de justicia que no solo será necesario con el establecimiento de una sentencia para dar por finalizado el proceso judicial, sino que la misma debe cumplirse y acatarse, además que el juez deberá tener a la mano las herramientas necesarias para hacer

⁴⁸ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” N.º 002-13-SIS-CC, caso N.º 00047-10-IS, 18 de septiembre del 2013, 10.

cumplir dichas disposiciones, en aras de salvaguardar el derecho de quién ha reclamado y dicha disposición haya sido emanada a su favor.

Es necesario señalar que podemos encontrar casos en los cuales, de existir una sentencia con ciertas obligaciones para las partes procesales, las mismas pueden ser impugnadas a través de los recursos que prevé la ley y se suspende su ejecución mientras se resuelve la impugnación efectuada por cualquiera de las partes procesales o ambas partes procesales. Así mismo, encontramos sentencias donde la ejecución de la misma no se suspende por el hecho de haberla impugnado, este es el caso de las garantías jurisdiccionales, pues el cumplimiento de estas sentencias es de carácter inmediato.

Una vez analizado el componente de la tutela judicial efectiva según la Corte Constitucional en nuestro país, es necesario abordar el contenido doctrinario en cuanto a este derecho, así la doctrina procesal ecuatoriana también se ha encargado de generar el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, al respecto la autora Vanessa Aguirre, nos permite conocer de manera más específica los elementos constitutivos de este derecho, los cuales son: derecho de acceso a la justicia, defensa en el proceso, el derecho de una resolución motivada y congruente y el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales, pues sin que concurren estos elementos no podemos hablar de tutela judicial efectiva.⁴⁹

No podemos dejar de evaluar también cuál es el sentido que le da el Estado ecuatoriano a este derecho, si se mantiene como un derecho específico del sistema procesal o si este se desenvuelve como derecho fundamental, al respecto, nos atreveríamos a decir, que la tutela judicial efectiva comparte de las dos aristas, ya que al ser un derecho fundamental este debe estar concretizado en cada una de las normativas que amparan el acceso a la justicia y que determinan el actuar de la administración de la función jurisdiccional.

De la lectura del texto de la autora Vanessa Aguirre, también se enfatiza que: “En la perspectiva del efecto irradiante que le incumbe como derecho fundamental, la tutela judicial efectiva se proyecta también en la interpretación y aplicación de las normas por los tribunales”.⁵⁰ Al respecto, consideramos que tanto la interpretación como la aplicación de las normas, también constituyen parte de la tutela judicial efectiva, ya que por medio de esta actividad se está garantizando el deber que posee el juez frente a los ciudadanos

⁴⁹ Vanesa, Aguirre, “El Derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos” *Foro Revista de derecho*, N° 14.2010.

⁵⁰ *Ibíd.*, 12.

para precautelar sus intereses en igualdad de condiciones, al revisar la norma que más se apegue al caso para resolverlo, ya que se cuenta con un principio de seguridad jurídica que permite la existencia de normas jurídicas previas y claras.

En igual sentido, otros autores como María Elena Jara Vásquez logran resaltar la influencia por parte del Tribunal Constitucional Español para tener claro los momentos en los cuales debe manifestarse la tutela judicial efectiva, del cual se derivan sus elementos constitutivos, así la autora nos señala:

La doctrina y la jurisprudencia internacional, fundamentalmente española, se han pronunciado reiteradamente sobre el carácter complejo del derecho en cuestión, considerando que conjuga una serie de facultades que van desde el derecho a presentar una petición a los órganos que ejercen jurisdicción hasta el derecho a que se ejecute la resolución tomada por los juzgadores.⁵¹

No cabe ninguna duda entonces, que la tutela judicial efectiva viene a presentarse como aquel derecho protector de otros derechos que tenemos los ciudadanos frente a la administración de justicia, ya que por un lado las pretensiones que emanen de los justiciables constituyen la razón de existencia de la función jurisdiccional en cada Estado y por otro lado los ciudadanos se encuentran al amparo de que el contenido axiológico de la actividad jurisdiccional sea materializado, es decir, la Justicia. Por tal motivo se hace necesaria la obligatoriedad de los estados de crear varios mecanismos efectivos encaminados a la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

En este sentido, Colombia nos presenta al derecho de tutela judicial efectiva como una garantía primordial del Estado, partiendo de su contenido prestacional al amparo de todos los ciudadanos del país, Perú se centra en la arista procesalista, al tratar de equiparar la tutela judicial efectiva y debido proceso; y, por otro lado Ecuador se presenta como un país que reconoce al derecho a la tutela judicial efectiva en dos dimensiones totalmente marcadas, por un lado como garantía y por otro como principio procesal de la actividad judicial.

Sin embargo, esta consideración se vuelve no tan necesaria cuando tratamos de observar que cada una de las legislaciones analizadas consideran cada elemento que contiene la tutela judicial efectiva: el acceso al órgano jurisdiccional, lo cual involucra tener jueces independientes, la observancia de los derechos del debido proceso desde el inicio de la acción, hasta su finalización y posterior ejecución, además de contar con

⁵¹ María Elena Jara Vásquez, *Tutela Arbitral Efectiva en Ecuador* (Quito: Corporación de estudios y publicaciones, 2017), 50.

decisiones totalmente fundadas (cabe señalar que si una decisión sale en contra de la parte accionante, no necesariamente estaríamos hablando de vulneración a la tutela judicial efectiva, ya que dicha decisión deberá encontrarse totalmente motivada) y por último la efectividad de dichas decisiones que se logrará determinar en la ejecución de dichos fallos.

La tutela judicial efectiva no marca momentos del proceso; sino más bien, la misma se desenvuelve de manera general en todas las fases del proceso, su inicio, desarrollo, finalización y ejecución de los fallos. Es decir, que cada derecho que deriva de la tutela judicial efectiva deberá manifestarse en cada etapa.

2. La tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional

En la anterior sección de este capítulo denominado “Aspectos generales de la tutela judicial efectiva”, ya hemos determinado cual es el contenido y el alcance de este derecho o principio, partiendo de lo indicado en normas jurídicas internacionales a las cuales el Estado se encuentra sometido. Así también, se han analizado los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los mismos que se han encargado de dotar de contenido a la tutela judicial efectiva, sin dejar de lado lo aportado por los Tribunales Europeos que como se señaló fueron los pioneros en desarrollar esta institución procesal, para luego aterrizar con el análisis del contenido de la tutela judicial efectiva en jurisdicciones latinoamericanas como Colombia, Perú y Ecuador.

Nos compete entonces establecer como la tutela judicial efectiva se manifiesta en la administración de justicia constitucional, partiendo del análisis de lo que implica la administración de justicia de manera general en un Estado Constitucional de derechos y justicia como el nuestro, para luego entender como debe ser tratada esta institución en la administración de justicia, ya sea como principio o como derecho dotado totalmente de contenido procesal aplicable a todas las materias del entorno jurídico.

2.1. La administración de justicia constitucional

En un sentido general, la administración de justicia viene a constituirse como un deber del Estado para los ciudadanos; ya que, al existir los múltiples inconvenientes comunes y naturales de la vida del individuo en sociedad como parte de un Estado determinado, esperamos que se brinden todos los mecanismos adecuados para poder

resolver dichas controversias a partir de un ordenamiento jurídico previamente establecido que garantice la óptima respuesta estatal ante dichos altercados.

Al respecto, Javier Wilenmann, partiendo de la idea de que la administración de justicia es un bien jurídico, nos indica: “[...]la Administración de justicia se encuentra constituida por el conjunto de condiciones y deberes que requiere la administración de justicia para cumplir, en las condiciones contingentes de cumplimiento de la función del derecho, con la prestación que entrega a la sociedad[...]”,⁵² entonces la administración de justicia en los estados viene a constituir un elemento sustancial para la ciudadanía, efectivizando el cumplimiento mismo de los fines del derecho, es por tal motivo, que en los estados de derecho se viene a configurar la función judicial, la misma que se encarga de crear los mecanismos idóneos para que la ciudadanía tenga acceso a la prestación de administración de justicia.

De igual manera, el autor antes mencionado, precisa lo siguiente: “[...] la función de la administración de justicia reproduce, al menos, una parte de la función del Derecho. Ya en la construcción de la idea misma de una función estatal específicamente aplicadora de Derecho, se manifiesta conceptualmente el vínculo de la función de lo que debe ser aplicado, con la prestación que se entrega al aplicarlo [...]”.⁵³

La administración de justicia como deber de la Función Judicial deberá atender entonces los múltiples requerimientos sociales y como estados de derecho, dicha función debe estar acorde con lo determinado en la norma suprema, ya que la misma vendrá a fijar los principios por los cuales se deberá ejercer esta potestad al servicio de la ciudadanía. En este sentido, la administración de justicia viene a constituir un servicio público que deberá estar al alcance de todos los ciudadanos.

2.1.1. Estado Constitucional de derechos y justicia

En nuestro país a partir de la expedición de la Constitución de la República en el año 2008, llegamos a constituirnos como un “Estado constitucional de derechos y justicia”, modelo constitucional que debe responder a las necesidades sociales y suplir las falencias del anterior sistema. Así Juan Montaña Pinto y Patricio Pazmiño Freire señalan:

⁵² Javier Wilenmann, “La administración de justicia como un bien jurídico”, **Revista de Derecho** de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVI, (2011): 531-573, <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rdpucv/n36/a15.pdf>.

⁵³ *Ibíd.*

El modelo constitucional ecuatoriano de 2008 participa de los elementos del modelo constitucional postpositivista esbozados, con los siguientes elementos propios de la realidad constitucional local: a) la adopción de un modelo de democracia participativa en reemplazo de la antigua democracia representativa; b) la constitucionalización de las modernas tendencias del derecho internacional de los derechos humanos; c) el fortalecimiento del papel de los jueces y la función judicial dentro de la arquitectura constitucional; d) la ampliación radical del sistema de garantías establecido en la Constitución; e) el reconocimiento al carácter multiétnico y pluricultural de las naciones latinoamericanas.⁵⁴

Como podemos notar nuestra Constitución nos presenta las herramientas que a simple vista pueden ser totalmente efectivas a favor de la ciudadanía y de sus derechos, dándoles prioridad a estos, dotándoles de contenido favorable para su plena efectivización, y a la vez, creando mecanismos de protección de los mismos a lo que denominamos sistema de garantías.

Como indican los autores también se han generado cambios en la administración de justicia, los mismos que deben ser evaluados por la propia ciudadanía, si este deber del Estado está acorde o no a las necesidades de los justiciables y si los mecanismos para exigir nuestros derechos son o no eficaces.

De igual manera, nuestra Constitución de la República en su artículo 11, numeral 3 prevé “los derechos serán plenamente justiciables[...]”,⁵⁵ lo cual implica que podemos exigir el reconocimiento de nuestros derechos por las vulneraciones o posibles vulneraciones de los mismos ante los diferentes Tribunales que tienen la potestad de ejercer la administración de justicia, en este sentido, los estados son los principales garantes de que la administración de justicia sea totalmente efectiva.

Entonces, para la comprensión del contenido de la administración de justicia constitucional nos centraremos en dos elementos básicos del nuevo modelo constitucional optado por nuestro país a partir de la Constitución del 2008, los cuales son: el Garantismo y el rol del juez en la administración de justicia constitucional.

⁵⁴ Juan Montaña Pinto y Patricio Pazmiño Freire, “Algunas consideraciones acerca del nuevo modelo constitucional ecuatoriano”, en *Manual de Justicia constitucional ecuatoriana*, ed. Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz (Quito, EC: Corte Constitucional del Ecuador / Editorial Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2013), 39.

⁵⁵ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 11.

a) El garantismo

Otro elemento que se resalta en este nuevo modelo constitucional es la creación de garantías como mecanismos para la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales, pues las mismas de igual manera nos sirven para la exigibilidad de nuestros derechos, al respecto Agustín Grijalva Jiménez, nos indica: “No obstante, la más reciente transformación del concepto de garantía proviene de la Teoría General del Derecho, el Derecho constitucional y el Derecho internacional de los derechos humanos. En estas áreas la noción de garantía ha venido vinculándose a la protección de derechos constitucionales o derechos humanos.”⁵⁶

La Constitución de la República, entendida entonces también como un sistema de garantías, nos presenta a las mismas como un blindaje de nuestros derechos fundamentales para así evitar que los mismos sean violentados y en caso de que esto haya ocurrido puedan ser reclamados y reconocidos para posteriormente reparar el daño causado por dicha vulneración. Las garantías que se establecen en nuestra Constitución son de distintos tipos, así el autor Juan Montaña Pinto, nos resume lo siguiente:

Aparte de la garantía política general que representa la propia existencia del Estado de derecho, la teoría de los derechos reconoce distintos tipos o niveles de tutela jurídica para los derechos: en primer lugar, están las garantías normativas, en segundo término, están las garantías institucionales, y por último, se reconocen también las garantías jurisdiccionales.⁵⁷

El autor antes indicado nos presenta la existencia de niveles de garantías, específicamente tres: garantías normativas, garantías institucionales y garantías jurisdiccionales, pero las mismas enfocadas a un mismo fin, que como se dijo es actuar como entes de protección de los derechos fundamentales.

No obstante, existen autores como es el caso de Luigi Ferrajoli que, al explicarnos los cuatro postulados del modelo garantista, como son: el principio de legalidad, principio de plenitud deóntica, principio de jurisdiccionalidad y principio de accionabilidad, nos

⁵⁶ Agustín Grijalva., *Constitucionalismo en Ecuador*.(Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional), 238.

⁵⁷ Juan Montaña Pinto, “Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales”, en *Apuntes de Derecho Procesal Constitucional*, ed. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco (Quito, EC: Corte Constitucional para el Período de Transición / Editorial Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012), 27.

precisa que existen únicamente dos niveles de garantías, las mismas que son: primarias y secundarias y nos explica de la siguiente manera. Con relación a las garantías primarias:

Dondequiera que exista un poder, sea público o privado, ejecutivo, judicial o legislativo, estatal, extra o superestatal, deberán existir normas primarias, no solo formales sino también sustanciales, que regulen su ejercicio, sometiéndolo a los límites y a los vínculos en que consisten las *garantías primarias* correlativas a los derechos y a los intereses constitucionalmente establecidos, así como a las separaciones entre poderes que impidan sus confusiones o concentraciones.⁵⁸

Las garantías primarias son aquellas normas que tienden a regular el ejercicio de los diferentes poderes en el Estado, así el autor antes descrito nos permite deducir, que tanto el principio de legalidad y principio de plenitud deóntica pertenecen a las garantías primarias.

Por otro lado, el mismo autor a partir de la explicación del principio jurisdiccional como postulado del modelo garantista, nos indica:” donde existan normas y garantías primarias deberán también existir, contra sus posibles violaciones, normas secundarias, que predispongan la intervención de garantías secundarias o jurisdiccionales, por obra de funciones y de instituciones de garantía a su vez secundarias, también separadas de cualquier otro poder[...]”.⁵⁹

Es decir, que las garantías jurisdiccionales se activarán entonces una vez que se haya detectado la no funcionalidad de las otras garantías, en este sentido, no solo será el poder judicial quien determine la vulneración del derecho constitucional alegado en la garantía jurisdiccional que se active, sino también los máximos órganos de administración de justicia constitucional en los estados.

Para efectos de la comprensión de la administración de justicia constitucional nos referiremos a las garantías jurisdiccionales que a primera vista las entendemos como aquellas que se las ejercen en la jurisdicción para la protección de derechos fundamentales.

En nuestro país son varias las garantías jurisdiccionales en nuestra Constitución a partir de su artículo 88, las mismas que actuarán entonces como mecanismos de protección de derechos constitucionales, ya que no constituyen meros postulados transcritos en la norma suprema, pues estos deben ser parte de la realidad social, atender

⁵⁸ Luigi Ferrajoli, *La democracia a través de los derechos: el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político* (Madrid: Trotta Editorial, 2014), 57.

⁵⁹ *Ibíd.*, 59.

los requerimientos de la ciudadanía en general y evitar que dichos derechos sean manipulados.

b) El rol del juez

De manera general consideramos que el juez es aquella autoridad investida de la potestad para administrar justicia conforme nuestra Norma Fundamental y las demás leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico, en el cual los justiciables depositan plenamente su confianza para el reconocimiento de sus derechos, para evitar la vulneración de los mismos y para la exigibilidad de la reparación del daño causado por dicha vulneración. Miguel Carbonell, con relación a la actuación de los jueces, señala:

Para nadie es un secreto que una de las piezas maestras en cualquier democracia es un sistema judicial capaz de hacer exigible en la práctica el principio de sujeción de las autoridades al orden jurídico. Allí donde no exista un sistema judicial independiente será muy difícil poder mantener que se trata de un Estado en el que los derechos de los ciudadanos están a salvo y donde la división de poderes tiene algún significado más allá de la retórica que suele acompañarlo.⁶⁰

Por tal motivo, el papel del Juez en un Estado de Constitucional de Derechos y Justicia como es el nuestro, es fundamental, ya que los mismos también serán el reflejo del funcionamiento o no del sistema instaurado en nuestro país. Así entendemos entonces, que quien se encargue de administrar justicia deberá encontrarse investido de total independencia e imparcialidad para resolver las causas sometidas a su conocimiento. Con relación a la función de los jueces, Boaventura de Sousa Santos precisa:

Los jueces desempeñan en las sociedades contemporáneas diferentes tipos de funciones, y aquí distingo las tres principales: instrumentales, políticas y simbólicas. En sociedades complejas y funcionalmente diferenciadas las funciones instrumentales son específicamente atribuidas a una determinada área de actuación social y se consideran cumplidas cuando dicha área opera con eficacia dentro de sus límites funcionales. Las funciones políticas son aquellas mediante las cuales los campos sectoriales de actuación social contribuyan al mantenimiento del sistema político, y finalmente las funciones simbólicas son el conjunto de orientaciones sociales con las que los diferentes campos de actuación social contribuyen al mantenimiento o destrucción del sistema social en su conjunto.⁶¹

⁶⁰ Miguel Carbonell, *Constitucionalismo y Democracia* (México: Editorial Porrúa, 2004), 3.

⁶¹ Boaventura de Sousa Santos, *Derecho y Emancipación* (Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012), 222.

A más de entender la actuación de los jueces como un parámetro de funcionamiento o no del sistema, el rol del juez entonces está enfocado a resolver los múltiples problemas de carácter jurídico que ponen en su conocimiento los justiciables; en este sentido, Zagrebelsky, señala: “El caso, para el juez y para la ciencia jurídica, es esencialmente un acontecimiento problemático que plantea la cuestión de cómo responder al mismo, de cómo resolverlo en términos jurídicos. Para el derecho, por tanto, el caso no es algo que deba ser simplemente registrado, sino algo que debe ser resuelto.”⁶²

Entonces, quien administra justicia no será un simple vocero de la ley, sino que deberá atender los requerimientos sociales con relación a los derechos que se encuentran en pugna observando cada uno de los principios y disposiciones que se derivan de la Constitución de la República.

En este sentido, la labor de los jueces cobra suficiente fuerza, ya que se deberá exigir a los mismos en primer orden el respeto de los derechos fundamentales derivados de la norma suprema y sin despegarse de los principios que rigen esta actividad, abordar la temática específica de que se trate el litigio para aplicar la ley correspondiente y resolver el caso puesto a su conocimiento.

En la administración de justicia constitucional, esto no es lejano, puesto que también se resolverán problemas que se deriven en sí, de la dignidad humana; es decir, se encontrarán frente a casos en los que se involucren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es necesario recalcar también, que los jueces deben ser transmisores de todo nuestro ordenamiento jurídico partiendo de los principios y normas constitucionales que rigen esta actividad. Entonces, quien se encargue de la administración de justicia constitucional viene a ejercer este rol con relación a la justiciabilidad de los derechos fundamentales, para lo cual como se explicó anteriormente se han creado acciones de garantías jurisdiccionales.

Por lo tanto, en nuestro país contamos con una regulación específica encaminada a regular la actividad jurisdiccional perteneciente a la Función Judicial y es el Código Orgánico de la Función Judicial, dejando en claro que la administración de justicia constitucional tiene una doble vertiente; es decir, la misma puede ser ejercida tanto por las judicaturas ordinarias (jueces de primera instancias y segunda instancia) y por los jueces de la Corte Constitucional; sin embargo, de aquello, la Corte Constitucional no se

⁶² Gustavo Zagrebelsky, *El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia* (Madrid: Editorial Trotta, 1995), 136.

encuentra regida por la Función Judicial ya que constituye el máximo órgano de administración de justicia que debe gozar de suficiente independencia respecto de los poderes estatales.

2.1.2. Funcionamiento de las acciones de garantías jurisdiccionales

Como se explicó anteriormente, las garantías jurisdiccionales son aquellas que se las ejerce en la jurisdicción, las mismas que tienen el deber de tutelar derechos fundamentales de la ciudadanía; por tal motivo, la Constitución de la República exige un tratamiento especial para estas garantías, conforme las reglas determinadas en su artículo 86.

En el siguiente cuadro trataremos de explicar cómo nuestro sistema constitucional ha concebido a las garantías jurisdiccionales, partiendo del nuevo modelo constitucional establecido en nuestro país a partir de la vigencia de la Constitución del 2008.

Tabla 1

Las garantías jurisdiccionales

Garantía Jurisdiccional	Derecho que protege	Judicatura competente para su tramitación
Acción de Protección	Derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos que no se encuentren amparados en las otras garantías jurisdiccionales.	Juzgado ordinario de cualquier materia, en apelación ante cualquiera de las Salas que conforman las Cortes Provinciales
Acción de Habeas Corpus	La libertad, la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad	Juzgado ordinario de cualquier materia, en apelación ante cualquiera de las Salas que conforman las Cortes Provinciales
Acción de Acceso a la Información Pública	Información pública	Juzgado ordinario de cualquier materia, en apelación ante cualquiera de las Salas que conforman las Cortes Provinciales
Acción de habeas data	Acceso a datos e información de carácter personal que se encuentren en poder de entidades públicas o privadas y conocer su uso.	Juzgado ordinario de cualquier materia, en apelación ante cualquiera de las Salas que conforman las Cortes Provinciales

Acción por incumplimiento	Derecho a que se apliquen las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.	Corte Constitucional
Acción Extraordinaria de Protección	Derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia	Corte Constitucional
Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la justicia indígena	Derechos constitucionales y a la no discriminación por el hecho de ser mujer	Corte Constitucional

Fuente: Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

Elaboración propia

Como podemos observar, las garantías jurisdiccionales en nuestro país son siete de las cuales, cuatro de ellas son tramitadas por juzgados de primera instancia y ante la existencia de un recurso de apelación las mismas son tramitadas por cualquiera de las salas de las Cortes Provinciales; mientras que tres de ellas son sustanciadas ante la Corte Constitucional, en tal sentido, quienes ejercen jurisdicción constitucional en el tema de garantías secundarias son los jueces de cualquier materia de primera instancia, las Cortes Provinciales y la Corte Constitucional.

Las garantías jurisdiccionales son tramitadas en los órganos jurisdiccionales conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entonces, el contenido de la tutela judicial efectiva debe ser observado también en este tipo de causas, y es que de las normas comunes constantes en la Constitución de la República y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para su tramitación en toda medida tiene que ver el debido proceso, sin olvidarnos de que dicha institución forma parte del contenido esencial de la tutela judicial efectiva, en su parámetro de debida diligencia, elemento que hace referencia al cuidado que debe tener el juez al tramitar las causas, la observancia de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico y el hecho de contar con decisiones suficientemente motivadas.

Ahora bien, al sostener que la tutela judicial efectiva debe ser observada en todas las materias, es necesario hacer notar que respecto de las garantías jurisdiccionales tramitadas en la función judicial, no contamos con Unidades Judiciales propias para su tratamiento y peor aún con salas especializadas en las diferentes Cortes Provinciales.

Es decir, que la competencia ha sido establecida tanto por la Constitución y por la ley para que los juzgados de primer nivel de cualquier materia y cualquiera de las salas de las Corte Provinciales (ante la interposición de un recurso de apelación) mediante sorteo puedan conocer estas causas constitucionales, inobservando el principio de especialidad.

La especialidad como un principio puede ser tratado de varias formas, incluso para resolver los conflictos entre normas que puedan suscitarse; sin embargo, toma la función de ser parte de los principios rectores de la función judicial, el mismo que es aplicable para los órganos jurisdiccionales según las diferentes áreas, así el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, precisa:

La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código.⁶³

Al ser un principio de la administración de justicia se entiende que cada juzgado es especializado en diferente materia y que en este sentido también se radica su competencia, por lo tanto, la inobservancia del principio de especialidad en la tramitación de las acciones de garantías jurisdiccionales, conlleva a la vulneración de la tutela judicial efectiva, específicamente en su elemento de debida diligencia.

De la revisión de la norma suprema, notamos que no se encuentra cristalizado de manera clara el principio de especialidad para la función judicial, a excepción de la materia de niñez y adolescencia, conforme lo establece el artículo 175, que manifiesta:

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.⁶⁴

Entenderíamos entonces, que no cualquier Unidad Judicial conoce temas de niñez y adolescencia; a pesar de ello, el Consejo de la Judicatura a establecido unidades

⁶³ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial 544, Suplemento, 09 de marzo de 2009. art.11.

⁶⁴ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 175.

judiciales multicompetentes, que pueden conocer otras materias y casos relativos a los temas de niñez y adolescencia. Es decir, en la práctica se encuentra limitado la aplicación de este principio.

En relación al principio de especialidad en la tramitación de garantías jurisdiccionales autores como William Gabriel Rodríguez, sostienen lo siguiente:

En el estado ecuatoriano a partir del año 2008 se establece un modelo de administración de justicia donde deja atrás el imperio de la ley o el modelo positivista, estableciendo de forma amplia y general un estado de derechos y justicia, permitiendo que de forma gratuita libre, voluntaria y sin formalidad alguna el ciudadano común y corriente acceda a la administración de justicia a ejercitar sus derechos, pero no se ha exigido la especialidad judicial en el conocimiento de las garantías jurisdiccionales a la administración de justicia lo que fisura la tutela judicial efectiva en el efecto final del derecho reclamado, al tener conocimiento de forma general todos los administradores de justicia, siendo que la garantía jurisdiccional se refiere a una especialidad y a un conocimiento amplio de la constitución de la república [...] ⁶⁵

El autor mencionado, partiendo de la explicación de las exigencias de nuestro modelo constitucional, al referirse a las acciones de garantías jurisdiccionales señala la necesidad de contar con juzgados especializados para el conocimiento de estas causas, determinando que la inobservancia de este principio vulnera la tutela judicial efectiva, sin especificar en qué sentido se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, no se ha especificado en qué elemento esencial de la tutela judicial efectiva recae esta vulneración, pues una vez revisado el contenido que ha desarrollado nuestra Corte Constitucional en relación a la tutela judicial efectiva, consideramos que, al no tener juzgados especializados en garantías jurisdiccionales, nos encontraríamos frente a la vulneración del parámetro de debida diligencia dentro de la tutela judicial efectiva. Lo idóneo sería contar con juzgados especializados en acciones de garantías jurisdiccionales, con lo cual estaríamos asegurando la observancia del principio de especialidad, donde estas juzgados y sus prácticas procesales se encuentren enfocadas a garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva desde el inicio mismo del proceso, su desarrollo, conclusión y ejecución de la decisión final conforme el contenido esencial verificado en el tema anterior de este capítulo.

⁶⁵ Willam Gabriel Rodríguez, “Ley reformativa al artículo 151 del código orgánico de la función judicial que determina. - “los jueces conocerán todos los asuntos que se promuevan dentro del territorio de la república, cualquiera sea su naturaleza”, vulnerando el principio de especialidad judicial, que integra la tutela judicial efectiva.” (tesis maestra, Universidad Regional Autónoma de los Andes, 2015), 37, <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1847/1/TUAMDC045-2015.pdf>.

La autora Wilma Lizeth Machado Castillo ha precisado que al no contar con judicaturas especializadas se vulnera el efecto intrínseco del principio de especialidad, esto es, la posibilidad de que los asuntos sean resueltos por jueces centrados en una materia específica.⁶⁶ Por lo tanto, como principio rector de la administración de justicia, es necesario que la Función Judicial en nuestro país opte por la creación de judicaturas especializadas en la rama constitucional.

Por otro lado, se verifica también que las acciones de garantías jurisdiccionales no son tramitadas conforme las reglas especiales que se han previsto; por cuanto, no se toman en cuenta los tiempos especificados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual conlleva a la vulneración del debido proceso no de manera aislada sino como parte de la tutela judicial efectiva.

La falta de motivación en las decisiones y la ejecución de las mismas también ha sido objeto de controversia por parte de la ciudadanía en la tramitación de estas causas; por cuanto, el juez no siempre comprende que no todo puede ser resuelto por la justicia ordinaria; sino que hay casos en los cuales si deben ser conocidos en el ámbito constitucional, porque detrás de cada caso existe un derecho fundamental violentado y el objetivo del Juez debe ser el determinar y explicar con razones suficientemente motivadas la procedencia o no de la demanda sometida a su conocimiento y no forzar decisiones con razones que desnaturalicen el objeto mismo de las garantías jurisdiccionales.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos al entender estas reglas especiales que nos presenta la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional para la administración de justicia en materia constitucional ya que las mismas en ningún momento se refieren a realizar actividades que menoscaben el derecho a la justicia. En virtud de ello, son aplicables en una administración de justicia constitucional el contenido de los derechos que constituyen la tutela judicial efectiva.

En este sentido, es necesario mencionar que lo idóneo por las experiencias que se ha tenido durante estos doce años de vigencia de la actual Constitución respecto de la administración de justicia constitucional, es contar con jueces especializados de primer nivel y una sala exclusiva en las Cortes Provinciales dedicadas a esta materia, ya que generará confianza para la ciudadanía de que sus causas constitucionales serán llevadas a

⁶⁶ Wilma Lizeth Machado Castillo, “El principio de especialidad aplicado en los casos de tenencia de niñez y adolescencia y su afectación al derecho de motivación.” (tesis maestral, Universidad Andina Simón Bolívar, 2018), 46, <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6171/1/T2599-MDE-Machado-El%20principio.pdf>.

cabo en legal y debida forma conforme los parámetros fijados por la propia Constitución y la Ley específica, tomando en cuenta que la Constitución no prohíbe el establecimiento de dichas judicaturas especializadas.

2.2.Tratamientos de la tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional

Ahora bien, es necesario precisar cómo debe ser entendido el tratamiento de la tutela judicial efectiva en la administración de justicia constitucional, ya que el contenido esencial de la misma no excluye materias para su aplicación en la administración de justicia, por tal motivo, tan importante se hace precisar la concepción de la tutela judicial efectiva desde diferentes aristas, que complementan el desenvolvimiento de dicha institución en el cauce procesal.

En este sentido, la tutela judicial efectiva puede ser concebida como un principio o como un derecho, partiendo de las generalidades de estas figuras desarrolladas en el mundo jurídico en general.

2.2.1. La tutela judicial efectiva como principio procesal

Como hemos visto los elementos que integran la tutela judicial efectiva, son elementos que constituyen la dimensión procesal del derecho, por lo tanto, no es de sorprenderse que en nuestra legislación se haya tomado en cuenta a la tutela judicial efectiva como principio de la actividad jurisdiccional.

La labor de administrar justicia constitucional exige una gran comprensión primero de lo que involucra en una dirección general la administración de justicia como tal y como esta actividad debe desenvolverse en pro de los justiciables, para lo cual dicha actividad deberá estar regida por principios que coadyuven a la vigencia plena de los fines de la administración de justicia, como bien lo indica Eloy Espinosa Saldaña Barrera: “ La función jurisdiccional del Estado, como importante actividad humana que es, no escapa a estas consideraciones y tiene entonces también principios que le inspiran [...]”.⁶⁷

Así, comprendemos entonces que la tutela judicial efectiva trasladada como principio de carácter procesal nos da la posibilidad de dirigir la actividad de administrar

⁶⁷ Espinosa Eloy, *Jurisdicción constitucional impartición de justicia y debido proceso* (Lima: ARA Editores, 2003), 383.

justicia, tal es el caso que algunas legislaciones incluida la nuestra en la norma que regula la actividad judicial la desglosa como principio, ya que la misma debe ser observada en todo momento del proceso y dirigir el mismo en virtud de su contenido esencial antes ya analizado.

En nuestra legislación el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial al señalar a la tutela judicial efectiva como principio precisa:

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.⁶⁸

Tenemos entendido, que la función judicial cumple su rol a través de los jueces en sus diferentes competencias generadas por ley, pues así mismo se debe comprender que la tutela judicial efectiva al ser considerado un principio procesal para la administración de justicia dirige dicha actividad y la misma no debe ser comprendida como una mera formalidad que nos limita a pensar que al vulnerar los derechos que constituyen su contenido esencial (acceso a la justicia con jueces competentes e independientes, recursos necesarios para el reclamo de los derechos, normas previamente fijadas, reglas del debido proceso, resoluciones totalmente fundadas y ejecución de las decisiones) no es vulnerar el principio de tutela judicial efectiva.

Cabe señalar que así la vulneración sea en conjunto o de manera singular a estos derechos estamos hablando de vulneración a la tutela judicial efectiva; pues no podemos comprender su contenido esencial de manera distante.

Diremos entonces, que la tutela judicial efectiva tomada como un principio procesal exige a las autoridades capaces de administrar justicia su observancia durante todo el proceso incluyendo la ejecución de la decisión que se haya tomado respecto de la causa sometida a su conocimiento, sin menoscabar derecho alguno que constituye su contenido fundamental.

Entonces, desde la óptica de la ciudadanía la tutela judicial efectiva tomada como principio procesal genera confianza en la administración de justicia constitucional al

⁶⁸ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Registro Oficial Suplemento 544, 9 de marzo de 2009, art.23.

poder exigir el reconocimiento de sus derechos fundamentales, pues se tendrá la certeza de que el proceso será dirigido conforme el contenido esencial de la tutela judicial efectiva.

2.2.2. La tutela judicial efectiva como derecho fundamental

Actualmente, con la vigencia de la Constitución del 2008 tenemos entendido que la misma nos proporciona mejores derechos para la ciudadanía y que el catálogo de los mismos es sumamente amplió; pues ninguna actividad en este sentido, será realizada de manera arbitraria lo que nos demuestra que los derechos fundamentales se encuentran para la limitación de los poderes estatales, es decir, este tipo de derechos vienen a constituir el límite de la arbitrariedad estatal.

La norma Constitucional a través del establecimiento de características comunes de los derechos y principios, nos indica lo siguiente: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía [...]”,⁶⁹ a partir de esta norma, entendemos entonces que tanto los principios como los derechos se encuentran en igual jerarquía y se exigirá entonces su cumplimiento y observancia en igual medida.

Entonces podemos decir, que los derechos fundamentales son aquellos que se derivan de la Norma Fundamental de cada Estado, es decir de las Constituciones y añadimos también que los derechos fundamentales son aquellos que forman parte de la naturaleza del ser humano, aquellos inherentes a cada persona, a cada ciudadano, no solo por pertenecer a un determinado territorio; sino más bien por el hecho de ser personas humanas; y, además que constituyen el límite a los abusos de poder.

Otra definición bastante interesante es la que nos presenta el autor Jorge Benavides Ordóñez, quien nos señala:

De tal modo que podemos entender por derechos fundamentales a aquellos derechos subjetivos que le son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes jurídicos que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de dicho reconocimiento se derivan consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial efectiva y el contenido esencial.⁷⁰

⁶⁹ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 11.

⁷⁰ Jorge Benavides Ordoñez, “Un repaso a la teoría general de los derechos fundamentales”, en *Manual de Justicia constitucional ecuatoriana*, ed. Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz (Quito, EC: Corte Constitucional del Ecuador / Editorial Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2013), 75.

En este sentido, los derechos fundamentales siempre estarán dirigidos a las personas por su naturaleza como tal, los mismos que son totalmente exigibles el momento en el cual se vulnere su contenido esencial o se encuentre en amenaza, es decir que los derechos fundamentales no yacen por sí solos, los mismos contienen elementos que a simple vista no son identificables, pero conforme el desarrollo jurisprudencial y el actuar mismo del ser humanos en sociedad nos permiten establecerlos para poder generar mejores mecanismos de protección.

Para autores como Robert Alexy, surge la necesidad de distinguir a la norma de derecho fundamental y el derecho fundamental, así nos precisa lo siguiente:

Entre el concepto de norma de derecho fundamental y el de derecho fundamental existen estrechas conexiones. Siempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una norma válida de derecho fundamental que le otorga este derecho. Es dudoso que valga lo inverso. No vale cuando existen normas de derecho fundamental que no otorgan ningún derecho subjetivo.⁷¹

El autor antes señalado nos indica que, si bien es cierto, derecho fundamental no es lo mismo que norma de derecho fundamental, estos elementos se relacionan entre sí; por cuanto, los derechos fundamentales constituyen en sí derechos subjetivos y estos derechos subjetivos deben estar contenidos en normas para su exigibilidad y cumplimiento. Entonces, quien recoge el contenido de las normas de derecho fundamental, es decir normar los derechos inherentes al ser humano, es la Norma Fundamental de cada Estado.

La teoría analizada anteriormente trasladada al tema de la presente investigación nos permite comprender que la tutela judicial efectiva al ser tratada como derecho fundamental, debe garantizarse sin excepción alguna; ya que, constituye un derecho arraigado a la condición humana. Además, que el mismo debe contar con garantías que se enfoquen en su protección y en el hecho de evitar consecuencias jurídicas relevantes y graves para el justiciable.

Estas consideraciones, permiten entender que también la tutela judicial efectiva cumple su función para que no existan abusos por parte de la actividad jurisdiccional hacia los ciudadanos y que sus causas sean tramitadas en legal y debida forma sin alterar la naturaleza del conflicto que se somete a la decisión de los jueces.

⁷¹ Alexy Robert, *Teoría de los derechos fundamentales* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001), 47.

Capítulo segundo

Dos modelos de administración de justicia en materia de garantías jurisdiccionales: Ecuador y Perú

En el presente capítulo realizaremos un estudio comparativo de la administración de justicia constitucional de Ecuador y Perú con relación a la sustanciación de procesos referentes a las garantías jurisdiccionales, partiendo de lo dispuesto en las Normas Supremas de ambos países, para aterrizar en la normativa procesal constitucional y demás normativa que regula la jurisdicción constitucional en cada uno de los países objeto de análisis, para así determinar si con la implementación de la especialización constitucional se precautelaría de mejor manera el contenido esencial de la tutela judicial efectiva en las acciones de materia constitucional

1. Características generales del modelo procesal constitucional en Ecuador

A raíz de habernos proclamado un Estado Constitucional de Derechos y Justicia ha sido notable el desarrollo de los mecanismos encaminados a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, tal es así, que con la expedición de la norma suprema en el año 2008, se han creado nuevas salvaguardas de nuestros derechos fundamentales con un enfoque más protector a diferencia de la Constitución anterior; sin embargo, aún existen falencias en su tramitación que limitan una protección total de los derechos fundamentales de las personas en un marco procesal del desarrollo de estas garantías, lo que desemboca también en la vulneración de otros derechos fundamentales que nos asisten a las partes dentro de un proceso judicial.

Estas garantías jurisdiccionales que nos presenta nuestra norma suprema y que deben ser tramitadas por jueces de primera instancia y segunda instancia cuando exista recurso de apelación son las siguientes:

- Acción de protección
- Acción de habeas data
- Acción de acceso a la información pública
- Acción de habeas corpus

Para el año 2008, nuestra norma suprema se enfoca en darle una necesaria importancia a las garantías jurisdiccionales; sin embargo, en la práctica no notamos lo

contrario; pues el tratamiento de estas medidas protectoras, por así llamarlas, se deben a la Constitución, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como otras normas específicas que las rigen según el objeto de cada garantía y la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional del Ecuador.

Pues con el correcto tratamiento de estas garantías evitaríamos que los problemas de derechos fundamentales en nuestro país trasciendan a organismos internacionales competentes para sancionarlo por dichas actuaciones.

1.1. La Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

El artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador inicia mencionándonos las disposiciones generales para el tratamiento de las garantías jurisdiccionales, el señalado artículo en su numeral 1 hace referencia a la legitimación activa dentro de la presente causa, la misma que se encuentra en concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el mismo que determina:

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo.⁷²

Entonces las garantías jurisdiccionales de manera general podrán ser ejercidas por quien considere que su derecho fundamental ha sido violentado, ya sea por quien forme parte del poder público o por los particulares, reconociendo así que tanto víctimas directas como indirectas de dicha vulneración pueden acudir al órgano jurisdiccional en reclamo de sus derechos. Así también el encargado de accionar es el Defensor del Pueblo en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley.

El segundo numeral del artículo 86 nos precisa quienes tienen la competencia para conocer y resolver este tipo de acciones; sin embargo, existen ciertas particularidades para ciertas garantías jurisdiccionales. De manera general podemos decir que tanto la acción de protección, el habeas data, el acceso a la información pública, el habeas corpus y la

⁷² Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010, art. 9.

medida cautelar son conocidos por juzgados de primer nivel sin importar la materia que estos traten naturalmente.

Sin embargo, para el caso de habeas corpus, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha desarrollado el contenido de la competencia en estas causas para su conocimiento dotándole de competencia también a la Corte Nacional de Justicia en casos de fuero y en contra de procesos de extradición⁷³, de igual manera se realiza una interpretación conforme y condicionada del contenido del artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de la competencia cuando exista una presunción del lugar donde se encuentre privado de la libertad y cuando se desconozca el lugar de privación de libertad⁷⁴.

Estas consideraciones tanto de la Ley y la Corte Constitucional han sido obedeciendo a la naturaleza cautelar que refiere el habeas corpus, por tal motivo, se colige de la revisión de la norma aplicable que tienen un trámite bastante especial a diferencia de las otras garantías jurisdiccionales que se reconocen.

De igual manera, existen causas como la acción extraordinaria de protección, acción por incumplimiento y acciones extraordinarias de protección respecto de la justicia indígena, que conoce directamente la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo órgano de administración de justicia.

La mayoría de garantías jurisdiccionales en nuestro país se tramitan como causas de conocimiento ante juzgados de primer nivel en su primera instancia, incluida la medida cautelar, que si bien es cierto no es una garantía jurisdiccional, pero la misma también se enfoca en la protección de derechos fundamentales con la finalidad de cesar o evitar una posible vulneración de derechos constitucionales y también tiene su tratamiento especial.

Consideramos que estas normas no son totalmente complacientes con el sistema instaurado en nuestro país a raíz de la expedición de nuestra Constitución, partiendo de que al ser una materia especialísima por el objeto que tiene cada garantía jurisdiccional deberían presentar un mejor tratamiento partiendo desde la observancia del principio de especialidad para la creación de órganos jurisdiccionales que debe sustanciar y resolver la causa relativa a una acción constitucional.

⁷³ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0782-13-EP*, 22 de julio del 2015, 18.

⁷⁴ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0260-15-JH*, 20 de junio del 2018, 25-26.

Respecto de la competencia, nuestra Constitución en el numeral 2 del artículo 86, nos señala: “Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos [...]”,⁷⁵ desatendiendo así al principio de especialidad ; ya que, se está otorgando la competencia de acciones constitucionales a cualquier juez con especialidad en cualquier materia.

De igual manera en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con relación a la competencia en la tramitación de las garantías jurisdiccionales, nos precisa:

Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley.⁷⁶

Entonces, con estas afirmaciones determinadas tanto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional una garantía jurisdiccional podrá ser atendida por judicaturas civiles, penales, laborales, etc., ya que el único parámetro para fijar la competencia de las acciones de garantías jurisdiccionales sería entonces el territorio, dejando de lado la materia.

Es cuestionable pues, cuan beneficioso ha sido en los últimos tiempos el hecho de que una garantía jurisdiccional enfocada en proteger derechos fundamentales sea tramitada por cualquier judicatura de primer nivel especializada en cualquier materia, tomando en cuenta que con la inobservancia del principio de especialidad nos encontraríamos vulnerando la tutela judicial efectiva en su elemento de debida diligencia.

A pesar de que estas unidades judiciales serían competentes para conocer estas causas, partiendo de lo indicado en el artículo 86 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y tomando como base el artículo 76, literal k de la Constitución de la República que expresa: “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie

⁷⁵ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 86.

⁷⁶ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010, art. 7.

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto [...]”⁷⁷, no es menos cierto que las mismas no son unidades judiciales especializadas en materia constitucional, tomando en cuenta que lo discutible en una garantía jurisdiccional son derechos fundamentales, pues cada materia tiene su particularidad, es por ello el trámite que dota la ley para cada causa.

Con relación a la definición de competencia, Devis Echandía indica: “que la competencia es la facultad que cada juzgador de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción en solo ciertos asuntos y dentro de un territorio determinado [...]”,⁷⁸ pues mediante esta definición entenderíamos, entonces que, la competencia constituye un elemento indispensable para los jueces encargados de administrar justicia, en el sentido de que la administración de justicia la realizan en ciertos asuntos de acuerdo a la facultad que se le atribuya de acuerdo al territorio y la materia.

En este sentido, la competencia es un elemento primordial de la administración de justicia, tal es el caso, que constituye parte de la tutela judicial efectiva y del debido proceso como ya se indicó en líneas anteriores.

Así también, es necesario precisar lo indicado por el Código Orgánico de la Función Judicial, que en su artículo 156 precisa: “Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados [...]”⁷⁹; en este sentido, no podríamos señalar que cualquier juez de primer nivel sea competente para conocer acciones de carácter constitucional.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en virtud del principio de doble instancia, determinado en el artículo 4, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, indica que las acciones de garantías jurisdiccionales pueden ser sujetas de recurso de apelación, salvo norma expresa en contrario, por lo que, dichas acciones son conocidas por cualquiera de las Salas de las Cortes Provinciales de Justicia, lo cual nos conlleva a concluir que de igual manera en la segunda instancia se omite el principio de especialidad para las acciones de garantías jurisdiccionales, pese a la competencia otorgada por la Constitución y la Ley.

⁷⁷ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 76.

⁷⁸ Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, 2.^a ed. (Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997), 141.

⁷⁹ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Registro Oficial Suplemento 544, 9 de marzo de 2009, art.156.

La Constitución de la República y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, omiten el principio de especialidad determinado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manifiesta lo siguiente: “La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código [...]”.⁸⁰

Vista entonces, a la especialidad como principio rector de la actividad jurisdiccional, como se explicó en el capítulo primero de este trabajo su contenido exige que haya judicaturas especializadas en las diferentes áreas del Derecho, limitando así el poder de atribuir otro tipo de competencias a los jueces designados como tal, en las diferentes áreas del derecho.

Dentro del numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador también se precisan cinco normas de procedimiento enfocadas tanto a la sencillez y la eficacia de su tramitación, incluyendo la oralidad, indicando además que todos los días son hábiles, son tramitadas sin formalidades y que se debe evitar la aplicación de normas de procedimiento que retarden el despacho de estas causas, disposición que se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Debemos comprender, además, que la Corte Constitucional a través de cada una de sus sentencias, ha sentado sus bases a fin de que las mismas sean tomadas en cuenta tanto por los justiciables y por el juzgador en cuanto tienen que ver con la tramitación y requisitos de cada una de las garantías jurisdiccionales, es decir, tienen sus particularidades que deben ser observadas por todos quienes intervienen en el proceso constitucional.

El tercer numeral del artículo 86, nos precisa de forma resumida como se llevará a cabo la tramitación del proceso, básicamente, la presentación de la solicitud, la convocatoria a una audiencia pública, según sea el caso se da la potestad al juez para que pueda ordenar la práctica de pruebas, la obligación que tiene el juzgador de emitir su

⁸⁰ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Registro Oficial Suplemento 544, 9 de marzo de 2009, art.11.

decisión oral en la misma audiencia sin perjuicio de remitir su notificación por escrito a los casilleros judiciales o electrónicos que tengan señalados las partes intervinientes.

Además, ya se habla de una reparación integral, como esta debe estar definida por el juzgador en su resolución, según el caso, incluso se menciona que al estar en desacuerdo con la decisión las partes tendrán la oportunidad de presentar un recurso de apelación, estos son temas que básicamente se encuentran desarrollados en la ley orgánica de la materia.

Tanto el numeral 4 y 5 del artículo 86 de la Constitución de la República hacen alusión a la ejecución de la sentencia, dotándole al juez de mecanismos a fin de que se pueda dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia.

En este caso, debemos tomar en cuenta que la ejecución de las decisiones judiciales también forman parte de la tutela judicial efectiva, pues la decisión judicial debe ser realizable y en el menor tiempo posible tomando en cuenta la razonabilidad del plazo, con la finalidad de restituir el derecho fundamental violentado, sea ya por parte de la autoridad pública o de particulares, para lo cual la norma y la jurisprudencia han reglado la manera en qué se realiza la reparación integral en las acciones de garantías jurisdiccionales.

1.2. Principales problemas relacionados a la falta de Judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales

Pues, varios han sido los problemas que se han podido constatar a simple vista por la falta de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales, es decir, judicaturas competentes para el conocimiento y decisión exclusiva de estas causas, los mismos que podemos mencionarlos a continuación:

a) La desnaturalización de las acciones constitucionales

Dicho problema ocurre cuando no existe la preocupación del juzgador en identificar cual es el derecho fundamental vulnerado que se pretende proteger con la interposición de dicha acción y es ahí entonces cuando el juzgador no logra reconocer cuando las cuestiones que se discuten son de legalidad o cuestiones de carácter constitucional que si se podrían reclamar con la activación de las garantías jurisdiccionales. Por lo tanto, se puede evidenciar que las garantías no siempre se

encuentran cumpliendo el objetivo para el cual fueron creadas. Al respecto, el autor Salim Zaidán, indica:

Un juez constitucional puede resolver un caso en que se reclame la violación del componente de un derecho enunciado en la Constitución en un instrumento internacional. El problema se presenta cuando se trata de una norma constitucional de remisión a la ley y el desarrollo del derecho se encuentra en ella. En todo caso lo importante será constatar la naturaleza del reclamo presentado y la fuente del componente del derecho cuya justiciabilidad se persigue.⁸¹

En tal sentido, el juez perteneciente a la justicia ordinaria que le corresponde conocer acciones constitucionales debería tener en cuenta el fin mismo que se persigue con las garantías jurisdiccionales, para luego aterrizar en la pretensión del legitimado activo y la misma sea analizada a la luz de poder identificar la afectación al núcleo esencial del derecho fundamental que se encuentre el accionante reclamando.

Respecto del conflicto existente entre temas de legalidad y constitucionalidad el autor Ismael Quintana, precisa lo siguiente:

Reconocer la constitucionalidad no quiere decir que la legalidad desaparece o que la primera se sobrepone a esta última, sino que cada una desempeña un papel diferente. La legalidad se ocupa de los conflictos propios y específicos de cada ámbito del Derecho en donde se cuenta con autoridades y juzgadores competentes para ello, sin perjuicio de que ellos se ven vinculados a aplicar y observar las normas constitucionales. La constitucionalidad vigila la sujeción de las conductas públicas y, en algunos casos, privadas, a la Norma Fundamental, la cual cuenta con juez propio para conocer y sancionar la inobservancia a la Constitución sea porque se vulneran derechos fundamentales, ora porque la conducta no se acopla a la supremacía formal y material de ella.⁸²

El autor antes mencionado es claro al señalar que el hecho de que un asunto sea de legalidad no quiere decir que se desconocen las norma y principios constitucionales, pues estos deberán ser aplicados en el ámbito de su competencia, lo cual no quiere decir que todos los asuntos sean constitucionales; por otro lado, la constitucionalidad hace referencia a la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales.

Sin embargo, a pretexto de la diferenciación entre constitucionalidad y legalidad, no podemos permitir que existan desconocimiento de los casos en los cuales, si existe vulneración de derechos fundamentales y se quiera pretender o sugerir la vía

⁸¹ Salim Zaidán, *Neoconstitucionalismo. Teoría y Práctica en el Ecuador*. (Quito: Librería jurídica Cevallos, 2012), 112.

⁸² Ismael Quintana, *La Acción de Protección*. (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016), 100.

supuestamente adecuada para garantizar y proteger el derecho alegado, coartando así el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia constitucional, pues lo que se pretende es no sobreponer aspectos de legalidad sobre lo constitucional o viceversa.

La Corte Constitucional del Ecuador, enfoca al problema en cuestión a través de la Sentencia No. 045-11-SEP-CC, de la siguiente manera:

Todo el ordenamiento jurídico se encuentra dirigido hacia la protección de derechos constitucionales y legales; es evidente que ante la vulneración de derechos constitucionales no cabe argumentar razones de legalidad para rechazar las causas, toda vez que este proceder enerva la efectiva vigencia de los derechos constitucionales. Las garantías jurisdiccionales que se han previsto para la tutela de los derechos constitucionales deben buscar precisamente este fin, la protección de derechos constitucionales. Las garantías jurisdiccionales son mal utilizadas cuando se desechan acciones de raigambre constitucional, argumentando que son cuestiones de legalidad, así como a asuntos de legalidad se les yuxtapone la justicia constitucional a la justicia ordinaria.⁸³

Para el año 2011, la Corte Constitucional del Ecuador ya advertía esta problemática en la sustanciación de las acciones de carácter constitucional, enfocándose en que el fin último de nuestro sistema jurídico es la protección de derechos tanto constitucionales como legales, en este contexto el juez no puede dejar de tramitar causas donde realmente se evidencian violaciones a derechos constitucionales con la excusa de que se trata de asuntos de legalidad y que no le compete a la jurisdicción constitucional adentrarse a conocer estos casos.

En el caso de la acción de protección, su desnaturalización ocurre cuando no se logra identificar aspectos de legalidad y aspectos que se involucran en la esfera constitucional; para lo cual, la Corte Constitucional claramente señala como el Juzgador debe pronunciarse, a través de su sentencia 001-16-PJO-CC, en el caso No. 0530-10-JP, emite la siguiente regla jurisprudencial:

Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido.⁸⁴

⁸³ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0385-11-EP*, 24 de noviembre de 2011, 7.

⁸⁴ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0530-10-JP*, 22 de marzo de 2016, 23-24.

La presente disposición, exige el análisis por parte del Juez para poder justificar ante las partes procesales el porqué de la procedencia o improcedencia de la acción de protección, siendo que, las acciones de protección podrían ser mal usadas por los usuarios de la justicia, pretendiendo que aspectos que pueden ser conocidos en una vía contraria a la constitucional puedan ser resueltos en la vía constitucional.

Es decir, existen aspectos que son meramente legales y que podrían ser resueltos por la vía judicial adecuada y pertinente según el caso, pero así también existen situaciones que si se encuentran dentro de la esfera constitucional y que no a pretexto de deshacerse de la causa se inclinen en indicar que los casos son asuntos de mera legalidad, lo cual desemboca en total vulneración del acceso a la justicia constitucional de las partes.

Como podemos observar, esta problemática se manifiesta en acciones de protección, justamente por el contenido amplio del objeto de dicha garantía; sin embargo, si podemos prevenir que ocurran temas de desnaturalización en las otras garantías jurisdiccionales, a fin de precautelar los derechos fundamentales de las partes procesales en la activación de las garantías jurisdiccionales.

b) La falta de celeridad en la tramitación de las acciones de garantías jurisdiccionales

Partiremos indicando la definición que nos indica el Código Orgánico de la Función Judicial con relación a la celeridad, pues en el artículo 20, se menciona lo siguiente:

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.⁸⁵

La norma referida es clara al indicar que las causas deben ser atendidas en observancia del principio de celeridad, desde el inicio del proceso hasta la ejecución de lo resuelto, pues la no observancia de este principio lleva implícita una sanción para el administrador de justicia y su equipo de trabajo en la Judicatura.

⁸⁵ Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Registro Oficial Suplemento 544, 9 de marzo de 2009, art.20.

En la justicia ordinaria, no siempre se cumplen los plazos y términos dispuestos según la materia para cada caso, pues muchas veces se debe a los incidentes que pueden generar las partes procesales, en virtud de la carga procesal u otro asunto que limite el pleno desenvolvimiento de este principio, excusas sobran para dicho proceder, que para nuestra forma de ver pueden ser justificables en ciertos casos.

Sin embargo, para la justicia constitucional la falta de celeridad no puede ser justificada de ninguna manera, justamente por el objeto mismo de las acciones constitucionales que es el de precautar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues de conformidad a su artículo 4 numeral 11, literal b., que señala: “Art. 4.- Principios procesales. - La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales. b) Celeridad.- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias [...]”.⁸⁶

A partir de esta norma, entendemos entonces que se deben respetar los términos y plazos que se señalan para la sustanciación, resolución y ejecución de las acciones referentes a las garantías jurisdiccionales, sin que sean aceptables incidentes que retrasen el normal funcionamiento de la garantía en cualquier fase procedimental ante las judicaturas que conocen este tipo de acciones.

Los términos destinados a la tramitación de este tipo de acciones no se cumplen, a pretexto de la carga procesal que mantienen las judicaturas tanto de los procesos relacionados a la materia que en ella se tramitan y los diferentes tipos de garantías jurisdiccionales que se interponen en estas judicaturas, entonces sería necesaria limitar a las judicaturas ordinarias al conocimiento de las causas referentes a la materia del juzgado y la creación de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales a fin de que se respeten los plazos, términos y demás disposiciones necesariamente útiles para tramitar este tipo de acciones.

Consideramos entonces, que la falta de celeridad en los procesos constitucionales hace inefectivo el objeto por el cual han sido creadas las acciones de garantías jurisdiccionales, lo que limita el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada también en este tipo de procesos, ya que la celeridad permite que contemos con medios adecuados, rápidos, sencillos y eficaces para hacer efectivos nuestros derechos.

⁸⁶ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010, art. 4.

En este sentido, diremos que el parámetro de plazo razonable no serviría como excusa para indicar que la causa se la tramitó sin la celeridad necesaria, lo cual vuelve ineficaz a la garantía jurisdiccional.

La falta de motivación en las sentencias

Como se indicó en el primer capítulo del presente trabajo de titulación, la motivación de las decisiones judiciales forma parte del contenido esencial de la tutela judicial efectiva, permitiendo que los ciudadanos tengamos derechos a que las decisiones de quienes administran justicia sean totalmente fundadas en los hechos y las normas aplicables relacionadas al caso, además que deben ser comprensibles. Pues la motivación constituye también una arista del debido proceso que no solo debe ser aplicable en el ámbito judicial sino también en el ámbito administrativo.

Una definición apropiada de motivación nos presenta la autora Carla Espinosa Cueva, la misma que indica:

La motivación, adicionalmente, no es un simple expediente explicativo. Fundamentar una decisión es diferente a explicarla. Mientras que para fundamentar es necesario justificar los motivos que conducen a un razonamiento, mediante el examen de los presupuestos fácticos y normativos; para explicar se requiere solo de una simple indicación de los motivos o antecedentes causales de una acción, esto es, señalar el iter lógico que le ha permitido al juez o tribunal llegar a la decisión, sin mayores connotaciones intelectivas.⁸⁷

Pues en la definición antes descrita, nos presenta una diferenciación entre fundamentación y explicación, así diremos entonces que la explicación forma parte de la fundamentación, ya que estaremos exponiendo los motivos por el cual se toma una decisión, basándonos en la parte fáctica del proceso y en la parte normativa, de ahí que, no basta explicar a simples rasgos los motivos para la toma de la decisión, sino más bien se debe justificar el porqué de la decisión, a través de modos entendibles también para los receptores de dicha decisión. Por lo tanto, los jueces al tomar decisiones relevantes para la situación jurídica de las partes se encuentran en la obligación de motivar sus decisiones.

Siendo la motivación un elemento importante, no solo en la actividad judicial, sino también para los demás poderes del Estado, nuestra Constitución en su artículo 76, numeral 7 literal I, nos precisa lo siguiente:

⁸⁷ Carla Espinosa, *Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral* (Quito: V&M Graficas, 2010), 50.

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.⁸⁸

En igual sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, indica: “La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso [...]”,⁸⁹ es decir, entonces que obligatoriamente en acciones constitucionales se deberá tomar en cuenta a la motivación como elemento fundamental para la sustanciación de estas causas.

Asimismo, la Corte Constitucional se ha referido a la motivación en varias de sus sentencias, pues una de ella es la SENTENCIA No 021-13-SEP-CC, en la que se indica:

Al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 4 establece los principios procesales en los que se sustenta la justicia constitucional. Dentro de dichos principios incluye a la motivación y dispone que todos los jueces tienen la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tienen la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.⁹⁰

La motivación como principio para la administración de justicia constitucional, es de carácter obligatorio a fin de garantizar los derechos de las partes procesales en las acciones de garantías jurisdiccionales; además, la Corte Constitucional vincula a la motivación con la argumentación jurídica, ya que las actuaciones procesales deben estar fundamentadas a través de ejercicios argumentativos, que permiten llegar a la conclusión o decisión dentro de un proceso.

Así también la Corte Constitucional del Ecuador para antes del año 2019 establece los parámetros que permitan identificar cuando una decisión está motivada o no, así mediante Sentencia No. 062-14-SEP-CC, se establece lo siguiente:

⁸⁸ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 76.

⁸⁹ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010, art. 4.

⁹⁰ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0960-10-EP*, 4 de junio de 2013, 17.

De esta forma, ha sido un criterio reiterado de la Corte Constitucional que las decisiones judiciales para que se consideren debidamente motivadas deben contener al menos tres requisitos, a saber: a) Razonabilidad, el cual implica que la decisión se encuentre fundamentada en principios y normas constitucionales, sin que puedan incluirse criterios que contradigan dichos principios; b) Lógica, en el sentido de que la decisión se encuentre estructurada de forma sistemática, en la cual las premisas que la conforman mantenga un orden coherente y, e) Comprensibilidad, requisito que exige que todas las decisiones judiciales sean elaboradas con un lenguaje claro y sencillo, que permita su efectivo entendimiento por parte del auditorio social.⁹¹

Entonces, el primer elemento haría relación a que los jueces deben usar las reglas y principios del ordenamiento jurídico que sean aplicables al caso en concreto, el segundo elemento se refiere a la relación coherente que debe existir entre las premisas y la conclusión a la cual pueda llegar el juez, mientras que el tercer elemento indica cómo deben estar redactadas las sentencias, es decir de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética.

Sin embargo, a partir del año 2019 la Corte Constitucional logra establecer nuevos parámetros que se deben tomar en cuenta para que las decisiones de los poderes públicos sean debidamente motivadas, los mismos que se traducen en la enunciación de las normas o principios jurídicos en que se funda y la explicación de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho,⁹² es decir que la Corte Constitucional en gran medida se aleja del test de razonabilidad aplicado hasta antes del 2019, para desembocar en una nueva línea jurisprudencial que se basa en la enunciación y explicación de la norma pertinente al caso en concreto.

A partir, de esta línea jurisprudencial de igual manera la Corte Constitucional explica como en un tema de garantías jurisdiccionales se debe aplicar la garantía de motivación, indicando al respecto lo siguiente: “Adicionalmente, en el caso de garantías jurisdiccionales, esta Corte ha manifestado que, en conjunto con los anteriores elementos, el o la administradora de justicia, deberá efectuar un análisis para verificar la real existencia o no de vulneración a los derechos alegados en instancia, cuando se trate de una sentencia proveniente de una garantía jurisdiccional ”⁹³, es decir, que para las

⁹¹ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 01616-11-EP*, 9 de abril de 2014, 9.

⁹² Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 1256-13-EP*, 19 de noviembre del 2019, 3.

⁹³ Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 985-12-EP*, 29 de julio del 2020, 4.

garantías jurisdiccionales los jueces deberán tomar en cuenta este requisito último sumado a los requisitos explicados en el párrafo anterior.

En tal sentido, estaríamos reconociendo que las garantías jurisdiccionales tienen un tratamiento sumamente especial, respecto de las otras materias, los cuales deben ser aplicados de manera obligatoria por los administradores de justicia.

Al no existir decisiones totalmente motivadas, quien se sienta afectado por dicha decisión podrá recurrir a la instancia superior con un respectivo recurso de apelación pero si este confirma la sentencia del juez de primer nivel, el perjudicado se sentirá en la obligación de recurrir por medio de una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, lo cual también se convierte en un gran problema porque se empieza a desnaturalizar el objeto de la acción extraordinaria de protección, tomándola como otro recurso de instancia.

Como podemos observar en nuestro país las acciones de garantías jurisdiccionales son sustanciadas por los jueces de primer nivel y por las salas de las Cortes Provinciales en caso de que se haya interpuesto un recurso de apelación respecto de lo resuelto por los juzgados de primer nivel de cualquier materia en acciones de garantías jurisdiccionales.

2. Características generales del modelo procesal constitucional en Perú

En esta sección nos encaminaremos a desarrollar como es el funcionamiento de la administración de justicia constitucional en Perú, con relación a las acciones de garantías jurisdiccionales y cómo se ha logrado instaurar judicaturas especializadas en la tramitación de las acciones de garantías jurisdiccionales, así como también se han establecido salas especializadas en la rama Constitucional en las diferentes Cortes.

2.1. La Constitución Política de Perú y el Código Procesal Constitucional

Al igual que nuestro país, Perú cuenta con el establecimiento de garantías constitucionales a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas, así el artículo 200 de la Constitución Política de Perú nos señala las siguientes garantías constitucionales: Acción de habeas Corpus, Acción de Amparo, Acción de Hábeas Data, Acción de Inconstitucionalidad, Acción Popular, Acción de Cumplimiento.⁹⁴

⁹⁴ Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 200.

Las acciones constitucionales tienen un fin en común que es la protección de derechos fundamentales, así en el numeral 1 del artículo 200, se precisa lo siguiente: la Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.⁹⁵, en este caso, la institución de habeas corpus se encuentra determinada de manera general; sin embargo, se hace referencia de que no solo puede ser activada ante la vulneración de la libertad individual o sus derechos derivados de éste, sino también actúa ante su amenaza, entendiéndose de esta forma, que la naturaleza del habeas corpus es de carácter cautelar, situación que permite su activación de manera pronta por parte de la ciudadanía.

Como podemos observar en la Constitución no se especifica de manera clara cuáles serían los derechos conexos que protege el habeas corpus; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional en su artículo 25 delimita de mejor manera cuales son los derechos que protege esta garantía que se relacionan con la libertad individual.

Con relación a la competencia, la ley establece que quien conoce el habeas corpus es el juez penal sin observar turnos,⁹⁶ además que se le dota de competencia a los jueces de paz cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso,⁹⁷ como podemos observar la competencia para el conocimiento de este tipo de acciones se la atribuye a los jueces penales y a su vez a los jueces de paz, entonces la ley ha prevenido la urgencia de este tipo de acciones cuando ya el derecho a la libertad ha sido vulnerado y con la finalidad de evitar que sea vulnere dicho derecho fundamental.

Respecto de la acción de amparo, la norma suprema de Perú, establece que la misma procede en contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones,⁹⁸ entonces, la acción de amparo tiene el mismo objeto que la acción de protección aquí en nuestro país, esto es, el de proteger los derechos emanados de la Constitución.

⁹⁵ Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 202.

⁹⁶ Perú, *Código Procesal Constitucional*, Diario Oficial “El Peruano”, 31 de mayo del 2004, art.

28.

⁹⁷ *Ibíd.*, art. 29.

⁹⁸ Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 200.

Mientras la acción de amparo es usada también ante la existencia de una amenaza de vulneración de derechos constitucionales, en nuestro país ante la misma situación tenemos la medida cautelar; por lo tanto, tenemos que la acción de amparo se constituye en una garantía jurisdiccional también de carácter cautelar.

En atención a la naturaleza cautelar de la acción de amparo se ha establecido un trámite bastante corto, incluso el juez solo si lo creyera necesario o a petición de parte deberá llamar a audiencia oral a las partes procesales y quien tendría la competencia para conocer las acciones de amparo interpuestas son a elección del demandante, el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción. Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva,⁹⁹ entenderíamos entonces que la competencia para tramitar las acciones de amparo la tendrían los jueces civiles y las Salas Civiles según su circunstancia.

El habeas data es otra garantía jurisdiccional reconocida por el Perú, así la norma suprema indica que dicha garantía procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución,¹⁰⁰ su ámbito de protección radica en la protección de datos de carácter personal y el derecho a la intimidad personal y familiar, de igual forma en nuestro país el objeto del habeas data radica en las situaciones antes mencionadas.

De igual forma se puede verificar que su tramitación es similar a la acción de amparo conforme lo establece el artículo 65 del Código Procesal Constitucional, sin embargo, es necesario hacer notar que también tiene exigencias propias, por ejemplo, el hecho de realizar una petición previa a la institución sobre la información que desea acceder o la ejecución anticipada donde de oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del procedimiento y antes de dictar sentencia, el Juez está autorizado para requerir al demandado que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la información concerniente al reclamante.¹⁰¹ En relación a la competencia para conocer estas causas, nada se dice al respecto, sin embargo,

51. ⁹⁹ Perú, *Código Procesal Constitucional*, Diario Oficial “El Peruano”, 31 de mayo del 2004, art.

¹⁰⁰ Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 200.

63. ¹⁰¹ Perú, *Código Procesal Constitucional*, Diario Oficial “El Peruano”, 31 de mayo del 2004, art.

entenderíamos que al aplicarse las mismas reglas que para la acción de amparo, el Juez Civil estaría facultado para conocer acciones constitucionales de habeas data.

La Acción de Inconstitucionalidad, procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo,¹⁰² esta garantía jurisdiccional se encarga de defender a la Constitución, de que las demás normas obedezcan a lo dispuesto en la norma suprema, esto es, que exista armonía con la Constitución, consideramos que igual objetivo tiene la acción popular, pues la misma procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general.¹⁰³ En este sentido, el Código Procesal Constitucional señala que ambas acciones tienen como finalidad el proteger a la Constitución, su diferencia radica en su procedencia.

De igual manera, existe la Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley,¹⁰⁴ es decir que esta acción se dirigirá en contra de la persona que en el ámbito de sus funciones como servidor público no cumple con la ley y los instrumentos que emanen de esta, es decir se insta a las autoridades públicas y demás servidores el cumplimiento de los deberes y obligaciones en el ámbito de sus competencia a fin de que no se vulneren derechos de los ciudadanos, de igual forma la tramitación de estas causas se regirán a lo dispuesto para el proceso de amparo en lo aplicable.

Como podemos notar, hay diferencia en la tramitación de las causas constitucionales unas con otras, pues la Constitución Política de Perú nada nos dice respecto de quienes son competentes para el conocimiento de las acciones de garantías jurisdiccionales o cómo se las determina en dicha norma suprema “garantías constitucionales”¹⁰⁵ solo precisa en las atribuciones del Tribunal Constitucional cómo estas pueden ser conocidas por dicho órgano.

Sin embargo de aquello, existe un Código Procesal Constitucional que delimita de mejor manera el objeto de las garantías constitucionales, así como determina que jueces

¹⁰² Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 200.

¹⁰³ *Ibíd.*

¹⁰⁴ *Ibíd.*

¹⁰⁵ *Ibíd.*

son competentes para la sustanciación de estas causas y cómo se debe llevar a cabo la tramitación de las mismas; pues, el Código Procesal Constitucional, en sí viene a constituirse como la norma adjetiva de la materia Constitucional en dicho país, así como en Ecuador es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Así, el Código Procesal Constitucional o Ley 28237, en el artículo IV del Título Preliminar, precisa: “Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente Código[...]”;¹⁰⁶ en este sentido, entenderíamos entonces que la competencia para la sustanciación de las garantías constitucionales por mandato del Código Procesal Constitucional estaría otorgada tanto al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, en el ámbito de sus atribuciones, que como veremos más adelante el Poder Judicial será el encargado de distribuir esta competencia entre las Judicaturas especializadas en acciones de garantías constitucionales.

En un inicio entenderíamos que Perú no tiene Judicaturas especializadas en acciones de garantía jurisdiccional, no obstante, la Disposición Final Tercera del Código Procesal Constitucional, señala: “Los procesos de competencia del Poder Judicial a que se refiere el presente Código se iniciarán ante los jueces especializados que correspondan en aquellos distritos judiciales que cuenten con ellos, con la sola excepción del proceso de hábeas corpus que podrá iniciarse ante cualquier juez penal”.¹⁰⁷

Entonces, la Acción de Habeas Corpus, Acción de Amparo, Acción de Habeas Data, Acción Popular y la Acción de Cumplimiento son tramitados por las judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales en primera instancia, para que luego el Tribunal Constitucional conozca en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, y Acción de Cumplimiento, conforme se determina en el numeral 2 del artículo 202 de la Constitución Política de Perú y la acción de inconstitucionalidad en única instancia es conocida por el mismo Tribunal Constitucional.¹⁰⁸

Como podemos observar, la Disposición Final Tercera, se encuentra tomando en cuenta el principio de especialidad, que como se indicó anteriormente se constituye como

IV. ¹⁰⁶ Perú, *Código Procesal Constitucional*, Diario Oficial “El Peruano”, 31 de mayo del 2004, art.

¹⁰⁷ *Ibíd.*, Disposición Final Tercera.

¹⁰⁸ Perú, *Constitución Política*. Diario Oficial “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993, art. 202.

un principio rector la actividad judicial; en este sentido, ya se encuentra proporcionando el marco legal para la creación de dichas Judicaturas.

Si bien es cierto, no en todas las regiones del país vecino se han implementado las judicaturas especializadas en acciones constitucionales; sin embargo, se resalta la necesidad de su implementación en todas las regiones, por los positivos resultados que ha traído su implementación en algunos lugares, así Luis Robles, Elmer Robles, Pepe Melgarejo y Wilfredo Montañez, en su estudio denominado los juzgados constitucionales para una protección eficaz de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Áncash, indicaron:

Los jueces ordinarios cuando resuelven procesos constitucionales no respetan lo prescrito por el artículo 13° del Código Procesal Constitucional. Este regula la tramitación preferente de los procesos constitucionales frente a los procesos ordinarios; por ello, este se convierte en uno de los puntos críticos de la justicia constitucional, ya que al no otorgarles por parte del juez una preferencia a los procesos constitucionales de la libertad. El juez está equiparando la violación de un derecho constitucional con la violación de un derecho legal, es decir, para el juez ambos tienen la misma importancia y trascendencia jurídica, hecho que es considerado por la doctrina constitucional como una aberración jurídica y esto es desconocer el carácter jurídico de la constitución, es desconocer que los jueces constitucionales están llamados a garantizar el contenido de la constitución.¹⁰⁹

Como se evidencia, la misma problemática se palpa en nuestro país y se hace necesaria la implementación de las judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales, con la diferencia de que en Perú ya se ha empezado a implementar dichas judicaturas obteniendo resultados positivos para la ciudadanía.

El autor García Belaunde, en relación al derecho procesal constitucional peruano y a la creación de jueces especializados indica lo siguiente:

La disciplina, iniciada modestamente, ha seguido un desarrollo lento, pero seguro. Las publicaciones han abundado sobre las más diversas materias, en especial sobre el Habeas Corpus y el Amparo. Y recientemente se han creado en Lima, en ejemplo que luego se seguirá en provincias, Jueces y Salas de Derecho Público, esto es, jueces especializados, lo que nos permite esperar que, en el futuro, podamos tener una jurisprudencia interesante.¹¹⁰

¹⁰⁹ Luis Robles, Elmer Robles, Pepe Melgarejo y Wilfredo Montañez, “Los juzgados constitucionales para una protección eficaz de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Áncash”, https://www.researchgate.net/publication/328970124_Los_juzgados_constitucionales_para_una_proteccion_eficaz_de_los_derechos_constitucionales_en_el_Distrito_Judicial_de_Ancash.

¹¹⁰ Domingo García Belaunde, *Derecho Procesal Constitucional*, (Editorial TEMIS, Bogotá 2001), 25, <http://garciabelaunde.com/Biblioteca/DProcesalConstitucional.pdf>

Los resultados que puede traer el establecimiento de judicaturas especializadas en el ámbito constitucional pueden ser positivos en relación a la jurisprudencia, pues en palabras del autor se tendrá una jurisprudencia interesante, lo cual consideramos que sería un aporte bastante positivo al tener mejores precedentes para resolver casos a futuro, ya que la jurisprudencia se convierte en guía para el juzgador a fin de mejor resolver en aras de salvaguardar los derechos de las partes procesales que han sometido a su jurisdicción el conflicto, con la confianza de que el mismo se resolverá de la mejor manera posible.

De igual manera, para el establecimiento de las judicaturas especializadas en Perú otorgó un gran aporte la Defensoría del Pueblo, por cuanto mediante sus informes periódicos ya se advertía de la necesidad de implementar la especialización constitucional en las diferentes judicaturas, no solo en Lima sino en los demás Distritos por las múltiples acciones constitucionales que interponen, tomando como base lo señalado en la Disposición Final Tercera del Código Procesal Constitucional.

2.2. Implementación de juzgados especializados en acciones de garantías jurisdiccionales

A partir del análisis de la norma procesal constitucional de Perú, entendemos que la competencia en el ámbito constitucional es atribuida al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a fin de que sean los encargados de la administración de justicia en esta rama del derecho donde las acciones propuestas se enfocan en la protección de derechos fundamentales del ciudadano.

La disposición final tercera del Código Procesal Constitucional, motiva al Poder Judicial a la implementación de juzgados especializados en acciones de garantías jurisdiccionales; en este sentido, se han emitido dos resoluciones clave para dicha implementación, las cuales son: Resolución Administrativa No. 319-2008-CEPJ y Resolución Administrativa No. 060-208-CE-PJ, las mismas que son analizadas a continuación.

2.2.1. Importancia de la Resolución Administrativa No. 319-2008-CEPJ

Considero que la Resolución Administrativa No. 319-2008-CEPJ, de fecha 17 de diciembre del 2008 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es el referente principal de la implementación de la especialización constitucional en el sistema de

administración de Justicia en de dicho país; sin embargo, al inicio no fue tomado en cuenta en la mayoría de provincias de Perú y de acuerdo a la necesidad.

Pues a partir del análisis de datos estadísticos sobre las causas que eran tramitadas en las Judicaturas Civiles, ya que el Código Procesal Constitucional, también otorga la facultad de que estos juzgados puedan conocer las acciones constitucionales de amparo, habeas data y de cumplimiento, se concluyó que era necesaria la implementación de juzgados especializados en acciones de garantías constitucionales, además que se tomó en cuenta la considerable carga procesal de estas Judicaturas sobre juicios relacionados con las garantías constitucionales, justificándose así también la urgencia del establecimiento de los juzgados especializados en materia constitucional, pues el considerando quinto de la Resolución mencionada indica:

A su vez, analizada la carga procesal que poseen los Juzgados Especializados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, se evidencia que parte importante de esta, es en materia constitucional comprendiendo Acciones de Amparo, de Cumplimiento y Hábeas Data, con excepción de Hábeas Corpus, dado a qué éstas son asumidas exclusivamente por los Juzgados Penales conforme lo previsto en el artículo 28° del Código Procesal Constitucional; siendo que del 100% del total de expedientes en trámite con que contaban los referidos juzgados a setiembre del año en curso (19,498.00), el 23.28% (4,540) de estos son en materia constitucional, al igual que el 34.98% (6,760) de los expedientes principales en ejecución de dicha materia.¹¹¹

A raíz del análisis de la carga procesal que existían en los Juzgados Especializados Civiles, se colige la importancia de establecer juzgados especializados en acciones de garantías constitucionales, pues en dicha resolución si excluyen de estos juzgados al Habeas Corpus, al ser competencia de los Juzgados Penales; además, de la carga procesal de los Juzgados Especializados Civiles, también se ha tomado en cuenta la naturaleza de los proceso constitucionales, así en su considerando quinto, se expresa lo siguiente:

En tal sentido, estando a la naturaleza de los referidos procesos, cuya finalidad es proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo, o el acceso a la información; se requiere especialización en el juzgador que permita celeridad en la solución de los conflictos, deviniendo en impostergable la conversión de diez juzgados especializados en lo Civil, en diez juzgados especializados en lo Constitucional.¹¹²

¹¹¹ Perú Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Resolución Administrativa n.o. 319-2008-CE-PJ, Diario Oficial “El Peruano”, 17 de diciembre 2008, art. 2.

¹¹² Perú Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Resolución Administrativa n.o. 319-2008-CE-PJ, Diario Oficial “El Peruano”, 17 de diciembre 2008, considerando quinto.

Como podemos notar, además de establecer la urgencia de los Juzgados especializados en lo Constitucional, en virtud de la celeridad con la cual estos deben ser tramitados y por la carga procesal de los Juzgados Civiles, también se ha hecho énfasis en la importancia del establecimiento de estas judicaturas por la finalidad que tienen los procesos constitucionales y es como hemos venido reiterando, que dichas acciones constitucionales protegen derechos fundamentales de los ciudadanos y que los mismos deben tener un tratamiento especial enfocado a la integra protección del contenido esencial de la tutela judicial efectiva del cual gozan las partes procesales.

Entonces, podemos decir que a partir del año 2008 Perú cuenta con Juzgados Especializados en materia constitucional, en atención a la Tercera Disposición Transitoria del Código Procesal Constitucional, lo que nos demuestra que de nada nos sirve contar con normativa adecuada que se enfoque en el tratamiento judicial de las acciones constitucionales, si no vamos a hacer efectivas las medidas establecidas en la legislación.

Consideramos que, tanto la celeridad como la carga procesal que maneja el sistema de administración de justicia son antecedentes importantes para instaurar nuevos tratamientos que permitan sustanciar las causas; sin embargo de aquello, no son los únicos problemas por los cuales dicho país debió atravesar para la toma de esta decisión fundamental en materia constitucional, tal es el caso que a raíz de la implementación de estos diez juzgados que indica la Resolución Administrativa No. 319-2008-CEPJ, se han ido creando más juzgados con especialización en el ámbito constitucional.

En relación a la Resolución Administrativa 319-2008-CEPJ, Francisco Morales Saravia, señala:

Si se cumpliera la disposición legal citada, tendríamos un cuerpo de jueces constitucionales del Poder Judicial, en primera y segunda instancia, que al cabo de pocos años podrían desarrollar una importante jurisprudencia protectora de los derechos constitucionales sin necesidad de llegar al TC. En efecto, disminuir considerablemente el tiempo de espera para una respuesta de la jurisdicción constitucional por parte de los ciudadanos.¹¹³

El autor antes citado expresa su llamado a dar cumplimiento en su totalidad del instrumento administrativo por el cual se crean juzgados especializados en garantías jurisdiccionales, de igual manera resalta su importancia para la jurisprudencia en relación a la protección de derechos fundamentales, de igual forma se resalta el valor que tiene la

¹¹³ Francisco Morales Saravia, *El Tribunal Constitucional del Perú: Organización y funcionamiento, Estado de la cuestión y propuesta de mejora* (Lima, Perú: Fondo Editorial Academia de la Magistratura, 2014), 155.

protección de los derechos fundamentales en el Estado y que estos necesitan un tratamiento especial en relación a las otras materias.

De igual forma se hace notar la problemática en cuanto al tiempo necesario para tramitar estas causas, pues la celeridad se ha considerado como una de las necesidades para la creación de dichas judicaturas y como fundamento la respuesta pronta del órgano jurisdiccional ante la vulneración o amenaza de la vulneración de un derecho constitucional. Si bien es cierto, no en todas las regiones del país vecino se han implementado las judicaturas especializadas en acciones constitucionales, sin embargo, se resalta la necesidad de su implementación en todas las regiones, así Luis Robles, Elmer Robles, Pepe Melgarejo y Wilfredo Montañez, en su estudio denominado los juzgados constitucionales para una protección eficaz de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Áncash, indicaron:

Los jueces ordinarios cuando resuelven procesos constitucionales no respetan lo prescrito por el artículo 13° del Código Procesal Constitucional. Este regula la tramitación preferente de los procesos constitucionales frente a los procesos ordinarios; por ello, este se convierte en uno de los puntos críticos de la justicia constitucional, ya que al no otorgarles por parte del juez una preferencia a los procesos constitucionales de la libertad. El juez está equiparando la violación de un derecho constitucional con la violación de un derecho legal, es decir, para el juez ambos tienen la misma importancia y trascendencia jurídica, hecho que es considerado por la doctrina constitucional como una aberración jurídica y esto es desconocer el carácter jurídico de la constitución, es desconocer que los jueces constitucionales están llamados a garantizar el contenido de la constitución.¹¹⁴

Como se evidencia, puede que exista la misma problemática en nuestro país y se haría necesaria la implementación de las judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales. Los autores rescatan la importancia de proteger los derechos fundamentales y como se debería mejorar su tratamiento dentro de la jurisdicción, atribución que le compete al poder judicial.

Es muy importante de igual forma resaltar la armonía y funcionalidad que deben tener los juzgados especializados en acciones constitucionales con el Tribunal Constitucional, al respecto se ha indicado lo siguiente:

La interrelación y complementariedad del TC y PJ no solo ocurre en el aspecto procesal. También sucede en el ámbito funcional. En principio, se podría considerar que el TC y el PJ son órganos autónomos de modo que sus miembros no tienen relación funcional y

¹¹⁴ Luis Robles, Elmer Robles, Pepe Melgarejo y Wilfredo Montañez, “Los juzgados constitucionales para una protección eficaz de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Áncash”, https://www.researchgate.net/publication/328970124_Los_juzgados_constitucionales_para_una_proteccion_eficaz_de_los_derechos_constitucionales_en_el_Distrito_Judicial_de_Ancash.

están aislados. Si bien es cierto que son órganos distintos, que tienen competencias claramente definidas y una estructura funcional diferenciada, no debe olvidarse que comparten competencias en materia de jurisdicción constitucional. En esta última, el TC prevalece y los jueces constitucionales de segunda y primera instancia se subordinan. Así como en materia civil, penal, laboral, previsional, contenciosa administrativa, la Corte Suprema tiene la última palabra y los jueces de segunda y primera instancia acatan sus decisiones; en el circuito de la jurisdicción constitucional, los jueces del Poder Judicial se subordinan al TC en materia constitucional.¹¹⁵

Pese a la autonomía que podrían tener el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en Perú, el autor rescata la idea de que estos deben trabajar de manera complementaria ya que tanto los jueces de primer nivel y de segundo nivel conocen causas constitucionales, sin embargo, esto no quiere decir que se desconozca la posición del Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial. Tampoco quiere decir entonces, que las Judicaturas al conocer causas constitucionales creerán que tienen el mismo nivel del Tribunal Constitucional, es por eso, que sus actuaciones deben complementarse para el funcionamiento esperado de la justicia constitucional.

Otros autores al referirse a la creación de judicaturas especializadas en Perú han optado por instar a los juzgados ordinarios en la capacitación respecto de los derechos fundamentales y no necesariamente que se establezcan judicaturas especializadas, es así que Rodríguez Santander citado por Luciano López Flores, señala:

Por otra parte, se ha reservado a la jurisdicción ordinaria la debida tutela de los derechos fundamentales en el resto de casos. Ello exige que el juez ordinario comprenda, hoy más que nunca, que la adecuada y eficiente protección de los derechos fundamentales no son funciones exclusivas de algún órgano ad hoc, sino que, a él, en tanto miembro del Poder Jurisdiccional, competen también, en igual intensidad, dichas tareas. Para tales efectos, será deber de todos los jueces capacitarse para una pertinente valoración del contenido protegido por los derechos fundamentales, pues solo así se encontrarán en condiciones de determinar cuándo corresponde declarar la inconstitucionalidad de algún acto.¹¹⁶

Entonces, no será necesaria la creación de judicaturas especializadas, sino más bien la capacitación a los juzgados encargados de conocer las acciones constitucionales, ya que se resalta la importancia de estas acciones por cuanto protegen derechos de carácter fundamental; por lo tanto, debe existir un tratamiento especial en este tipo de causas, para lo cual el autor propone capacitación a los jueces ordinarios a fin de que se

¹¹⁵ Francisco Morales Saravia, *El Tribunal Constitucional del Perú: Organización y funcionamiento, Estado de la cuestión y propuesta de mejora* (Lima, Perú: Fondo Editorial Academia de la Magistratura, 2014), 153-154.

¹¹⁶ Rodríguez Santander, *Amparo y residualidad. Las interpretaciones (subjetiva y objetiva) del artículo 5°. 2 del Código Procesal Constitucional. Justicia Constitucional (revista de jurisprudencia y doctrina)* (Lima: Palestra Editores, 2005), 97-136, citado en Luciano López Flores, *El Control Constitucional en Perú: ¿Un modelo aún por armar?*, Vox Juris, Vol.34 N° 2, Universidad de San Martín de Porres (2017), pág.73-97, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6222555>. pdf.

proceda con la sustanciación en legal y debida forma conforme lo determinado por la Constitución y el Código Procesal Constitucional; no obstante, el mismo autor en líneas posteriores en relación a la acción de amparo señala que se debe dar cumplimiento con la Tercera Disposición Final del Código Procesal Constitucional,¹¹⁷ que hace referencia a los jueces especializados en acciones constitucionales.

Hemos podido comprender que Perú ha logrado establecer judicaturas especializadas en garantías jurisdiccionales, en cumplimiento del Código Procesal Constitucional y tomando en cuenta situaciones como resaltar el objeto mismo que tienen estas garantías jurisdiccionales para los ciudadanos, que es el de proteger los derechos fundamentales.

Se logra evidenciar la finalidad o el intento de poner en orden a la administración de justicia en cuanto se refiere a las garantías jurisdiccionales; en cuanto, se ha evidenciado problemas como la demora en la tramitación de las causas, resaltando el carácter urgente de las garantías jurisdiccionales, entre otros factores que han impedido el mejor manejo de estas causas en manos del Poder Judicial.

¹¹⁷ *Ibíd.*

Capítulo tercero

Hacia la construcción de un modelo de justicia especializada en materia de garantías jurisdiccionales

Para el desarrollo del presente capítulo nos encaminaremos en dar a conocer datos estadísticos respecto de las garantías jurisdiccionales tanto en nuestro país como en Perú, datos estadísticos otorgados tanto por el Consejo de la Judicatura de Ecuador y del Poder Judicial de Perú, con la finalidad de presentar las diferentes realidades que atraviesan las garantías jurisdiccionales en su tramitación.

1. La justicia constitucional ecuatoriana en números: Quito (2015-2018)

Para conocer cómo ha funcionado la justicia constitucional en la Provincia de Pichincha para el año 2018, empezaremos por establecer algunas continuidades, para lo que estudiaremos algunos datos desde 2015. El estudio que planteamos a continuación se basa en el análisis de los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, se trata de cifras generales, que explican el funcionamiento en términos cuantitativos de las acciones de garantías constitucionales.

Tabla 2
Causas ingresadas y resueltas en el año 2015

Provincia	Cantón	Acción	Año 2015	
			Causas ingresadas	Causas resueltas
Pichincha	Quito	Acción de acceso a la información pública	25	26
Pichincha	Quito	Acción de habeas corpus	1.593	1.532
Pichincha	Quito	Acción de habeas data	97	103
Pichincha	Quito	Acción de protección	389	416
Pichincha	Quito	Acción de protección con medida cautelar	74	85
TOTAL			2.178	2.162

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

En la tabla se muestra cuantas causas de acciones constitucionales han sido ingresadas a las judicaturas de primer nivel, siendo que en el caso de las acciones relativas a acceso a la información pública para el año 2015 han ingresado 25 causas y resueltas un numero de 26, lo cual nos permite concluir que una de las causas resueltas pertenecía a un año anterior, por tal motivo no se registra en el número de causas ingresadas.

Así también, en el caso del habeas corpus han ingresado 1593 causas de las cuales han sido resueltas un total de 1532, es decir que 61 causas no fueron resueltas dentro del mismo año.

Con relación a la acción de habeas data, observamos que 97 causas han sido ingresadas y han sido resueltas 103 causas, es decir, dentro de las causas resueltas de igual manera al no coincidir con el número de causas ingresadas se colige que hubo cierto tipo de rezago de años anteriores.

Para el año 2015 encontramos que han ingresado 389 acciones de protección, pues en la columna de causas resueltas nos muestra un número superior al número de ingreso, es decir, que también hubo causas pendientes de resolver de años anteriores, de igual manera existen causas de acciones de protección con medida cautelar que reflejan en un número de 74 causas ingresadas y 85 causas resueltas, siendo que también se muestra un sobrante de causas no resueltas en años anteriores y que han sido resueltas para el año 2015.

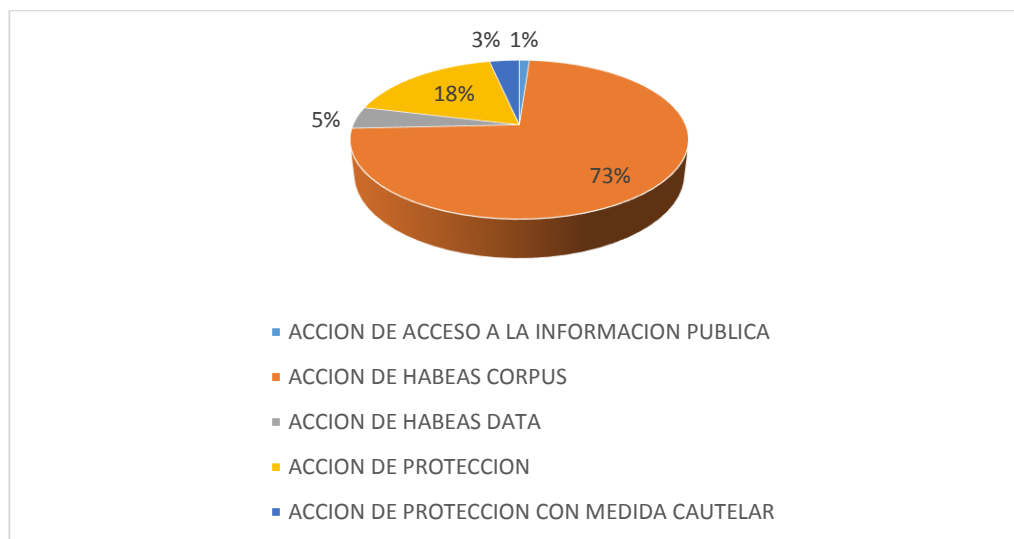


Figura 1. Causas ingresadas año 2015 (2178)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE).

Elaboración propia

Para el año 2015, se han ingresado 2178 causas, de las cuales 25 son acceso a la información pública que representan el 1%, 1593 son habeas corpus que corresponden al 73 %, 97 son habeas data y equivalente al 5 %, 389 corresponden a la acción de protección, que equivalen al 18% y la acción de protección con medida cautelar siendo el número ingresado de 74 que pertenecen al 3 % de las causas ingresadas.

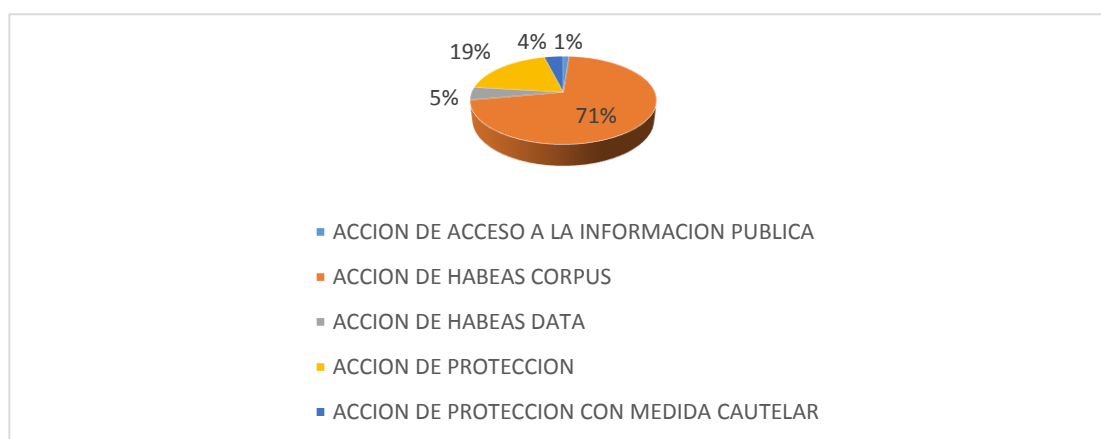


Figura 2. Causas resueltas año 2015 (2162)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Del gráfico que antecede, se colige que de las 25 causas correspondientes a acceso a la información pública el 1 % de causas ingresadas fueron resueltas. En el caso de acciones relativas a habeas corpus, un 71 % ha sido resuelto. Con relación a las causas de habeas data el mismo 5 % fueron resueltas. De las 389 causas de acción de protección que se había indicado que equivale al 18 % de causas ingresadas, fueron resueltas un total de un 19 %, pues la diferencia del 1 % en estas causas se debe justamente a que dentro de este año se han resuelto causas pendientes de resolver de años anteriores. Del 3 % de causas ingresadas relacionadas a acción de protección con medida cautelar se desprende que un 4 % del número de causas han sido resueltas.

Tabla 3
Causas ingresadas y resueltas en el año 2016

Provincia	Cantón	Acción	Año 2016	
			Causas ingresadas	Causas resueltas
Pichincha	Quito	Acción de acceso a la información pública	33	32
Pichincha	Quito	Acción de habeas corpus	949	1.003
Pichincha	Quito	Acción de habeas data	92	105
Pichincha	Quito	Acción de protección	463	470
Pichincha	Quito	Acción de protección con medida cautelar	74	79
Total			1.611	1.689

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Para el año 2016, tenemos 33 causas ingresadas correspondientes a acceso a la información pública, de las cuales se han resuelto 32 causas, es decir tenemos una causa pendiente de resolver.

Con relación al habeas corpus, tenemos 949 causas ingresadas y 1003 causas resueltas, lo cual nos muestra que de igual manera seguimos teniendo causas pendientes de resolver de los anteriores años.

El número de causas de habeas data es 92 como ingresos y 105 como número de causas resueltas, lo cual nos muestra que seguían causas pendientes de despacho para ser resueltas y que se han logrado resolver para este año.

Respecto de las acciones de protección, han ingresado 463 y como causas resueltas nos muestra un total de 470, al igual que las acciones de protección con medida cautelar tenemos 74 causas ingresadas y 79 resueltas, es decir el número de causas resueltas es mayor al número de causas ingresadas.

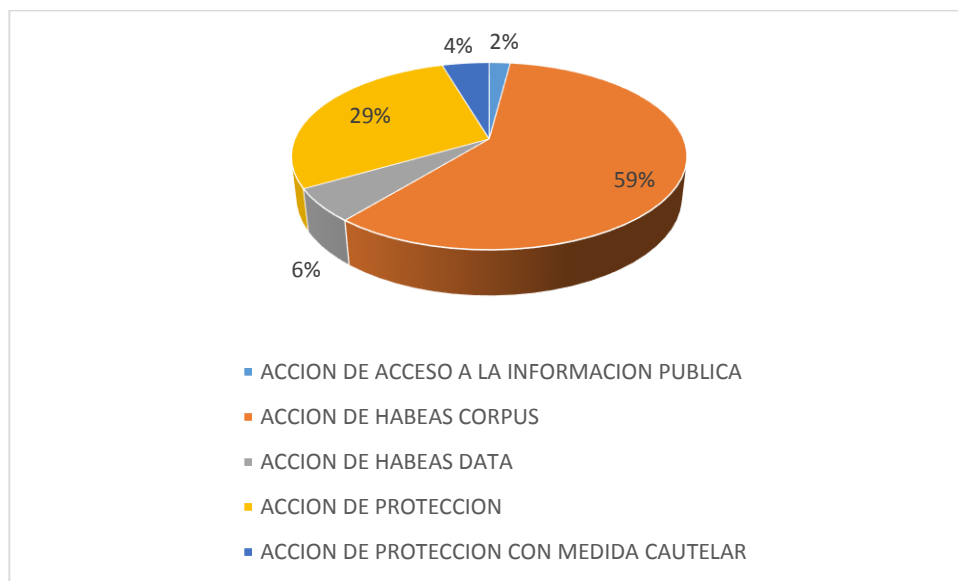


Figura 3. Causas ingresadas año 2016 (1611)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Para el año 2016, se han ingresado 1611 causas, de las cuales 33 causas son acceso a la información pública que pertenecen al 2 %, del cual podemos notar un incremento de estas causas con relación al año 2015. 949 causas son habeas corpus que corresponden el 59%. 92 causas son habeas data equivalente al 6%. Tenemos 463 causas que corresponden a la acción de protección que equivale al 29%, es decir que hubo un incremento de este tipo de acciones a diferencia del año 2015 y también se hace referencia a la acción de protección con medida cautelar siendo el número de 74 causas que pertenecen al 4 % de las causas ingresadas, como podemos notar hay un mismo número de ingreso de acciones de protección con medida cautelar en comparación con el año 2015.

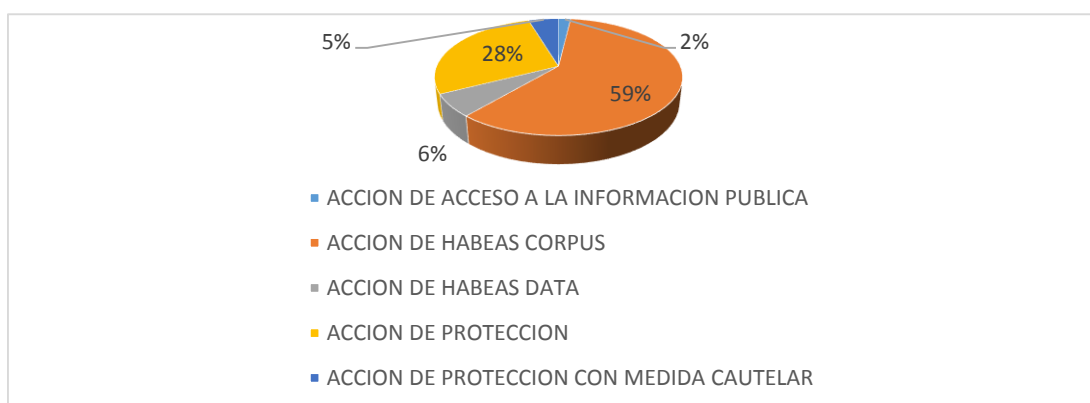


Figura 4. Causas resueltas año 2016 (1689)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia.

En el año 2016 el 2 % de acciones de acceso a la información pública han sido resueltas. El 59 % del número de causas resueltas corresponden a acciones de habeas corpus. Un 6 % corresponde a habeas data. El 28 % son acciones de protección resueltas y un 5 % corresponden a las acciones de protección con medida cautelar. Sin embargo, de los datos extraídos, no se puede determinar que las causas resueltas tengan relación con las causas ingresadas.

Tabla 4
Causas ingresadas y resueltas en el año 2017

Provincia	Cantón	Acción	Año 2017	
			Causas ingresadas	Causas resueltas
Pichincha	Quito	Acción de acceso a la información publica	46	48
Pichincha	Quito	Acción de habeas corpus	271	290
Pichincha	Quito	Acción de habeas data	109	104
Pichincha	Quito	Acción de protección	607	600
Pichincha	Quito	Acción de protección con medida cautelar	90	93
Total			1.123	1.135

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

En el año 2017 han ingresado 46 causas referentes a acciones de acceso a la información pública y se registran como 48 causas resueltas; es decir, que la presentación de este tipo de acciones se incrementó a diferencia de años anteriores.

Como podemos notar en este año se registran 271 causas de habeas corpus ingresadas a diferencia de los años anteriores que nos mostraban números superiores incluso a las mil causas, para el año 2017 se han registrado como 290 causas resueltas,

que como se indicó en líneas anteriores, se han registrado como causas resueltas también causas que ingresaron en años anteriores y que han sido resueltas en el año 2017.

Con relación al habeas data, han ingresado 109 causas y se registran 104 causas resueltas, es decir que tenemos un sobrante de 5 causas que posiblemente deberían registrarse como resueltas para el año 2018.

Para el año 2017 notamos un incremento de las acciones de protección, pues han ingresado 607 causas, es decir, 144 causas más que las que ingresaron para el año 2016, pues se han registrado como resueltas 600 causas, dejando 7 causas pendientes de resolver. De igual forma, se muestra un incremento de causas ingresadas con relación a las acciones de protección con medidas cautelares, son 90 causas que se registran como ingresadas y 93 causas resueltas, confirmando así el despacho pendiente del año anterior.

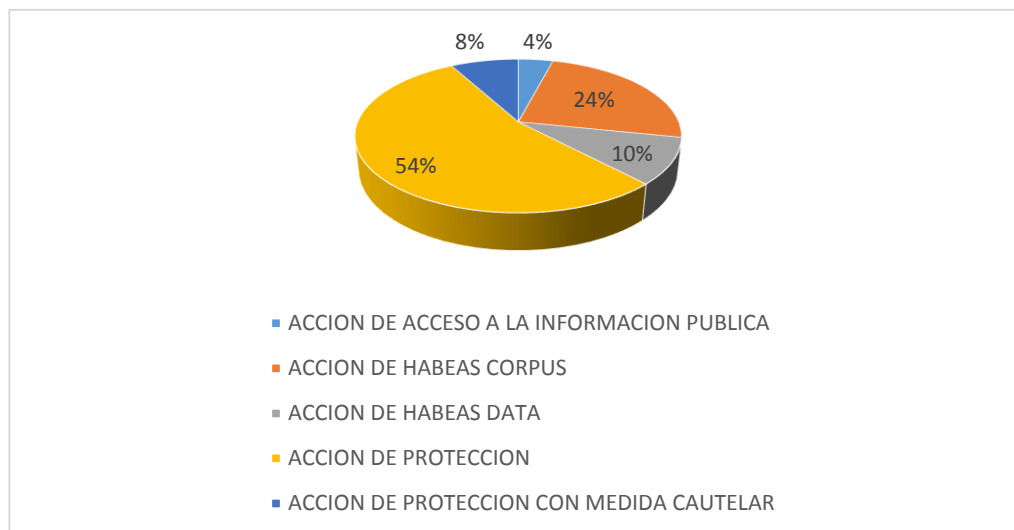


Figura 5. Causas ingresadas año 2017 (1623)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Para el año 2017 la acción de acceso a la información pública representa el 4 % de causas ingresadas. La acción de habeas corpus representa un 24 % de las causas ingresadas, a diferencia de los años anteriores que representaba un porcentaje superior entre todas las acciones constitucionales ingresadas. La acción de habeas data representa un 10 % de causas ingresadas, la acción de protección representa el 54 % de causas ingresadas, es decir el ingreso de causas relativas a acciones de protección para el año 2017 ha sido mayor, de igual manera se ha registrado el 8 % de causas ingresadas que corresponden a acciones de protección con medida cautelar.

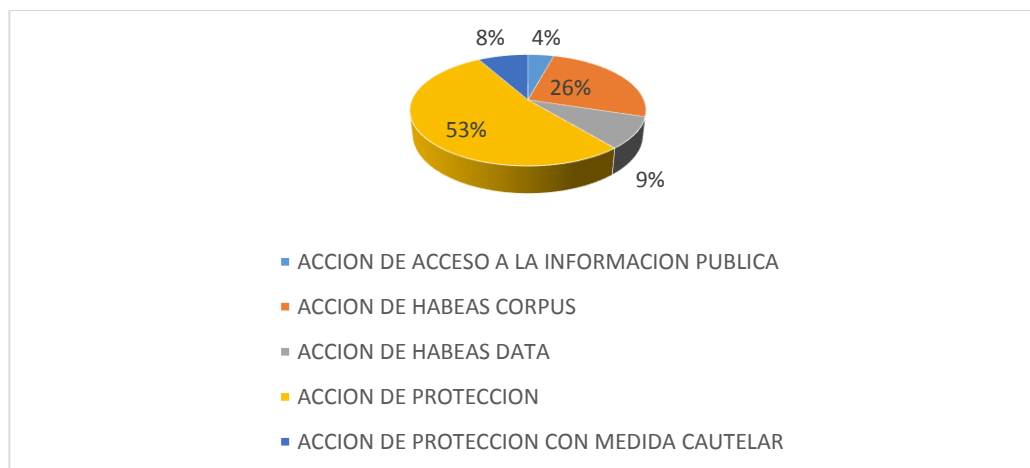


Figura 6. Causas resueltas año 2017 (1135)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Del número de causas resueltas un 4 % corresponden a acciones de acceso a la información pública, es decir, un porcentaje mayor a diferencia de años anteriores ya analizados. Del total de causas resueltas para el año 2017, el 26 % de causas resueltas corresponden a acciones de habeas corpus. El 9 % de causas resueltas corresponden al habeas data. Con relación a las acciones de protección se han resuelto un 53 %, un porcentaje mayor a diferencia de años anteriores, ya que como se había indicado hubo un aumento considerable de este tipo de acciones para el año 2017. El 9 % de causas resueltas corresponden a acciones de protección con medida cautelar, estas causas en años anteriores representaban hasta un 5 %.

Tabla 5
Causas ingresadas y resueltas en el año 2018

Provincia	Cantón	Acción	Año 2018	
			Causas ingresadas	Causas resueltas
Pichincha	Quito	Acción de acceso a la información pública	86	80
Pichincha	Quito	Acción de habeas corpus	233	238
Pichincha	Quito	Acción de habeas data	112	110
Pichincha	Quito	Acción de protección	1.150	1.092
Pichincha	Quito	Acción de protección con medida cautelar	165	156
Total			1.746	1.676

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

En el año 2018, han ingresado 86 causas referentes a la garantía de acceso a la información pública, del cual se muestra que un total de 80 causas se registran como resueltas, pues al tener causas pendientes de años anteriores, es muy difícil determinar

que dentro de esas 80 causas resueltas se encuentren 80 causas que ingresaron en el mismo año 2018 y establecer que faltaron 6 causas de resolver.

Con relación al habeas corpus, vemos como el número de causas ingresadas a diferencia de años anteriores para el 2018 ha disminuido, siendo que han ingresado 233 causas y han sido resueltas 238.

El habeas data de igual manera ha incrementado su número de ingreso, pues para el año 2018 tenemos que han ingresado 112 causas y han sido resueltas 110 causas, pues se nota que en este tipo de garantía de igual manera no se sabe si esas 2 causas que faltan para que sea relacionado con el número de ingreso pertenecen a las causas ingresadas de ese mismo año o de años anteriores.

Para el año 2018, se ha incrementado notablemente el número de ingreso de acciones de protección pues estas suman un número de 1150 y se registran 1092 causas resueltas, de igual manera han ingresado 165 causas de acciones de protección con medida cautelar y han sido resueltas 156 causas, pues, tanto en el número de causas ingresadas como causas resueltas se registran un aumento considerable de estas causas para el año 2018 a diferencia de años anteriores.

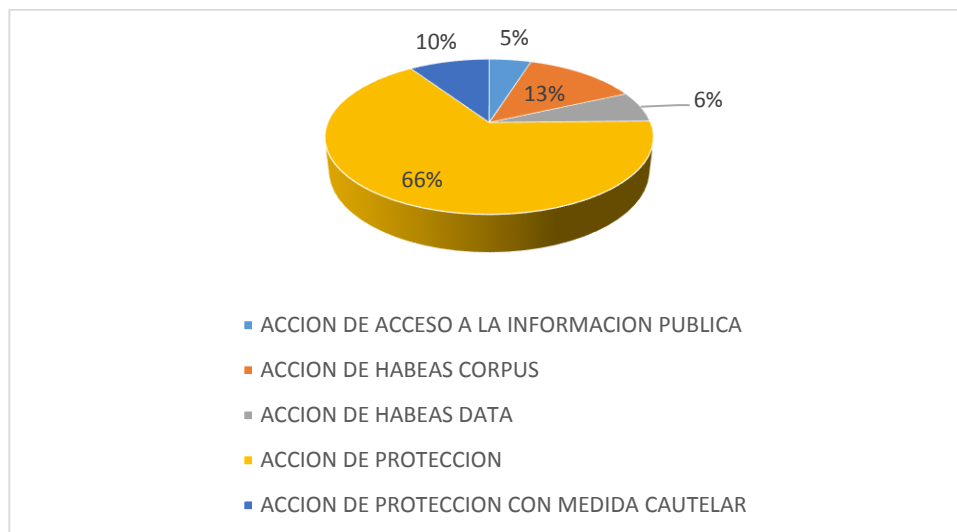


Figura 7. Causas ingresadas año 2018 (1746)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Para el año 2018 la acción de acceso a la información pública representa el 5 % de causas ingresadas. La acción de habeas corpus representa un 13 % de las causas ingresadas, se resalta de igual manera que esta acción ha disminuido el número de ingreso. La acción de habeas data representa un 6 % de causas ingresadas, la acción de protección representa el 66 % de causas ingresadas, es decir el ingreso de causas relativas a acciones

de protección para el año 2018 ha sido mayor con relación a los años anteriores, de igual manera se ha registrado el 10 % de causas ingresadas que corresponden a acciones de protección con medida cautelar.

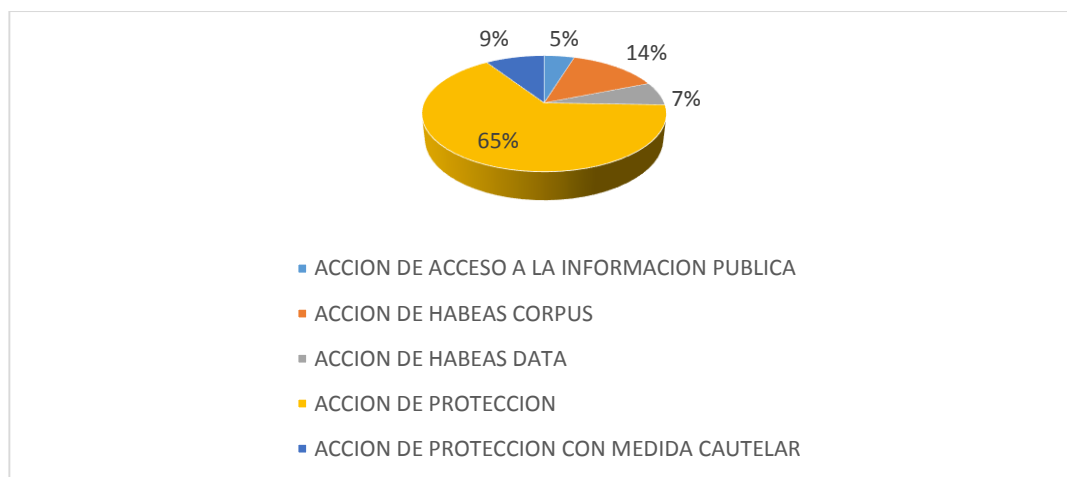


Figura 8.Causas resueltas año 2018 (1676)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Del número de causas resueltas un 5% corresponden a acciones de acceso a la información pública, es decir, un porcentaje mayor a diferencia de años anteriores ya analizados. Del total de causas resueltas para el año 2018, el 14% de causas resueltas corresponden a acciones de habeas corpus, como habíamos indicado su ingreso y por lo tanto el número de causas resueltas han ido disminuyendo. El 7% de causas resueltas corresponden al habeas data. Con relación a las acciones de protección se han resuelto un 65%, un porcentaje mayor a diferencia de años anteriores, ya que como se había indicado hubo un aumento considerable de este tipo de acciones para el año 2018. El 9% de causas resueltas corresponden a acciones de protección con medida cautelar.

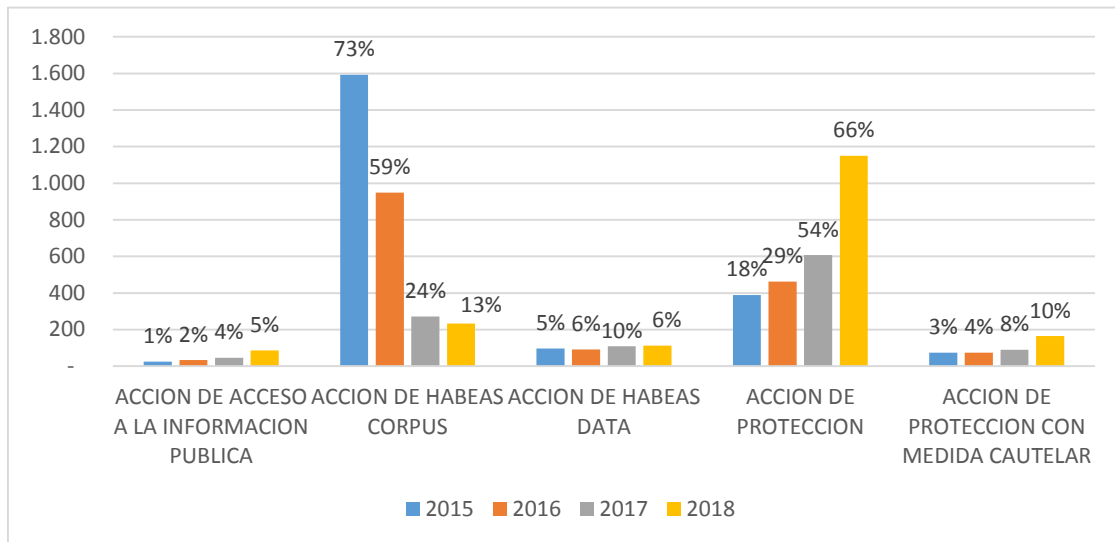


Figura 9. Ingreso de acciones constitucionales 2015-2018

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

En el gráfico se muestra como cada una de las acciones referentes a garantías jurisdiccionales (acción de acceso a la información pública, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de protección y acción de protección con medida cautelar) han ido variando según el número de ingreso de causas que representa dentro del año correspondiente, pues así tenemos que:

Para la acción de acceso a la información pública en el año 2015 representa el 1% de ingreso, en el año 2016 significa un 2 % del número de ingreso, para el año 2017 representa un 4 % según el número de ingreso de causas y para el año 2018 ya representa un 5 %, es decir que ha aumentado el uso de esta garantía dentro de la ciudadanía, se ha podido comprender entonces lo útil que puede ser la misma para amparar un derecho constitucional según el objeto de esta acción.

Quizás el hecho de que la interposición de esta garantía aumente para los años siguientes del 2015, se deba ya a la comprensión de mejor manera del ámbito de protección de esta garantía jurisdiccional y lo útil que puede llegar a ser en la protección de nuestros derechos fundamentales en relación al acceso a la información pública.

Debemos tomar en cuenta que en el año 2004 se expide la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), con el fin de regular el derecho a poder acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos

de interés general,¹¹⁸ conforme lo determinaba el artículo 81 de la Constitución Política del Ecuador, es decir, que a partir del año 2008 este derecho viene a constituirse una garantía como tal con la finalidad de proteger un derecho fundamental.

Es decir, constituye una garantía jurisdiccional nueva, lo que obligará a la ciudadanía en general al conocimiento del ámbito de protección de este derecho y se permite acceder al órgano jurisdiccional a fin de proteger el derecho fundamental de acceder a la información pública, cumpliendo los requerimientos exigidos en el ámbito administrativo (LOTAIP), por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional.

La acción de habeas corpus, en el año 2015, representa el 73 % del número de ingresos entre todas las garantías que se analizan,. Para el año 2016, de igual manera representa un porcentaje mayor del número de ingreso de causas siendo el 59 %. Sin embargo, para el año 2017 y 2018 ha disminuido considerablemente el porcentaje de ingreso de causas de habeas corpus, los mismos que equivalen a un 10 % y 6 %, respectivamente.

El habeas corpus constituye una de las garantías más usadas en nuestro país y justamente es por su ámbito de protección de la libertad de las personas, explicado de manera general, sin embargo, a lo largo de la historia esta garantía jurisdiccional va ampliando su ámbito de protección contra la privación arbitraria, ilegal o ilegítima, al amparo del derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad.

Para el año 2015, existía un mayor número de ingreso de causas referentes a las acciones de habeas corpus respecto de la privación de la libertad en el caso del incumplimiento de pensiones alimenticias, pues no era la solución para el cumplimiento de dicha obligación el hecho de privar de la libertad al obligado por cierto tiempo, entonces la acción de habeas corpus era usado para recobrar la libertad de estas personas, tomando en cuenta que podían ser obligados directos o subsidiarios conforme la norma que regía en ese entonces.

Verificada esta problemática, la Corte Constitucional en la Sentencia 012-17-SIN-CC de fecha 10 de mayo del 2017, a través de sus facultades logra establecer reglas aplicables al caso de las pensiones alimenticias y el uso del apremio personal, pues ya el juez debe verificar ciertas condiciones del alimentante para proceder a ejecutar el apremio

¹¹⁸ Ecuador, Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 1, 11 de agosto de 1998, art. 81.

real, sin dejar de lado el interés superior del menor de edad, entonces, como podemos observar la interposición de esta garantía jurisdiccional ha ido disminuyendo considerablemente hasta el año 2018.

Los datos que se muestran con relación al habeas data, indican que para el año 2015 correspondía a un 5 %, para el año 2016 representa un 6 %, para el año 2017 representa un 10 % y para el año 2018 equivale a un 6 % del número de causas ingresadas relativas a acciones de garantías jurisdiccionales.

Así como el acceso a la información pública, el habeas data, pese a que es una garantía jurisdiccional más antigua que la garantía de acceso a la información pública ya que la misma si estaba regulada en anteriores constituciones, actualmente, constituye también uno de los mecanismos de protección de derechos fundamentales menos usados por la ciudadanía.

No podemos afirmar a ciencia cierta los factores que impidan la interposición de estas garantías jurisdiccionales, pero si podemos resaltar que la Corte Constitucional ha desarrollado abundante jurisprudencia respecto del ámbito de protección de estos mecanismos constitucionales, con la finalidad de ampliar su contenido y que la ciudadanía pueda conocer qué derechos protege y como estas garantías pueden llegar a ser efectivas, lo cual ha permitido que con el paso de los años exista un aumento de la interposición de estas garantías jurisdiccionales.

La acción de protección ha sido una de las garantías jurisdiccionales que más se ha utilizado para la protección directa de nuestros derechos constitucionales, así tenemos que para el año 2015, del total de garantías jurisdiccionales ingresadas un 18 % pertenecen a acciones de protección, en el año 2016 equivale un 29 %, para el año 2017 corresponde un 54 %, es decir que a partir de este año es la garantía jurisdiccional que más se utiliza para activar la administración de justicia constitucional en los juzgados de primer nivel, de igual manera para el año 2018 representa un 66 % de causas ingresadas con relación a las garantías jurisdiccionales.

Es necesario resaltar que en un inicio parecería que no era de gran comprensión el objeto mismo de esta garantía jurisdiccional; ya que se pretendía el reconocimiento de algunos derechos a través de esta garantía sin poder delimitar situaciones que realmente le importaban a la materia constitucional con referencia a la protección de derechos fundamentales, es la jurisprudencia constitucional la que vendrá a ampliar el contenido de la acción de protección, la interpretación de las normas referentes a la acción de

protección y qué aspectos deberá considerar el juez para aceptar o no una acción de protección.

El hecho de que exista abundantes pronunciamientos de la Corte Constitucional para esta garantía jurisdiccional y para las demás garantías jurisdiccionales en general se podría decir, que ha generado mayor confianza por parte de la ciudadanía para acceder a la justicia con la finalidad de que sus derechos fundamentales sean protegidos.

En el caso de la acción de protección, se puede verificar a través del aumento considerable de ingreso de causas referentes a acciones protección; sin embargo, debemos tomar en cuenta si existen o no mayor numero de acciones de protección en contra del poder público o interpuestas por particulares en contra de particulares y cómo estas son aceptadas y ratificadas en Cortes Provinciales o no aceptadas también y es que de lo que podemos estar seguros es del apoyo del administrador de justicia en la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional que en gran medida viene a facilitar la comprensión de esta garantía jurisdiccional.

En los datos que hemos podido obtener se nos ha especificado como parámetro la acción de protección con medida cautelar, las cuales han representado desde el 2015 un 3 % de las causas ingresadas, para el año 2016 corresponde un 4 %, para el año 2017 corresponde un 8 % y para el año 2018 equivale a un 10 %, es decir, el uso de esta garantía va aumentando. Es necesario mencionar que de igual manera pueden existir medidas cautelares de carácter autónomas, de las cuales no tenemos referencia de acuerdo los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura.

No podemos dejar de lado el hecho de que tanto la Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales reconocen a las medidas cautelares como un mecanismo urgente de protección de derechos, la misma que debe ser interpuesta bajo varias condiciones fijadas por la norma y por la Jurisprudencia, las mismas que pueden actuar por sí mismas o en conjunto con una garantía jurisdiccional, en este tipo de acciones, lo que se debe cuidar justamente es que se comprenda su carácter urgente, y en virtud de aquello debe regirse su tramitación en las judicaturas, puede ser que la carga procesal impida que se cumpla con esta urgencia, sin embargo, esto no sería un pretexto para que en la tramitación se desconozca la naturaleza cautelar que tienen estas causas, bajo estas consideraciones, podemos notar el aumento de ingreso de causas verificado dicho ingreso a partir del año 2015 hasta el año 2018.

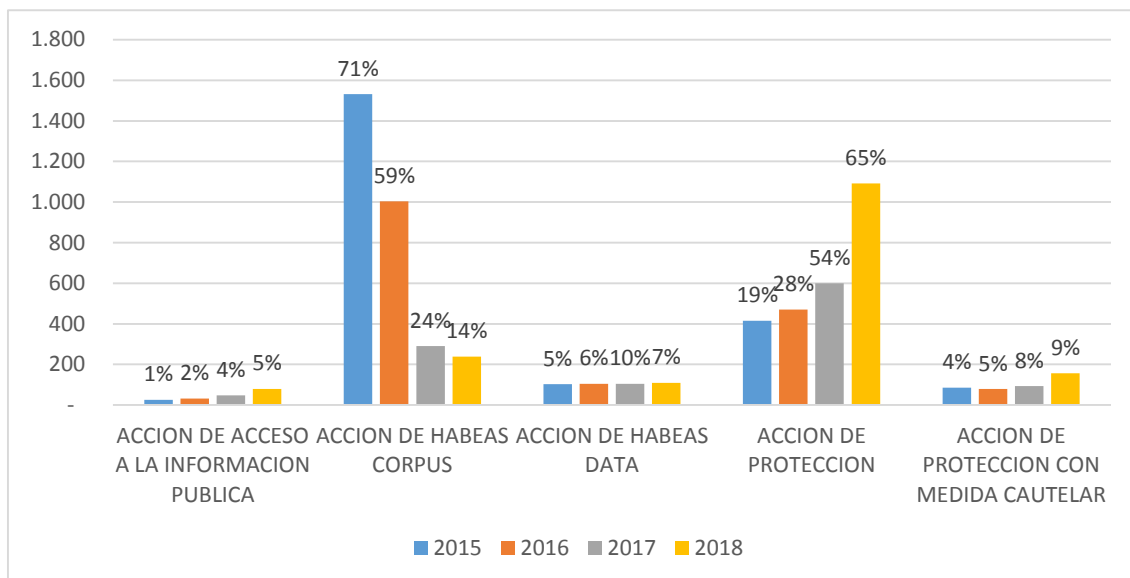


Figura 10. Acciones constitucionales resueltas (2015-2018)

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración propia

Como podemos observar el porcentaje de acciones resueltas, ha ido variando para cada año en cada acción constitucional, sin embargo, debemos resaltar que no podemos analizar estos datos en función de la carga que ingresa de manera anual, que se representó en un gráfico inmediato anterior, pues, se verifica que en algunas acciones constitucionales tenemos más causas resueltas, que causas ingresadas; esto se debe a que existe siempre una carga procesal pendiente de resolver de los años anteriores y que se han registrado resueltas dentro de años siguientes, lo que nos permite concluir, que la sustanciación y resolución de estas causas no siempre se encuentran conforme los términos y condiciones que se encuentran prescritos en la normativa legal vigente aplicable a la materia, debido a la carga procesal propia de la Judicatura y tomando en cuenta las prácticas de los juzgados; por lo tanto, se verifica lo siguiente:

En el caso de la acción de acceso a la información pública, verificamos que para el año 2015, existe un menor porcentaje de causas resueltas en todos los años; sin embargo, su porcentaje aumenta, esto en virtud, de que esta garantía jurisdiccional cada vez ha ido aumentando su uso.

En relación con el habeas corpus, verificamos que para el año 2015, existe un 71 % de causas resueltas, pues este porcentaje va decreciendo hasta el año 2018 en el cual constituye un 14 % de causas resueltas, pues esta garantía ha ido disminuyendo su uso

por parte de los usuarios de la justicia, lo cual conlleva a un menor número de ingreso y un menor número de causas resueltas en los años analizados.

En el caso del habeas data, del año 2015 al año 2017 el porcentaje de causas resueltas se ha ido aumentando, pues para el año 2018 notamos que el porcentaje de causas resueltas ha disminuido en un 3 %.

Respecto de la acción de protección se verifica que a partir del 2017 es la garantía jurisdiccional más activada por la ciudadanía, lo que se indica que para el año 2017 constituye un 54 % de causas resueltas y para el año 2018 constituye un 65 % de las causas resueltas, siendo que la misma, tiene como antecedente la acción de amparo que antes de la vigencia de la Constitución del 2008 venía a constituirse una garantía jurisdiccional para el amparo directo de los derechos constitucionales. Al igual que las otras garantías, no podríamos determinar si los datos de causas resueltas están en función de las causas ingresadas, pues existe un rezago de años anteriores, además que tampoco se determinaría si todas las causas ingresadas fueron resueltas.

En el reporte proporcionado también se hace alusión al porcentaje de causas resueltas de acciones de protección con medida cautelar, pues verificamos que ha incrementado a partir del 2015 su porcentaje de resolución, lo que nos lleva a concluir que cada vez se está aumentando el uso de esta garantía hasta el 2018; sin embargo, no se han registrado datos de medidas cautelares de carácter autónomas, que si bien no son una garantía jurisdiccional como tal, sino medidas de carácter preventivas, son usadas por la ciudadanía para evitar que los derechos constitucionales sean vulnerados o cesar la vulneración de un derecho constitucional.

En relación a los datos estadísticos que hacen referencia al número de causas resueltas, es necesario mencionar que debemos tomar en cuenta las realidades que presentan cada judicatura que tramita este tipo de acciones, pues a más de la competencia especializada en la materia propia de la Judicatura, se les ha otorgado la competencia de conocer garantías jurisdiccionales y es que no siempre se pueden dar cumplimiento a los plazos, términos y condiciones establecidos en la norma para el tratamiento de garantías jurisdiccionales, lo cual puede estar fuera de la voluntad del juzgador, por lo que se debería analizar minuciosamente cómo son tratadas estas causas en cada Judicatura desde el inicio mismo del ingreso y el sorteo previo de las causas.

Sin bien es cierto, existen normas comunes referentes a las garantías jurisdiccionales, pero cada una debe ser comprendida en su particularidad y de igual manera cada caso, por citar un ejemplo, las audiencias no se las puede realizar dentro de

los términos exigidos por la normativa, pues uno de los factores es que ya existirán diligencia fijadas con anterioridad a la interposición de la garantía jurisdiccional y el juez debe atender los requerimientos de todas las causas en el cual es competente, entonces, la tramitación referente a las garantías jurisdiccionales con relación al tiempo en las que estas deben ser tramitadas deberán acoplarse a la agenda de la judicatura, sin que esto constituya vulneración de derechos.

2. Las acciones constitucionales en el año 2018

Como hemos notado en los reportes anteriores, el año 2018 se torna bastante interesante, por cuanto, se verifica un menor número de ingreso de causas de habeas corpus, acción que para el año 2015 era la más usada por la ciudadanía y como la presentación de las otras garantías jurisdiccionales se ha incrementado. De las causas que nos arroja el Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), nos presenta un total de 1746 causas ingresadas como se indicó anteriormente, mientras que del reporte del libro de ingresos de procesos e-SATJE, nos presenta un total de 1308 causas de materia constitucional incluidas medidas cautelares, es decir, existe una diferencia de 438 causas entre los dos reportes.

A continuación se muestra el número de causas ingresadas en el año 2018 correspondiente al sistema de garantías jurisdiccionales, en el cual se incluyen procesos de medidas cautelares autónomas, que como se indicó en el anterior reporte no se muestran datos de estas causas, a fin de demostrar que cada vez se aumenta el uso de garantías jurisdiccionales en la ciudadanía, lo cual debería motivar a la implementación de estas judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales y se precautele la tutela judicial efectiva de la ciudadanía que acude a la administración de justicia, para luego realizar un análisis de la muestra de sentencias que se obtendrá a través del método de saturación.

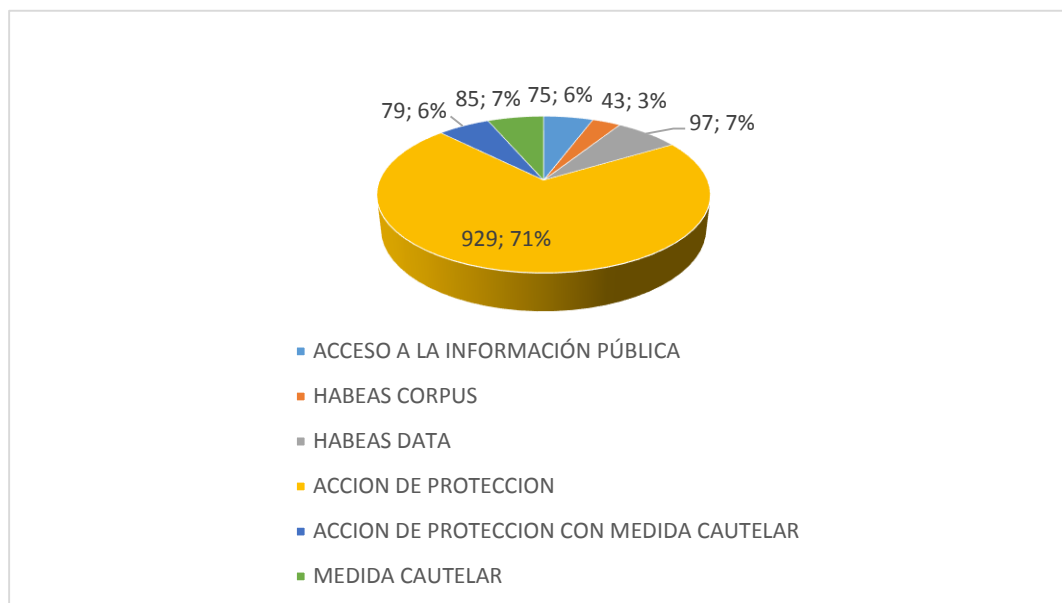


Figura 11. Reporte del libro de ingreso de procesos 2018 (1308)

Fuente: Libro de ingresos de procesos e-SATJE

Elaboración propia

Del gráfico que antecede, se muestra lo siguiente: tenemos que la acción de acceso a la información pública representa un 6 %, el habeas corpus, representa un 3 % de los procesos que se han ingresado, el habeas data equivale a un 7 %, la acción de protección se muestra en un 71 %, lo cual indica que es la garantía jurisdiccional más utilizada en estos tiempos, también se registran causas referentes a la acción de protección con medida cautelar, siendo un 6 % del total de las causas y también tenemos datos de las medidas cautelares autónomas que representan en este caso un 7 %.

Como podemos observar el porcentaje de cada garantía jurisdiccional nos podría demostrar que la ciudadanía no deja de confiar en el establecimiento de estos mecanismos de protección de derechos fundamentales, pues existe un aumento considerable de la presentación de las acciones constitucionales, lo cual debería motivar a la Función Judicial a optar por mecanismos que puedan mejorar la tramitación de estas causas y suplir las falencias que se puedan apreciar a través de la evaluación que el organismo realice, esto, con la finalidad de que las garantías jurisdiccionales se acerquen más a la ciudadanía, partiendo del hecho de dar a conocer a través de programas de capacitación sobre el contenido de este tipo de acciones y como activarlas ante la jurisdicción.

3. Algunos datos estadísticos sobre la justicia constitucional peruana

A continuación, analizaremos de una manera cuantitativa el desenvolvimiento de la justicia constitucional en Perú dentro del período enero a diciembre del 2018, a partir de los datos proporcionados por el Poder Judicial de Perú.

Es necesario empezar indicando, que no es comparable de manera cuantitativa la situación de nuestro país con Perú; por cuanto, responden a realidades distintas, ya que en dicho país se cuenta ya con una justicia especializada en acciones de garantías jurisdiccionales y que por tal motivo la carga procesal es superior a la nuestra dentro de esta materia, es decir, el acceso a la justicia constitucional se encuentra garantizado desde el momento mismo en que se cuenta con judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales, así encontramos lo siguiente:

Período: Enero - Diciembre 2018

23 de Enero de 2019

Órgano Jurisdiccional / Especialidad	Nº Dependencias	Pendientes al 01/01/2018 (A)	Ingresados (B)	Carga Procesal (C = A + B)	Procesos Resueltos
Salas Superiores	220	90 321	188 271	278 592	174 640
Civil	53	19 338	64 088	83 426	58 502
Constitucional	2	0	4 028	4 028	2 782
Contencioso Administrativo	7	10 496	9 291	19 787	9 510
Familia	2	786	2 359	3 145	2 275
Laboral	39	26 504	57 468	83 972	56 687
Mixto	25	6 993	18 419	25 412	16 467
Penal	92	26 204	32 618	58 822	28 417
Mixtos	1 653	1 241 473	998 326	2 239 799	1 008 358
Civil	240	237 436	153 614	391 050	148 816
Constitucional	15	18 157	14 347	32 504	12 259
Contencioso Administrativo	26	29 770	13 794	43 564	15 286
Familia	248	195 219	281 310	476 529	300 807
Laboral	173	244 135	156 783	400 918	121 125
Mixto	170	139 276	112 920	252 196	111 063
Penal	776	372 175	263 893	636 068	296 930
Tránsito	5	5 305	1 665	6 970	2 072
Juzgados de Paz letrados	626	801 924	566 501	1 368 425	541 396
Total	2 499	2 133 718	1 753 098	3 886 816	1 724 394

Figura 12. Carga procesal y procesos resueltos, por órgano jurisdiccional y especialidad
Fuente: Estadística de la función jurisdiccional a nivel nacional
Elaboración: Gerencia General, Gerencia de Planificación, Sub Gerencia de Estadística

En el cuadro se verifica primero la implementación de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales, es decir, que a nivel nacional Perú cuenta con 15 judicaturas especializadas en materia constitucional y dos Salas Superiores especializadas, lo que demuestra el gran afán que tiene este país en mejorar la justicia constitucional, permitiéndole a la ciudadanía el acceso a la justicia y mejorar su confianza en el sistema de administración de justicia constitucional.

Segundo, observaremos como en los 15 juzgados constitucionales existe una carga procesal superior a 2000 causas referentes a garantías jurisdiccionales, número de acciones que aproximadamente ingresan en nuestro país, en las 15 dependencias jurisdiccionales especializadas en lo constitucional contamos con un total de 32504 causas relativas a las acciones constitucionales, incluidas las causas pendientes al 1 de enero del 2018 que han sido un total de 18157 causas, lo cual demuestra que para el año 2018 han ingresado 14347 causas, del total de 32504 causas se observa que han sido resueltas 1259 causas, es decir, el 37,71 % de las causas, de lo cual colegimos que la ciudadanía no encuentra limitación alguna para activar las garantías jurisdiccionales con el afán de proteger sus derechos fundamentales.

Si bien no se verifica que el total de la carga procesal sea resuelta dentro del año analizado, se puede evidenciar que podría existir un afán en mejorar el sistema de administración de justicia relacionada con las garantías jurisdiccionales.

De igual manera, podemos verificar el número de causas por materia que han ingresado en el año 2018, a fin de establecer el porcentaje equivalente a cada materia según el número de ingreso de causas, así tenemos lo siguiente:

Tabla 6
Ingreso de Causas (Perú 2018)

Materia	Causas Ingresadas
Civil	153614
Constitucional	14347
Contencioso Administrativo	13794
Familia	281310
Laboral	156783
Penal	263893
Transito	1665
Total	885406

Fuente: Estadística de la función jurisdiccional (peruana) a nivel nacional
Elaboración propia

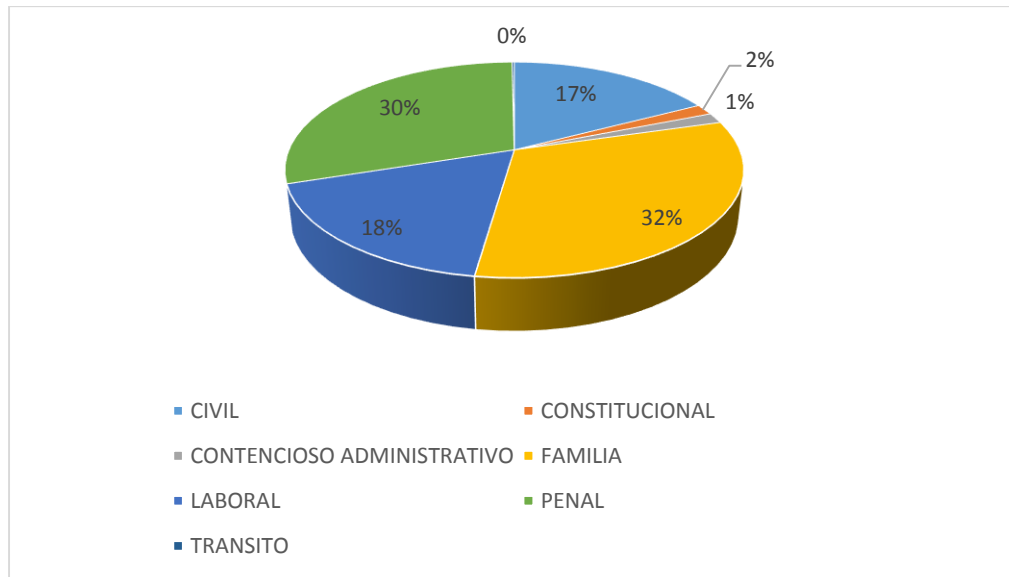


Figura 13. Ingreso de causas (Perú 2018)

Fuente: Estadística de la función jurisdiccional peruana

Elaboración propia

En la tabla detallada anteriormente y en el gráfico que antecede podemos verificar el porcentaje que equivale a cada materia que se sustancian y se resuelven en los órganos jurisdiccionales de Perú, verificamos que la materia de familia equivale a un 30 %, penal equivale a un 30 %, laboral equivale a un 18 %, civil corresponde a un 17 %, constitucional es un 2 %, contencioso administrativo equivale a 1 % y la materia de tránsito un 0 %.

Colegimos, que la materia constitucional esta encima de la materia contencioso-administrativa y de tránsito, si bien es cierto, son porcentajes bajos, sin embargo, ese 2 % que equivale nos demuestra que la ciudadanía está haciendo uso de las garantías jurisdiccionales vigentes en Perú y si este porcentaje con el paso de los años iría aumentando pues la exigencia sería en seguir creando más juzgados de carácter constitucional especializados en la materia.

En contraste con nuestro país, encontramos lo siguiente:

Tabla 7
Ingreso de Causas (Ecuador 2018)

Materia	Causas Ingresadas 2018
Adolescente Infractor	6.226
Civil	107.279
Constitucional	6.970
Contencioso Administrativo	5.343

Contencioso Tributario	1.823
Contravenciones	19.165
Familia Mujer, Niñez y Adolescencia	143.382
Garantías Penitenciarias	99
Inquilinato	462
Penal	108.523
Trabajo	20.415
Tránsito	115.642
Violencia Contra la Mujer y Familia	67.704
Total general	603.033

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE)

Elaboración: Consejo de la Judicatura

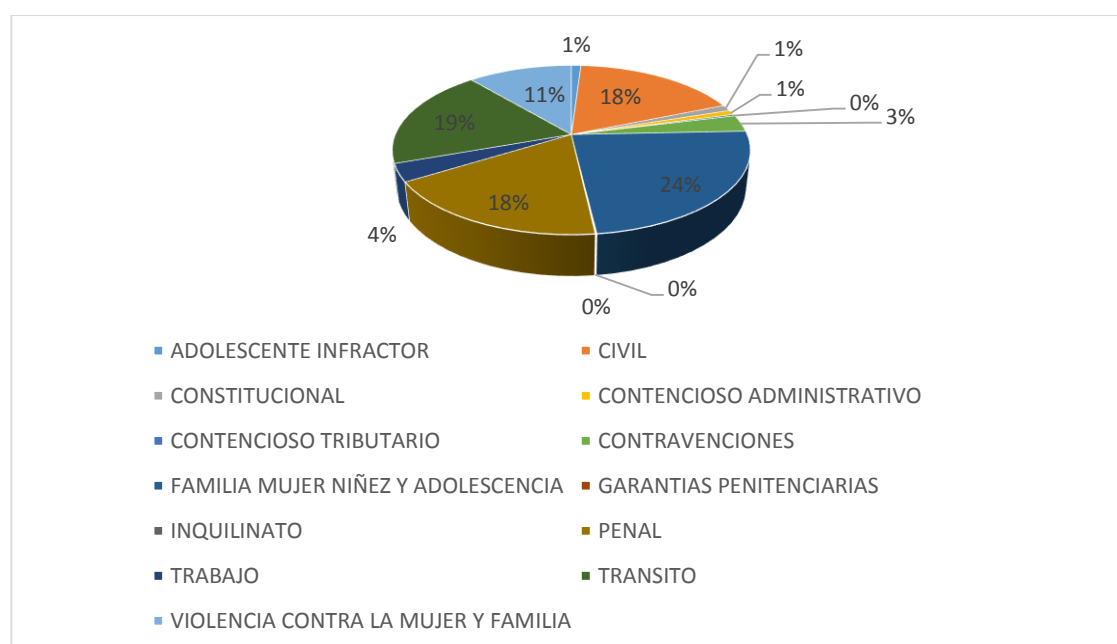


Figura 14. Ingreso de causas (Ecuador 2018)

Fuente: Estadística de la función jurisdiccional a nivel nacional

Elaboración propia

Como podemos observar en nuestro país se pueden visibilizar más materias en las que se ha podido establecer juzgados especializados, sin embargo, no se ha logrado que la justicia constitucional también tenga sus juzgados especializados en esta materia con observancia en el principio de especialidad consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Encontramos que el 24 % corresponde a la materia de familia, niñez y adolescencia, en la materia de tránsito equivale a un 19 %, en materia civil tenemos un 18 % al igual que en materia penal otro 18 %, así mismo se verifica que los casos de violencia contra la mujer y la familia equivale a un 11%, materia de trabajo un 4 %, en

materia contravencional un 3%, en materia contencioso administrativa 1 %, materia constitucional 1 %, materia de adolescentes infractores de igual manera equivale 1 %, materia constitucional 1 %, en materias contencioso tributario, garantías penitenciarias e inquilinato equivalen a un 0 %.

A pesar de que la materia constitucional corresponde al 1 %, no debemos dejar de lado que se debe adoptar cada vez mecanismos que permitan el mejoramiento en el tratamiento de estas causas, pues a través de los organismos correspondientes se deberá evaluarse las ventajas y desventajas de la realidad respecto de las garantías constitucionales y verificar la posibilidad de establecer judicaturas especializadas en materia constitucional, a fin de cumplir con las exigencias que de dicha evaluación se deriven, en caso de que esta fuera una de las soluciones a los múltiples inconvenientes que se podrían presentar en la tramitación de estas causas tanto en judicaturas de primer nivel y en las diferentes Cortes Provinciales .

Otro dato importante que podemos extraer del informe sujeto de análisis en este capítulo es el reporte de cuantas causas diarias ingresan a las Salas Superiores y los Juzgados de instancia, pues en virtud de aquello, podemos determinar qué tan pronta puede ser la justicia constitucional cuando existen judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales, así tenemos lo siguiente:

23 de Enero de 2019

Órgano Jurisdiccional / Especialidad	N° Dependencias		Ingresados			Resueltos		
	Cantidad	%	Total	Promedio Diario	Promedio Diario por Dependencia	Total	Promedio Diario	Promedio Diario por Dependencia
Salas Superiores	220	8.8%	184 114	748	3.4	173 760	706	3.2
Civil	53	2.1%	63 143	257	4.8	58 470	238	4.5
Constitucional	2	0.1%	4 018	16	0.0	2 782	11	0.0
Contencioso Administrativo	7	0.3%	8 994	37	5.2	8 967	36	5.2
Familia	2	0.1%	2 343	10	4.8	2 080	8	4.2
Laboral	39	1.6%	56 703	231	5.9	56 686	230	5.9
Mixto	25	1.0%	17 435	71	2.8	16 446	67	2.7
Penal	92	3.7%	31 478	128	1.4	28 329	115	1.3
Juzgados Especializados y Mixtos	1 653	66.1%	856 578	3 482	2.1	922 554	3 750	2.3
Civil	240	9.6%	135 318	550	2.3	137 667	560	2.3
Constitucional	15	0.6%	10 821	44	2.9	11 266	46	3.1
Contencioso Administrativo	26	1.0%	12 739	52	2.0	11 916	48	1.9
Familia	248	9.9%	261 405	1 063	4.3	288 801	1 174	4.7
Laboral	173	6.9%	113 361	461	2.7	114 515	466	2.7
Mixto	170	6.8%	99 691	405	2.4	105 648	429	2.5
Penal	776	31.1%	222 273	904	1.2	251 103	1 021	1.3
Tránsito	5	0.2%	970	4	0.8	1 638	7	1.3
Juzgados de Paz letrados	626	25.1%	466 512	1 896	3.0	518 196	2 106	3.4
Total	2 499	100.0%	1 507 204	6 127	2.5	1 614 510	6 563	2.6

Figura 15. Promedio diario por dependencia de los ingresos y resueltos en trámite por especialidad

Fuente: Estadística de la función jurisdiccional a nivel nacional

Elaboración: Gerencia General, Gerencia de Planificación, Sub Gerencia de Estadística

En la Sala Superior Constitucional tenemos que: diariamente ingresan 16 causas, y diariamente se resuelven 11 causas, es decir, que existe un sobrante de cinco causas que podrían encontrarse dentro de los procesos pendientes de resolver para que pueda equipararse la carga que ingresa diariamente y la que se resuelve, lo cual se podría considerar como aceptable, mientras que en los juzgados especializados constitucionales tenemos que ingresan diariamente 44 causas y son resueltas 46 causas, como se dijo en líneas anteriores estos datos obedecen a la tramitación propia de cada materia conforme a la normativa que rige la materia, al igual que en nuestro país, sin embargo, también en Perú se resalta el hecho de la tramitación preferente de las garantías constitucionales con relación a otras materias.

4. Análisis de sentencias sobre garantías jurisdiccionales emitidas por los juzgados de primer nivel

Una vez que hemos analizado de manera cuantitativa el cómo se desenvuelve la justicia constitucional en lo que respecta a las garantías jurisdiccionales sustanciadas por los juzgados de primer nivel en nuestro país de manera cuantitativa, es necesario entonces, abordar el tema de manera cualitativa, lo cual se logrará a partir de la operacionalización de variables partiendo del establecimiento de la variable dependiente y la variable independiente del presente tema de investigación.

A partir del establecimiento de la variable dependiente e independiente, se fijarán los parámetros en los cuales se centrará el análisis de las sentencias, las mismas que han sido seleccionadas de manera aleatoria del universo de sentencias que hemos podido recabar pertenecientes al 2018, que corresponden a la acción de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública y referente a medidas cautelares, que como sabemos son acciones constitucionales que se tramitan en juzgados de primer nivel de cualquier materia. Para luego determinar que con el establecimiento de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales estaríamos asegurando la tutela judicial efectiva en el elemento de debida diligencia, en los procesos de garantías jurisdiccionales. A continuación, se muestra el cuadro de operacionalización de variables:

Tabla 8
Operacionalización de variables

VARIABLE	CONCEPTO	INDICADOR
VARIABLE INDEPENDIENTE: Falta de Judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales.	Tanto la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que las acciones de garantías jurisdiccionales (acción de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública) y las medidas cautelares deben ser tramitadas y resueltas por juzgados de primer nivel de cualquier materia y en segunda instancia por cualquiera de las salas que conforma la Corte Provincial.	<ul style="list-style-type: none"> Regulación en la Constitución de la República del Ecuador Regulación en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
VARIABLE DEPENDIENTE: Inadecuada tutela judicial efectiva en las causas referentes a garantías jurisdiccionales.	Tutela judicial efectiva <ul style="list-style-type: none"> Acceso al órgano jurisdiccional. Debido proceso. Emisión de sentencias motivadas. Ejecución de sentencias. Plazo razonable. 	Acceso al órgano jurisdiccional: <ul style="list-style-type: none"> Competente Independiente Imparcial Debido proceso <ul style="list-style-type: none"> Derecho a la defensa Valoración de la prueba Celeridad Sentencia motivada <ul style="list-style-type: none"> Lógica Razonabilidad Comprensibilidad Ejecución de las sentencias Plazo razonable <ul style="list-style-type: none"> Complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado. Conducta de la autoridad judicial.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, jurisprudencia constitucional.

Elaboración propia

Al tener un número considerable de sentencias que podrían ser objeto de análisis para esta sección correspondientes al año 2018, se escogieron tres sentencias de cada acción, tanto de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública y también se incluyen las medidas cautelares, que si bien es cierto no constituyen garantías jurisdiccionales, sin embargo, estas medidas tienen el mismo fin de las garantías, que es proteger o salvaguardar los derechos fundamentales de los justiciables, las mismas que pueden ser presentadas de manera conjunta o autónoma. De 15 sentencias analizadas, hemos encontrado lo siguiente:

4.1. Acceso al órgano jurisdiccional (competente, independiente e imparcial)

Determinamos que, en la totalidad de las sentencias analizadas, las causas están siendo conocidas por judicaturas de primer nivel, inobservando el principio de

especialidad que debe regir en las judicaturas; por lo tanto, nuestro país al omitir la observación de este principio no estaría garantizando la tutela judicial efectiva en su elemento de debida diligencia dentro de estas causas. Existe competencia para el conocimiento y decisión de estas causas, ya que la misma se encuentra determinada en la Constitución y la Ley; por lo tanto, deben ser observados los principios de independencia e imparcialidad en todas las materias dentro de la administración de justicia, sin excepción alguna.

4.2. Debido proceso (derecho a la defensa, valoración de la prueba, celeridad)

Con relación al debido proceso, tomando como referencia la garantía del derecho a la defensa, cómo se ha llegado a valorar la prueba en los procesos constitucionales y la celeridad con la que deben contar estos procesos, se ha observado que de los 15 procesos analizados en 12 de ellos se ha notado dicha vulneración, por citar algunos ejemplos:

En el caso 17985-2018-00171, referente a una acción de acceso a la información pública, seguido por Rizzo Valladares Manuel Esteban en contra de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tramitado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, niñez y adolescencia con sede en la Parroquia Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, se hace mención lo siguiente:

La PRUEBA, en materia constitucional, al igual que las demás ramas del derecho, se rige con similares principios y reglas de la justicia ordinaria. En este sentido, desde la doctrina, la “Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en un sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. Desde la ley, la persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierta la carga de la prueba. En mérito de lo expuesto y sin perjuicio que, el accionante NO acreditó la negativa del acceso a la información con prueba documental; el legitimado pasivo SI acreditó con la respuesta a la demanda de acceso a la información pública.”¹¹⁹

En la presente causa, como se puede notar estamos asimilando que la prueba en los procesos constitucionales debe ser tratada como en los procesos ordinarios de otras materias, pese a resaltar la inversión de la carga de la prueba en este proceso al ser dirigido en contra de una institución pública, se precisa que el accionante no ha presentado prueba documental alguna que justifique la negativa al requerimiento realizado; lo que permite

¹¹⁹ Ecuador Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, “Sentencia”, en Juicio n.o 17985-2018-00171, 26 de marzo del 2018, 10.

observar la poca importancia que tiene el juez en verificar si a pesar de que se haya remitido la información cumple o no con el pedido realizado y que este asume de inmediato que si no existe prueba alguna por parte del legitimado activo, la razón tiene la parte legitimada pasiva.

Se observa además en estos procesos, que los jueces se olvidan del rol que ejercen con relación a la prueba, ya que según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su art. 16 señala que le juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas,¹²⁰ entendiéndose que esta actividad es facultativa; sin embargo, al analizar dichas sentencias se muestra rasgos de un rol pasivo de los jueces similar a lo que ocurre en los procesos de otras materias. Al respecto, es necesario señalar lo que indica Angélica Porras Velasco:

Respecto de la prueba en materia de garantías constitucionales es menester mencionar la amplia potestad que se da al juez para participar en la solicitud y práctica de las pruebas. Esta nueva actividad hace que se abandone el principio dispositivo común a todas las materias, por el cual el juez tenía un papel pasivo en la solicitud y producción de la prueba, negándole expresamente la posibilidad de desviarse de los hechos alegados y la prueba aportada por las partes.¹²¹

En ninguno de los procesos constitucionales analizados se notó que los jueces hagan uso de la facultad concedida por la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional respecto de la prueba.

En la causa 17203-2018-00295 referente a una acción de Habeas Data tramitada en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, se observa también la confusión del objeto de cada garantía jurisdiccional, pues en la argumentación de las sentencias se nota como el juez tienden a confundir los requisitos de procedencia de una y otra garantía jurisdiccional, así se precisa lo siguiente: “Además no indica cual ha sido la violación o vulneración de los derechos fundamentales, requisito indispensable para procedencia de la acción de protección constitucional”.¹²² En el presente caso, de esta manera se

¹²⁰ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010, art. 16.

¹²¹ Angélica Porras Velasco, “La prueba en los procesos constitucionales: aproximaciones a los principales retos en el caso ecuatoriano”, en *Apuntes de Derecho Procesal Constitucional*, ed. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco (Quito, EC: Corte Constitucional del Ecuador para el período de Transición / Editorial Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012), 59-60.

¹²² Ecuador Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, “Sentencia”, en Juicio n.o 17203-2018-00295, 15 de febrero del 2018, 7.

argumenta la no procedencia del habeas data confundiéndose esta acción con una de protección, siendo que no pueden confundirse dichas garantías jurisdiccionales, ya que el objeto de cada una es distinta y hay requisitos que de igual manera diferencian a estas garantías jurisdiccionales, en tal sentido, se confirma lo ineficaz que pueden llegar a ser las garantías jurisdiccionales poniendo en manos de las judicaturas especializadas en otras materias su tramitación.

Con relación al indicador de celeridad, de las 15 sentencias analizadas, observamos que tanto acciones de habeas corpus como medidas cautelares, han sido tramitadas dentro de términos oportunos señalados por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y esto obedece a la naturaleza cautelar que tienen estas acciones. Los casos relacionados a las otras garantías se han tramitado fuera de los términos que señala la normativa, pues esta situación obedece a los múltiples inconvenientes que tenga la Judicatura.

4.3.Sentencia motivada (lógica, razonabilidad y comprensibilidad)

Es necesario puntualizar, que hemos tomado como indicadores los tres elementos que la Corte Constitucional estableció para que se cumpla la motivación de las decisiones, ya que se han seleccionado casos del año 2018.

Revisadas que han sido las 15 sentencias, respecto de la motivación se colige que en cada una de ellas no siempre se toman en cuenta los parámetros que configuraban la motivación, en la mayoría se puede notar que gran parte de la sentencia es dedicada a la transcripción de argumentos presentados por las partes procesales y un análisis corto, no completo respecto del por qué aceptar o negar una garantía jurisdiccional.

Así también notamos que existe un abuso de la transcripción de la normativa que puede adecuarse al caso en concreto o simplemente estas normas son mencionadas; por ejemplo, en el caso 17985-2018-00171, encontramos que la judicatura se limita a transcribir los argumentos señalados en la audiencia por las partes procesales y por otra parte la transcripción de normas relativas al tema, omitiendo cada uno de los elementos que conforman la motivación, así se expresa lo siguiente:

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el art. 11 numerales 5 y 8, 18, 91, 424, 425, 436 numeral 3 CRE y los arts. 3 y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en concordancia con la Sentencia Nro. 002-09-SAN-CC; y, en virtud que, la seguridad jurídica como principio es “ Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que integra,” y como derecho de

protección constitucional (...) se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes,” como son las transcritas e invocadas en esta sentencia y que garantiza a los ciudadanos una adecuada administración de justicia. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LA LEY, se rechaza la Acción de Acceso a la Información Pública planteada por el señor Dr. Manuel Esteban Rizzo Valladares.¹²³

La observancia tanto de la lógica, razonabilidad y comprensibilidad era de carácter obligatorio, pues la no observancia de estos elementos se consideraba que la decisión no estaba motivada, contraviniendo así una de las garantías básicas del debido proceso.

4.4.Ejecución de las sentencias

Con relación a la ejecución de las sentencias, de las 15 sentencias analizadas verificamos que una de ellas fue favorable para el legitimado activo, corresponde a una acción de acceso a la información pública No. 17295-2018-00371, propuesta por el Dr. Jaime Arnulfo Santos Basantes en su calidad de Procurador Judicial de Julio Cesar Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana en contra del Consejo Nacional Electoral y Procuraduría General del Estado, pues aceptada que ha sido dicha acción, a través del sistema del Consejo de la Judicatura no se verifica que se haya ejecutado dicha sentencia.

Independientemente, de que se haya entregado la información de manera extrajudicial al legitimado activo, pues era necesario por parte de la Judicatura dar seguimiento a dicho cumplimiento conforme las facultades que le atribuyen la Constitución y la ley.

4.5.Plazo razonable

El plazo razonable también constituye un elemento esencial de la tutela judicial efectiva, en este sentido, de las sentencias analizadas podemos determinar que no todas han sido sustanciadas ni resueltas dentro de un plazo razonable, a excepción de las medidas cautelares y acción de habeas corpus analizadas, pues en los otros procesos no

¹²³ Ecuador Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, “Sentencia”, en Juicio n.o 17985-2018-00171, 26 de marzo del 2018, 13.

se evidencia justificación alguna para que estos procesos no se hayan tramitado dentro de los términos que dispone la ley, tampoco que hayan incidentes por parte de las partes procesales.

A través de este ejercicio hemos comprobado entonces, que es necesaria la implementación pronta de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales para que las mismas no sean conocidas por cualquier juez de cualquier materia en primera y segunda instancia, con el fin de precautelar el contenido esencial de la tutela judicial efectiva y por la importancia que merecen las garantías jurisdiccionales en un Estado constitucional de derechos y justicia al proteger derechos fundamentales de los ciudadanos.

Conclusiones

La tutela judicial efectiva es considerada como un derecho fundamental, es así como la revisión de los distintos fallos emanados por la Corte IDH, de legislación europea y latinoamericana relevante nos ha permitido determinar los elementos constitutivos de la tutela judicial efectiva. Del análisis de estos elementos se desprende que no solo constituye el acceso al órgano jurisdiccional, sino que este derecho fundamental debe ser observado desde el inicio mismo del proceso hasta su finalización, tomando en cuenta que los procesos no siempre finalizan con una sentencia, así este derecho fundamental se constituye por los siguientes elementos: acceso a la justicia, observancia del debido proceso, decisiones motivadas y la ejecución de las mismas dentro de un plazo razonable.

En nuestro país, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha logrado delimitar el contenido de la tutela judicial efectiva, así se la dota de tres elementos plenamente marcados: el acceso a la justicia, la observancia de la debida diligencia y la ejecución de la decisión. Como podemos observar dichos elementos concuerdan con lo que nos ha indicado la Corte IDH al respecto, fue necesario entonces aterrizar en el contenido de la tutela judicial efectiva a fin de determinar en qué elemento se podría estar vulnerando a la tutela judicial efectiva respecto de la falta de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales

En cuanto al primer elemento, esto es, el acceso a la justicia, entendemos que no existe vulneración respecto de la tramitación de garantías jurisdiccionales por parte de las judicaturas no especializadas, pues estos tienen la competencia para tramitarlos y la ciudadanía cuenta con garantías de acceso al órgano jurisdiccional, es decir, no existe trabas para interponer una garantía jurisdiccional.

Respecto del segundo elemento que hace referencia a la debida diligencia, diremos que la observancia del mismo recae en el juez al verificarse su conducta respecto de la tramitación de la causa, la observancia de las normas previamente establecidas, que sean aplicables y también la aplicación del debido proceso.

Es necesario mencionar que quienes dirigen la Función Judicial son los encargados de establecer las diferentes judicaturas conforme las necesidades de la ciudadanía; por lo tanto, se encuentran en la obligación de tomar en cuenta el principio de especialidad como rector de dicha función para el establecimiento de dichas

judicaturas. Entonces, no necesariamente se le puede atribuir al juez la inobservancia de este principio.

Por otro lado, los procesos judiciales no siempre concluyen con una sentencia, y a esto se refiere el tercer elemento de la tutela judicial efectiva, pues las decisiones de los jueces son de obligatorio cumplimiento, caso contrario, la ley prevé sus sanciones. Así mismo, el juez deberá realizar las acciones posibles por exigir el cumplimiento de su decisión, no se ha generado un mecanismo que permita que el juez realice el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de garantías jurisdiccionales dentro de un plazo razonable.

En este sentido, se podría tomar como ejemplo al caso peruano que cuenta con judicaturas especializadas dedicadas a tramitar garantías jurisdiccionales a diferencia de nuestro país y es que sus consideraciones para el establecimiento de estas judicaturas se han basado en el respeto al principio de especialidad garantizado en el Código Procesal Constitucional y demás instrumentos legales y de carácter administrativo que prevén la creación de estas Judicaturas, resaltando además el objeto mismo de las garantías jurisdiccionales y la importancia de su tramitación urgente.

Finalmente, en nuestro país se deberían establecer judicaturas especializadas en acciones constitucionales, tanto de primer nivel y contar con salas especializadas en esta materia en las diferentes Cortes Provinciales, con la finalidad de garantizar la observancia del principio de especialidad, pues la inobservancia de las normas previamente establecidas acarrea la vulneración de la tutela judicial efectiva en su elemento de debida diligencia.

Bibliografía

- Aguirre, Vanesa. “El Derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos” *Foro Revista de derecho*, N° 14.2010.
- Araújo, Oñate Rocío Mercedes. “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, *Estudios Sociojurídicos* 13, n. 1 (2011): 258, <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1513>.
- Benavides, Jorge Ordoñez. “Un repaso a la teoría general de los derechos fundamentales”, en *Manual de Justicia constitucional ecuatoriana*, ed. Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz, 73-98. Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013.
- Carbonell, Miguel. *Constitucionalismo y Democracia*. México: Editorial Porrúa. 2004.
- Chamorro Bernal, Francisco. *La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch. 1994.
- Colombia. *Constitución Política de Colombia*. Gaceta Constitucional. 4 de julio de 1991.
- Colombia. *Código General de Procesos*. Diario Oficial 48489, 12 de julio de 2012.
- Colombia Corte Constitucional República de Colombia. “Sentencia”. C-318/98. 30 de junio de 1998.
- Colombia Corte Constitucional República de Colombia. “Sentencia”. T-476/98. 8 de septiembre de 1998.
- Colombia Corte Constitucional República de Colombia. “Sentencia”. C-279/13. 15 de mayo del 2013.
- Colombia Corte Constitucional República de Colombia. “Sentencia”. T-247/07. 10 de abril de 2007.
- Cortés, Iván René Albornoz. “El acceso a la justicia a la luz del Estado social de Derecho en Colombia”. *Revista Científica Gen. José María Córdova*, n.º 16 (2015): 81-103, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v13n16/v13n16a05.pdf>.
- Corte IDH. “Sentencia de 13 de octubre del 2011 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay 13 de octubre de 2011.

- Corte IDH. “Opinión Consultiva de 6 de octubre de 1987 (Serie A: Fallos y Opiniones No. 9)”. 6 de octubre de 1987. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf?view=1>.
- Corte IDH. “Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam. 28 de noviembre de 2007. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 30 de octubre de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Bayarri vs. Argentina. 30 de octubre de 2008. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. 30 de mayo de 1999. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 5 de julio de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Cantos Vs. Argentina. 28 de noviembre del 2002. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 5 de julio de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. 5 de julio de 2011. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 31 de agosto del 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Furlan y familiares vs. Argentina. 31 de agosto del 2012. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 28 de febrero del 2003 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso “Cinco Pensionistas” vs Perú. 28 de febrero del 2003. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 7 de febrero del 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Acevedo Jaramillo y Otros Vs Perú. 7 de febrero del 2006. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_144_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 27 de abril de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso Fornerón e hija vs Argentina. 27 de abril del 2012. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf.
- Corte IDH. “Sentencia de 15 de septiembre de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Caso “Masacre de Mapiripán vs Colombia. 15 de septiembre de 2005. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf.

- Corte IDH. “Sentencia de 1 de febrero del 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. López Álvarez vs Honduras. 1 de febrero del 2006. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf.
- De Bernardis, Luis Marcelo. *La Garantía Procesal del Debido Proceso*. Lima: Cultural Cuzco S.A, 1995.
- De Sousa, Boaventura. *Derecho y Emancipación*. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012.
- Ecuador. *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.
- Ecuador. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial 52, Suplemento, 22 de octubre de 2010.
- Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*. “Registro Oficial, Suplemento 544, 9 de marzo de 2009.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia” N.º 030-10-SCN-CC. En caso N.º 0056-10-CN. 10 de marzo de 2014.
- Ecuador, Corte Constitucional. “Sentencia” N.º 015-16-SEP-CC. En caso N.º 1112-15-EP de 13 de enero del 2016.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”. en *Juicio n.º: 0385-11-EP*, 24 de noviembre de 2011, 7.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador. “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0530-10-JP*. 22 de marzo de 2016.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”. en *Juicio n.º: 0385-11-EP*, 24 de noviembre de 2011, 7.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador. “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0530-10-JP*. 22 de marzo de 2016.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0960-10-EP*. 4 de junio de 2013.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”, en *Juicio n.º: 01616-11-EP*. 9 de abril de 2014.
- Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia”, en *Juicio n.º N.º 1112-15-EP* .13 de enero del 2016.
- Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” en *Juicio n.º 1943-12-EP*, 25 de septiembre del 2019.

- Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” en *Juicio n° 1209-14-EP*, 18 de diciembre del 2019.
- Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” en *Juicio n° 1470-14-EP*, 15 de noviembre del 2016.
- Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia” en *Juicio n° 1234-14-EP*, 11 de marzo del 2020.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0782-13-EP*, 22 de julio del 2015.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 0260-15-JH*, 20 de junio del 2018.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 1256-13-EP*, 19 de noviembre del 2019.
- Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia”, en *Juicio n.º: 985-12-EP*, 29 de julio del 2020.
- Ecuador Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. “Sentencia”, en Juicio n.o 17203-2018-00295, 15 de febrero del 2018.
- Ecuador Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. “Sentencia”, en Juicio n.o 17985-2018-00171, 26 de marzo del 2018.
- Echandía, Hernando Devis. *Teoría General del Proceso*, 2.^a ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997.
- España. *Constitución Española*. Agencia Estatal de Boletín del Estado. 29 de diciembre de 1978.
- Espinosa, Carla. *Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral*. Quito: V&M Gráficas, 2010.
- Espinosa, Eloy. *Jurisdicción constitucional impartición de justicia y debido proceso*. Lima: ARA Editores, 2003.
- Ferrajoli, Luigi. *La democracia a través de los derechos: el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político*. Madrid: Trotta Editorial, 2014.
- García Belaunde, Domingo. *Derecho Procesal Constitucional*, (Editorial TEMIS, Bogotá 2001), 25, <http://garciabelaunde.com/Biblioteca/DProcesalConstitucional.pdf>.

- Grijalva, Agustín. *Constitucionalismo en Ecuador*. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.
- Jara, María Elena. *Tutela Arbitral Efectiva en Ecuador*. Quito: Corporación de estudios y publicaciones, 2017.
- Marinoni, Luiz Guilherme. *Derecho Fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva*. Lima: Palestra, 2007.
- Montaña, Juan y Patricio Pazmiño Freire, “Algunas consideraciones acerca del nuevo modelo constitucional ecuatoriano”, en *Manual de Justicia constitucional ecuatoriana*, ed. Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz, 23-48. Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013.
- Montaña, Juan. “Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales”, en *Apuntes de Derecho Procesal Constitucional*, ed. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición, 2012.
- Morales Saravia, Francisco. *El Tribunal Constitucional del Perú: Organización y funcionamiento, Estado de la cuestión y propuesta de mejora* (Lima, Perú: Fondo Editorial Academia de la Magistratura, 2014).
- ONU Asamblea General. *Convención Americana de Derechos Humanos*, 22 de noviembre de 1969.
- ONU Asamblea General, *Convención Americana de Derechos Humanos*. 22 de noviembre de 1969.
- ONU Asamblea General. *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. 23 de marzo de 1976.
- Perú Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Resolución Administrativa n.o. 319-2008-CE-PJ, Diario Oficial “El Peruano”, 17 de diciembre 2008.
- Perú Tribunal Constitucional. “Sentencia”. 05728-2015-PA/TC, 20 de diciembre de 2017.
- Perú Tribunal Constitucional. “Sentencia”. 763-2005-PA/TC, 13 de abril del 2005.
- Perú. *Código Procesal Civil*. “El Peruano”, 22 de abril de 1993.
- Perú. *Código Procesal Constitucional*. Diario Oficial “El Peruano”. 31 de mayo del 2004.
- Perú. *Constitución Política*. “El Peruano”, 29 de diciembre de 1993.
- Porras, Angélica. “La prueba en los procesos constitucionales: aproximaciones a los principales retos en el caso ecuatoriano”, en *Apuntes de Derecho Procesal Constitucional*, ed. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito: Corte Constitucional del Ecuador para el período de Transición, 2012.

- Quintana, Ismael. *La Acción de Protección*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016.
- Robert, Alexy. *Teoría de los derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
- Robles, Luis, Elmer Robles, Pepe Melgarejo, y Wilfredo Montañez. “Los juzgados constitucionales para una protección eficaz de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Áncash”, https://www.researchgate.net/publication/328970124_Los_juzgados_constitucionales_para_una_proteccion_eficaz_de_los_derechos_constitucionales_en_el_Distrito_Judicial_de_Ancash.
- Rodríguez Santander, Amparo y residualidad. *Las interpretaciones (subjettiva y objettiva) del artículo 5°. 2 del Código Procesal Constitucional. Justicia Constitucional (revista de jurisprudencia y doctrina)* (Lima: Palestra Editores, 2005), 97-136, citado en Luciano López Flores, *El Control Constitucional en Perú: ¿Un modelo aún por armar?*, Vox Juris, Vol.34 N° 2, Universidad de San Martín de Porres (2017), pág.73-97, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6222555.pdf>.
- Wilenmann, Javier. “La administración de justicia como un bien jurídico”. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVI*, (2011): 531-73. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rdpucv/n36/a15.pdf>.
- Willam, Gabriel Rodríguez. “Ley reformatoria al artículo 151 del código orgánico de la función judicial que determina. - “los jueces conocerán todos los asuntos que se promuevan dentro del territorio de la república, cualquiera sea su naturaleza”, vulnerando el principio de especialidad judicial, que integra la tutela judicial efectiva.” (tesis maestral, Universidad Regional Autónoma de los Andes, 2015), 37, <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1847/1/TUAMDC045-2015.pdf>.
- Wilma, Lizeth Machado Castillo, “El principio de especialidad aplicado en los casos de tenencia de niñez y adolescencia y su afectación al derecho de motivación.” (tesis maestral, Universidad Andina Simón Bolívar, 2018), 46, <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6171/1/T2599-MDE-Machado-El%20principio.pdf>.
- Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia*. Madrid: Editorial Trotta, 1995.

Zaidán, Salim. *Neoconstitucionalismo. Teoría y Práctica en el Ecuador*. Quito: Librería jurídica Cevallos, 2012.